



Defender los pueblos





**PROGRAMA
SOMOS DEFENSORES**
PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN A
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS



**HACEMOS
MEMORIA**



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**



Embajada de Noruega



cooperación
alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Defender los pueblos

Defender los pueblos

© Hacemos Memoria

© Programa Somos Defensores

ISBN: 978-628-7592-20-9

ISBNe: 78-628-7592-21-6

Primera edición: noviembre de 2022

Comité editorial: Juan Camilo Castañeda, Lourdes Castro, Patricia Nieto, Sirley Muñoz, Víctor Casas, Yhobán Camilo Hernández

Coordinación del proyecto: Juan Camilo Castañeda

Autores: Juan Diego Restrepo Toro, Jorge Escobar Banderas, Ana María Saavedra, Claudia Ortega, Germán García Barrera, Gina Juliet Rojas Hoyos, Saulo Guerrero Córdoba, Carlos Antonio Mayorga Alejo

Imagen de cubierta: *Árboles Frutales*, serie Oro Derivados, de Pedro Ruiz (2020); acrílico sobre lienzo.

Dibujo interior: *Libreta Negra N.º 9*, de Pedro Ruiz (2007); 21 x 15 cm, tinta sobre papel

Diseño y diagramación: Luisa Fernanda Bernal Bernal

Corrección: Juana Manuela Montoya Velásquez, Lina María Martínez Mejía

Contacto:

Hacemos Memoria

Calle 67 53-108 bloque 12, of. 427

Medellín, Colombia

www.hacemosmemoria.org

Programa Somos Defensores

Calle 19 4-88, of. 1302

Bogotá D. C., Colombia

www.somosdefensores.org

Se permite la reproducción total o parcial otorgando el crédito a los autores, sin modificar el material original ni usarlo con propósitos comerciales, salvo autorización escrita del Programa Somos Defensores y el proyecto Hacemos Memoria.

Las crónicas periodísticas que contiene este libro fueron reporteadas y elaboradas por los participantes del curso y proyecto “Colombia en transición: liderazgos sociales y construcción de paz”, ofrecido en el 2020 por Hacemos Memoria (Universidad de Antioquia) y el programa Somos Defensores.

Cómo citar este libro: Hacemos Memoria y Programa Somos Defensores. *Defender los pueblos*. Medellín: Nomos. 2022.

Contenido

Presentación.....	7
Prólogo.....	11
Voluntad de paz en las montañas de Anorí	15
Solo el pueblo salva al pueblo	37
La fuerza de las mujeres afro del norte del Cauca.....	61
Waishanyá, guardián del pueblo	85
Una historia de lucha por la autonomía campesina	111
¡Las señalan y les importa un bledo!	137
Baile exótico: una danza que protege a los jóvenes de Quibdó	161
Las mujeres campesinas y el arte de hacer una paz feminista.....	183

Presentación

Proteger los pueblos y las culturas

Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, la academia, instituciones estatales y organismos internacionales registran y denuncian las agresiones que se perpetrúan contra las personas que defienden los derechos humanos y a los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Se han publicado, además, numerosos y valiosos informes que exponen las causas de estas violencias, señalan la responsabilidad de diversos actores y recomiendan al Estado acciones para que los proteja.

Pese a ello, de acuerdo con los registros de Amnistía Internacional y Front Line Defenders, Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Según el programa Somos Defensores, entre enero del 2018 y junio del 2022 asesinaron en el territorio colombiano a 716 personas que se dedicaban a esta labor.

En los últimos años, el registro y las denuncias de la violencia contra los líderes y las lideresas produjo una narrativa, especialmente en los medios de comunicación, en la que son

retratados únicamente como víctimas. Una representación inevitable en el contexto de las agresiones que sufren, pero que deja en un segundo plano sus luchas. Conocemos el problema, pero como sociedad ignoramos en buena medida quiénes son los líderes y las lideresas sociales, cuáles son sus acciones cotidianas, qué los motiva, a qué personas, poblaciones o causas defienden y en qué contextos lo hacen.

No en vano, en el *Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia*, publicado en el 2019, el funcionario de las Naciones Unidas Michel Forst señaló como una de sus principales preocupaciones el hecho de que en Colombia no haya un reconocimiento público positivo del papel que cumplen los defensores y las defensoras en la democracia. Por el contrario, según el Relator Especial, ellos son deslegitimados y criminalizados por actores estatales, situación que favorece las agresiones contra esta población.

Ante esta problemática, Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquia, y Somos Defensores se aliaron en el 2020 con la intención de trabajar juntos en un proyecto que ayudara a visibilizar las luchas de los líderes y las lideresas sociales, y sus acciones colectivas y habituales, con las que aportan a la protección de los derechos humanos de miles de colombianos y con las que intentan poner límites a poderosos sectores, legales e ilegales, que amenazan la dignidad de comunidades enteras.

Consideramos que los medios de comunicación y los periodistas, en su misión cotidiana de retratar la realidad del país, tienen retos importantes con respecto a la representación y la construcción de imaginarios sobre los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Por eso, a finales del 2020, ofrecimos el curso “Colombia en transición: liderazgos sociales y cons-

trucción de paz”, en el que participaron treinta reporteros de distintas regiones del país.

Con periodistas que asistieron al proceso de formación emprendimos la tarea de contar historias sobre organizaciones que ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos. Como resultado de ese trabajo colectivo presentamos la colección editorial *Defender*, tres libros con veinticuatro relatos periodísticos sobre colectivos que ejercen algún tipo de liderazgo social en diversas zonas del país.

Defender los pueblos, el segundo libro de la colección, presenta ocho historias escritas por periodistas de distintos departamentos de Colombia, que describen los esfuerzos de colectivos que luchan por conservar las culturas de los pueblos étnicos y proteger las diversas expresiones de la vida en el país.

En *Defender los pueblos* el lector podrá conocer la experiencia de 120 firmantes de paz de las FARC, que se reintegran a la vida civil en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Anorí, donde han restablecido los vínculos sociales con otros habitantes del municipio mediante la ejecución de proyectos productivos; la historia de la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), que protege los derechos humanos de la población desplazada del suroccidente de Colombia; la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), una organización que salvaguarda los derechos de las comunidades negras en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; la emisora Waishanyá, que divulga y protege las prácticas culturales y la lengua del pueblo indígena kamëntšá biya, en Putumayo; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), que defiende la soberanía alimentaria y la autonomía territorial de los campesinos en el oriente del país; la organización Femidiversas, que lucha para erradicar las vio-

lencias que se producen en contra de las mujeres y la población LGBTIQ+, en Boyacá; la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, que a través de prácticas artísticas cuida la vida de los jóvenes de Quibdó; y el colectivo Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz, que persigue una paz feminista en las veredas del Líbano, Tolima.

Confiamos en que mostrar su labor y sus luchas ayude a que la sociedad reconozca el aporte invaluable que estas personas hacen a la democracia colombiana y, a la vez, contribuya a atenuar la estigmatización a la que son sometidas.

Prólogo

Una fuerza invisible

En mis primeros años como reportero, mientras descubría pueblos devastados por el conflicto armado o a causa de la actuación de funcionarios corruptos e incapaces, me resultaba inexplicable que este país no se hubiera deshecho debido a la imposibilidad que tienen millones de colombianos de garantizar el derecho a la vida a sus familias y de acceder a la educación, la salud, la vivienda y, en miles de veredas, al menos a una vía transitable para sacar las cosechas.

¿Qué fuerza invisible y poderosa lo sostiene?, pensaba. Comencé a hallar la respuesta en Ciudad Bolívar, aquella gigantesca colmena que miles de familias de migrantes y desplazados por la guerra comenzaron a construir, a finales de los años setenta, en unos cerros áridos, hostiles y de heladas ventiscas, en el profundo sur de Bogotá.

Mientras más recorría sus callejones de tierra, más admiraba la tenacidad de aquellos hombres y mujeres que llegaban por oleadas desde regiones remotas, con sus corotos a la espalda, y que de la noche a la mañana levantaban un nuevo barrio. Cuan-

do algún reportero se aventuraba por aquellas lomas salpicadas de ranchos de plástico, latas y cartón, sus habitantes lo remitían a la persona que llevaba la vocería de la nascente comunidad. Casi siempre era un “don” y a veces una “doña”. Así los llamaban por respeto. “Vaya busque a don Juan. Dígale que aquí hay un periodista”, les decían a sus hijos y estos salían a la carrera y regresaban minutos después con un personaje a quien se le sentía la rudeza de la vida en el primer estrechón de manos.

Guiados por estas personas, los habitantes de Ciudad Bolívar empezaron a conformar minúsculas organizaciones que se hacían cargo de sus necesidades principales: las vías, el agua y la atención en salud. En algunas partes los llamaban comités, y existían comités para la olla comunitaria, la convivencia, el cuidado de los niños y todo lo imaginable. Ese proceso se convirtió en una escuela, y años después aquellas semillas germinaron en decenas de grupos infantiles y juveniles.

Entonces entendí que esos “dones” y “doñas” de Ciudad Bolívar, Cauca, Caquetá, Chocó y Putumayo, y sus grupos comunitarios conformaban una poderosa y multitudinaria fuerza, capaz de mantener unidos los pedazos de ese país de la periferia que libra una lucha diaria a espaldas del resto de la nación, desde donde se les mira con sospecha, se les señala y se busca sacarlos del camino.

Si denuncian la destrucción de un río o reclaman aulas, vías o puestos de salud, les advierten que no se metan en lo que no les importa, en una clara alusión a que lo público es un territorio colonizado para las fechorías de ciertos personajes, y vedado para el ciudadano común y corriente.

A pesar de los riesgos, esa gigantesca red se sigue fortaleciendo con miles de pequeños colectivos dispersos en barriadas y caseríos, y a ellos se debe, en parte, que exista alguna gobernabilidad en regiones donde poco o nada le conocen la

cara al Estado. Allí, esos “dones” y “doñas” resultan más importantes para sus comunidades que los ministros, porque son quienes ayudan a resolver los problemas que los otros quizá nunca conocerán.

Ahora, muchos años después, volví a encontrar esos liderazgos durante la lectura de las historias que conforman este libro. Están representados por Paula Quiroga y los demás integrantes de la Asociación Nacional Campesina de Aguazul, Casanare; Clemencia Carabalí y las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca; Berenice Celeita, defensora de los derechos humanos en el suroccidente; Marcelino Chindoy, comunicador indígena de la radio Waishanyá del Sibundoy, Putumayo; Marisol Coronado y las mujeres campesinas del Líbano, Tolima; los Jóvenes Creadores del Chocó, y la organización Femidiversas, de Boyacá.

Estas personas ayudan a recomponer los tejidos que los corruptos y los violentos (armados y no armados) despedazan con sus acciones o sus palabras. Noventa y nueve de estos líderes fueron asesinados en Colombia entre enero y junio del 2022, según el Programa Somos Defensores. También asesinaron en ese lapso a 32 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmantes del acuerdo de paz. Ellos están representados en esta obra por los líderes y los trabajadores de Confecciones La Montaña, de Anorí, Antioquia.

La diversidad de las historias, de las memorias individuales que ayudan a reconstruir la memoria colectiva del liderazgo comunitario en Colombia, hace de este libro una pieza invaluable. Es el testimonio de aquellas personas que reconstruyen día a día el país y que claman a una sola voz: “Que no nos sigan matando”.

José Navia Lame

Voluntad de paz en las montañas de Anorí

Por Juan Diego Restrepo Toro

Juan Diego Restrepo Toro (Medellín, 1982). Periodista y magíster en Salud Colectiva de la Universidad de Antioquia, donde se ha desempeñado como profesor, investigador, periodista y comunicador digital. Como salubrista, ha trabajado con colectivos de la cultura raizal de San Andrés y Providencia. También ha participado en proyectos que promueven la movilidad segura y sostenible. Autor del libro *Una familia en clave morse*.

Cinco años después del Acuerdo Final de Paz, muchas cosas han cambiado para los 120 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— que apuestan por los proyectos productivos en Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Algunos se han reunido con sus familias o han formado nuevos hogares. A pesar de la crisis económica y del mal estado de las carreteras, han logrado consolidar sus emprendimientos. En Confecciones La Montaña, por ejemplo, los exguerrilleros tienen contratos de trabajo a término definido, pero no tienen vivienda individual, sino que siguen durmiendo en salones compartidos, sin privacidad, donde fueron instalados transitoriamente.

María de los Ángeles Tapasco ingresó a las FARC a los quince años. Tiene ojos negros almendrados, manos pequeñas y cabello largo. “¡A la orden, los morrales!”, les dice a los transeúntes de la feria de emprendimiento Hecho en Paz, que reúne proyectos productivos de reincorporación a la vida civil. En su cuaderno anota el nombre y el valor de cada producto vendido de Confecciones La Montaña: morrales, tulas, canguros y manos libres, de treinta mil pesos en adelante. Se dirige a los compradores de manera respetuosa. Su voz es firme. Les explica que también confeccionan billeteras, riñoneras, piñeras, pantalones, morrales escolares y hamacas, pero se lamenta porque no los pudieron traer desde Anorí por las dificultades logísticas y de transporte. Luego les entrega la mercancía en una bolsa de tela que dice “La Montaña - Voluntad de Paz”.

Hay nubarrones en el cielo. El sol se filtra por los techos de tela de los toldos. Es la mañana del 24 de noviembre del 2021 y la noticia del día en Colombia es que se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC. La feria hace parte de una serie de eventos nacionales de conmemoración y fue organizada en la plazuela La Alpujarra de Medellín. Hasta aquí llegaron antiguos combatientes, hoy emprendedores, de Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó, Quindío y Risaralda. Es una mezcla de lo pacífico, lo andino y lo caribeño: collares ébêra, cerveza roja, gelatina de pata y otros postres, adornos en macramé, sombreros artesanales, jabones ecológicos, pren-

das estampadas, tejidos tradicionales y ancestrales, marroquinería, relojería, joyería, orfebrería, café, chocolate y miel.

“La paz es productiva”, dice en el portón de bienvenida de la feria, donde hay una galería con los retratos de hombres y mujeres diversos en relación con su edad, su etnia y sus facciones, líderes sociales que fueron asesinados durante estos cinco años. Una carpa del tamaño de un auditorio mediano está dispuesta para la Primera Rueda de Negocios por la Paz, con la cual quieren fortalecer las redes de apoyo mediante ofertas de negocio.

A María de los Ángeles le queda un sabor “agridulce” de la implementación del acuerdo. El equipo de La Montaña ha consolidado sus líneas de productos de uso al aire libre, deportivos y de montaña. Según ella, esto implicó un cambio en su visión de país, porque ahora buscan la transformación social sin las armas, mediante el trabajo. “Que nos dejen sacar los productos por la vía legal y que no nos sigan matando”, expresó. Ya no hay una disciplina militar. A diferencia del “monte”, donde recibía órdenes militares, explicó que la jerarquía de mandos se modificó y viró hacia la organización cooperativa, con comités donde se delibera y se decide sobre temas clave, como la producción y la venta. Lo mismo ha sucedido para regular la convivencia en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —ETCR— Jhon Bautista Peña, en la vereda La Plancha, a una hora por vía sin pavimentar del casco urbano de Anorí.

“No tenemos casas individuales”, afirmó con voz amarga al referirse a las estructuras comunitarias donde viven: “Seguimos así, como cuando llegamos a esos cajones. Si tengo mi compañero, pues lo comparto con él. Pero no puedo tener un animalito porque le hace daño al vecino. ¡Estamos ahí todos encajados!”. Se refiere a unos módulos de vivienda de techo de

zinc, paredes delgadas y del tamaño de unas aulas de clase, a donde fueron llegando integrantes de los frentes 36 y 9 de las FARC, y de la columna móvil Mario Vélez, que operaban en las regiones del Norte, el Nordeste, el Oriente, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueños, así como en regiones de Córdoba y Chocó.

Su vida personal ha tenido varias modificaciones. Ahora puede llamar a su familia a menudo y visitarla de vez en cuando en Quinchía, Risaralda. “Por allá no puedo decir que soy reincorporada, porque mi familia está en una zona donde hubo excombatientes y donde ha habido paramilitares. No siento la misma tranquilidad que en Anorí, donde hay gente que compartió nuestras ideas, otros que no, tal vez algunos tengan su resentimiento, y, sin embargo, sentimos respeto; mientras que, por la tierra mía, yo no puedo llevar estos bolsos y morrales, ni dar a conocer mi trabajo”, cuenta María de los Ángeles.

Ella solo cursó la escuela primaria. Su padre, un campesino de edad avanzada, trabajaba por días y carecía del dinero para darle los uniformes, la lonchera o los pasajes diarios para movilizarse desde La Montañosa, vereda donde nació, hasta el colegio. En la adolescencia asistió a las reuniones de la guerrilla. Recuerda que leía los folletos y panfletos de las FARC, porque le parecía que reflejaban las injusticias que la rodeaban. Llegó al Nordeste antioqueño en un momento en que la guerra se vivía intensamente, después de que las FARC la trasladara desde el Eje Cafetero.

El taller de confecciones nació durante la guerra de manera clandestina. Hacían chalecos, uniformes y morrales resistentes a la selva, con bolsillos y cierres funcionales para el frente de batalla. Tras el acuerdo, el taller experimentó una transformación hacia el cooperativismo y la construcción de la paz territorial. Los materiales se mantuvieron, por su durabilidad, pero el estilo militar fue cambiado por otro más

comercial. “Un morral de estos, cargando pesado, le puede durar tres años, lo que nos duraba en la montaña”. Por eso han escogido el eslogan “Productos guerreros hechos en paz”, con el que hacen promoción en redes sociales, en venta directa y al por mayor. Para María de los Ángeles, el nombre de Confecciones La Montaña significa solidaridad.

Hay bochorno de mediodía y todavía no empieza a llover. Mientras espero a Leónidas, otro de los líderes de los proyectos, me tomo un café y converso con María de los Ángeles y otras mujeres de Anorí, como Mari Bella, quien me presentó el emprendimiento Esencias de la Montaña, una iniciativa que reúne a treinta y tres personas, de las cuales veintiocho son mujeres. En su mesa de venta hay pomadas, jabones, aceites para masajes y otros productos de origen botánico. El stand huele a selva, a paseo por el campo, a piel joven recién bañada.

“Nos dedicamos a la elaboración de productos cosméticos naturales. Tenemos nuestro laboratorio en el ETCR Jhon Bautista Peña de Anorí. Somos un proyecto productivo de reincorporadas de las FARC”, expuso Mari Bella con voz dulce, en su discurso fluido de vendedora, con el que explicó que este emprendimiento surgió en el comité de género del ETCR y que mediante redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp se pueden hacer pedidos a todo el país de extractos naturales como los que me ofrece hoy: caléndula, avena, carbón activado, lavanda, miel y menta; el jabón de sábila y romero que me entregó en la mano, sin compromiso, es un jabón orgánico y en barra, que vale siete mil pesos, se caracteriza por que exfolia, tonifica y regenera la piel, y es especial para las pieles grasas. También me dijo que quieren desarrollar una línea de productos de hogar con la elaboración de champús, limpiadores de piso y geles antibacteriales.

Me interesé en el logo de la marca que aparece en la publicidad de Esencias de la Montaña - Voluntad de Paz. Se trata de una mano femenina que ofrece una palma de iraca verde. Mari Bella me explicó que la imagen surgió del conocimiento empírico de la naturaleza que adquirieron en la montaña. Algunas de ellas fueron enfermeras de guerra y disponían de plantas aromáticas y medicinales. También conocida como palma toquilla o jipijapa, la palma de iraca ha sido importante para los artesanos del país desde hace siglos, por ejemplo, para la fabricación de sombreros.

La idea de exaltar la iraca surgió después de la realización de la Expedición Colombia BioAnorí, realizada entre el 17 y el 31 de julio del 2018, en la que participaron, como guías y coinvestigadores, cincuenta científicos de distintas universidades y diez excombatientes que se adentraron en la selva, en una región inexplorada, debido al conflicto armado, hasta el campamento de investigación Iracales, con el objetivo de hacer un inventario del mayor número de especies de “plantas (orquídeas y palmas), aves, mamíferos, insectos (mariposas), reptiles y anfibios”. Según la Universidad Eafit, se encontraron catorce nuevas especies reportadas para la ciencia, entre ellas dos cucarrones, diez plantas, un ratón arborícola y un lagarto.

Con los años, este grupo mayoritario de mujeres ha sumado experiencias formativas, como asesorías de químicos farmacéutas, talleres de género, de elaboración de esencias, de gestión de proyectos, de capacitación y financiación con entidades internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Embajada de Francia en Colombia y organizaciones no gubernamentales, con acceso a recursos económicos que les permitieron construir su laboratorio en una de las aulas comunitarias del ETCR, con un diseño y una dotación que

garantizaran las normas técnicas y de bioseguridad. Sienten que han fortalecido sus conocimientos con la mirada científica, de manera que ya saben cómo aprovechar las propiedades de las plantas en beneficio de sus compradores. Quieren ofrecerle a la sociedad un baño de paz.

Ya no son morrales para cargar minas, sino portaminas y útiles escolares

“Mi nombre es Guillermo León Chancí y soy firmante de la paz”, me dice un emprendedor que ingresó a las FARC en 1983. Me llamó la atención que no se presentara como Leónidas, que era el nombre con el que lo estaba buscando, y que usara la denominación *firmante de la paz*, que se suma a diversas expresiones que usaron las personas que entrevisté: *excombatientes, farianos, exfarianos, exguerrilleros, firmantes, reincorporados y comunes*.

Está acalorado y sediento. Acaba de llegar de la Movilización por la Vida y la Defensa de los Acuerdos, una marcha ciudadana que recorrió los casi tres kilómetros que hay entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra para pedir por la protección de la vida. Le doy tiempo a que se refresque mientras repaso las noticias del día en mi teléfono celular. Según Indepaz, 1.270 líderes sociales y 299 firmantes han sido asesinados en estos cinco años. También hubo una disminución en más del 95 % de los indicadores de desaparición forzada, las ejecuciones sumarias y los falsos positivos, el secuestro y la tortura.

Por otro lado, el balance de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas —ONU— indica que más de trescientos excombatientes y cuatrocientos setenta y siete defensores de los derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en este periodo. Además de reconocer logros como la reincorporación de unos trece mil excombatientes a

la vida civil y la consolidación de proyectos productivos, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los asesinatos de líderes locales, excombatientes y defensores de derechos humanos: “La violencia ha resurgido en las regiones afectadas por el conflicto. Las comunidades étnicas y las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas. Las amenazas y asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, con frecuencia mujeres y poblaciones indígenas; el desplazamiento y el confinamiento; la violencia contra las mujeres y la violencia sexual; el reclutamiento de niños: todo ello contraviene la paz. Cada muerte es en sí misma una tragedia”. Esta declaración la hizo esta mañana, en su visita al tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), en Bogotá, que busca ofrecer justicia a las víctimas del conflicto. En la ceremonia estuvieron delegados de distintos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el presidente Iván Duque, quien dijo que él ha hecho más por la paz que el Gobierno anterior, del expresidente Juan Manuel Santos, quien tuiteó que “la paz no es de nadie en particular, sino de los colombianos y del mundo entero”; y el excomandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño, que declaró: “Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto”.

Entre otras noticias del cubrimiento del quinto aniversario del Acuerdo Final, se destaca que nueve de cada diez excombatientes que dejaron las armas en el 2016 se mantienen en el proceso de reincorporación, lo que representa unas trece mil personas. Entre los acontecimientos internacionales, resalta que la Casa Blanca comenzó el trámite ante el Congreso de los Estados Unidos para que las FARC salgan del listado de organizaciones terroristas de ese país, un anuncio que pretende dar un espaldarazo al frágil Proceso de Paz, porque de hacerse

efectiva la medida, se liberaría la ayuda financiera de Estados Unidos para los proyectos que involucran a los excombatientes.

“No es posible hablar de garantías de implementación del acuerdo, cuando van más de trescientos firmantes asesinados”, aclara Guillermo León. Nos sentamos a conversar entre los toldos, sin prisa. Durante varios meses intenté agendar esta entrevista, por tratarse del gerente de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia, que agrupa proyectos de paz en los que participan 120 excombatientes, entre ellos una ladrillera, un emprendimiento de piscicultura y las iniciativas Miel de la Montaña, Esencias de la Montaña y Confecciones La Montaña. La cooperativa, que fue fundada por 80 personas a finales del 2017, en la vereda La Plancha de Anorí, ha ido creciendo hasta llegar a 120 personas que vienen de antiguos frentes guerrilleros.

La conversación no había sido posible por motivos extraordinarios. Tuve que cancelar nuestra primera cita en Anorí, tras recibir la noticia de que cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada del sábado 2 de octubre del 2021. A pesar de que conocía el pueblo, sentí miedo de viajar solo. La recomendación de colegas, excombatientes y funcionarios locales fue aplazar la visita. Dos semanas después hice un segundo intento, pero no pude viajar desde Medellín porque las lluvias afectaron la vía alterna por el municipio de Campamento, que suele permanecer en malas condiciones y que tiene un tramo largo sin pavimentar. Resulta que la carretera principal, que pasa por el municipio de Amalfi, está cerrada desde hace cuatro meses debido a que se han presentado varios derrumbes. Cuando finalmente visité Anorí, el 5 de noviembre del 2021, Guillermo León estaba en Quibdó, en un encuentro nacional de excombatientes para capacitar a emprendedores. Días después, el 9 de noviembre, estuvo en un encuentro con las víc-

timas en Urabá. Según el periódico *El Colombiano*, “Leónidas reconoció que fue uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril del 2001, que resultaron en una masacre en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rula. Un tema sobre el que las FARC se habían mantenido en silencio durante estos veinte años”. Finalmente conversamos hoy, 24 de noviembre del 2021, una fecha pertinente para reflexionar sobre el acuerdo.

“Me identifico con los dos nombres. Con Leónidas viví cuarenta años de guerra y el nombre Guillermo apenas lo estoy recuperando”, explicó con la voz ronca de una persona mayor. Nació en Ituango y se crió en Urabá. Se vinculó a las juventudes comunistas en 1976. Participó del histórico Paro Nacional de 1977 en Urabá, una movilización de distintos sectores en protesta por las medidas del Gobierno de Alfonso López Michelsen. Ingresó a la Unión Patriótica en 1984, pero en 1985 tomó la decisión de incorporarse a la lucha armada formando parte de las FARC.

Leónidas concuerda con María de los Ángeles en que la posibilidad de tener una vivienda le genera la mayor incertidumbre. “Seguimos en unas estructuras campamentarias que eran para seis meses y ya van para cinco años. Ahí no hay forma de tener una convivencia sana. El Gobierno nacional se comprometió con que este año compraba el terreno, todavía no lo ha comprado; que este año se hacían los estudios de prefactibilidad para la construcción de las viviendas, todavía no se ha hecho”.

Sobre los proyectos, su percepción es positiva. Confecciones La Montaña reúne a veinticuatro personas, entre ellas algunas en situación de discapacidad a causa de la guerra, y cuenta con un integrante de la población LGBTIQ+. Han abierto algunos puestos de trabajo para personas de la comunidad de la

vereda La Plancha, entre jóvenes y madres cabeza de familia no excombatientes. Lograron consolidar un mercado nacional que les permite sostenerse. La marca, que está registrada, les sirvió para extenderla a los emprendimientos de esencias y de miel. Este último reúne a dieciocho excombatientes, quienes procesan la miel para elaborar distintos productos alimenticios, y cuentan con un mercado en crecimiento. Por otro lado, el proyecto de piscicultura reúne a diecinueve reincorporados que ya están comercializando sus productos a pesar del lento proceso de instalación de los tanques y de la energía. El mal estado de las vías afecta las distintas iniciativas porque se encarecen los fletes, con ellos los insumos, y comercializar los productos es más difícil porque no se cumplen las proyecciones en el tiempo que se trazan.

—Después de su balance de los emprendimientos de Anorí y tras cinco años del Acuerdo Final, ¿lo han cumplido? —le pregunto.

—Hemos cumplido porque trajimos las máquinas de coser del monte para ponerlas a producir para la paz. Y no nos han cumplido porque, si bien nos han aprobado ciertos proyectos, eso es lo mínimo para un proceso de reincorporación política y económica que busque la transformación social del país. ¿Qué nos ganamos con que nos aprueben los proyectos productivos, si se sigue atacando al campesino, si no hay presencia del Estado en los territorios? —responde Guillermo León.

—¿A qué se refiere con “atacar al campesino”?

—Por ejemplo, el Gobierno incumplió en un tema crítico que es el punto 4 de los acuerdos (sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas), para lograr la soberanía alimentaria. La sustitución de cultivos de coca por frijol, yuca, ganado, plátano, marranos, gallinas... se ha implementado a medias. En Anorí, los productos que les entregaron a los campesinos fue-

ron de segunda calidad y con sobrecostos. No se ha realizado la entrega de los proyectos de nueve y de diez millones de pesos para dar garantía y sostenibilidad. El campesino, por necesidad, porque el Gobierno no le cumplió, tuvo que volver a reincidir, y la respuesta es la violencia.

—Hace tres semanas estuve en Anorí y me enteré de choques recientes entre el Ejército Nacional y campesinos en la vereda Los Trozos, por la erradicación forzosa, ¿qué pasó?

—Los campesinos dicen: si el Gobierno no nos cumplió, nos vemos obligados a volver a sembrar coca. Y esto tiene que ver con otros puntos importantes, como la reforma rural integral, la esperanza de la transformación del campo a través de los programas con enfoque de desarrollo territorial, pero eso se quedó en el limbo. La carga no puede quedar solo en los municipios, que tienen presupuestos bajos y muchas necesidades, sino en grandes proyectos que permitan el impacto regional.

—En los últimos años se ha evidenciado un deterioro en la seguridad, no solo en Anorí, sino en todo el país. ¿Ustedes se sienten tranquilos?

—Aparte de la ofensiva del Estado contra la población campesina, nos sentimos tranquilos. A pesar de que alrededor hay muchos actores armados y que nos afectan los actos violentos que se presentan, nosotros como excombatientes no hemos tenido mayores dificultades, gracias al aprecio que hemos tenido de las comunidades de Anorí.

—¿Cómo los afectó la pandemia del covid-19?

—Nos generó pérdidas y problemas internos. Tuvimos que parar los proyectos productivos, situación que no nos reconoció el Gobierno, que no tuvo una mano para ayudar.

—¿Y el paro nacional?

—Una semana antes de la marcha del 28 de abril, ya habíamos participado en la Peregrinación por la Paz, producto de

la falta de seguridad y de garantías, motivados por la persecución y por el incumplimiento del Gobierno Duque. Entonces también salimos al paro, que me recuerda al de 1977. En los años que siguieron hubo muchas marchas, pero las del 2019 y el 2021 se parecen a las de 1977 porque la gente participó de manera espontánea, no pueden decir que salió empujada por las FARC, sino por el hambre.

“Tampoco se alcanza a sentir una paz completa”

Visité Anorí antes de la feria de emprendimiento, el 5 de noviembre del 2021. Fueron ocho horas de viaje desde Medellín, cuatro por la carretera destapada del municipio de Campamento, que bordea el río Nechí, hasta subir a las cumbres de la cordillera Central, donde está ubicado el casco urbano. Vi a dos arrieros con una recua de mulas en el camino, trabajadores en un trapiche panelero, un gavilán en ascenso, una cascada a lo lejos, montes boscosos y deforestados. En las casas al pie de la trocha, mujeres en sus quehaceres, niños jugando, trabajando, vendiendo paquetes de papitas en las paradas del bus. Observé casas habitadas y abandonadas, algunas con grafitis pintados con aerosol negro y rojo, con mensajes a favor del Ejército de Liberación Nacional —ELN—, guerrilla activa en la zona.

Encontré un pueblo dinámico de viernes en la noche. La gente en la calle, los locales comerciales abiertos, música en las cantinas, restaurantes con buena asistencia, filas en puestos de comidas rápidas. En el parque principal unos hombres descargaron cajas de mercancía y bultos de vegetales de una chiva o carro de escalera, un tipo de vehículo que conecta a los campesinos de las veredas con las cabeceras municipales. Exhibidos en una estantería al lado de las cajas de pago de

un supermercado, hallé los huevos de codorniz y la miel de café que producen los excombatientes. Compré la marca Miel y Café La Esperanza. Textura espesa, color ámbar, sabor y aroma de café. La etiqueta tiene el eslogan “Excombatientes y campesinos, paz y compromiso”, al lado de la información nutricional y del número de teléfono para hacer pedidos. Se trata de un emprendimiento que es distinto al de Miel de la Montaña y que no hace parte de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia.

Los huevos de codorniz La Campesinita de la Montaña son otros de los productos de emprendimientos individuales que encontré en las tiendas. La iniciativa es de Luis Albeiro Soñeth, quien también se identificó como “firmante de la paz” en una entrevista telefónica. Era conocido como Teo durante la guerra. “Cuando se dio el tránsito a la normalización, empecé a estudiar, me empezaron a asesorar, yo estaba enfocado en liderar proyectos de distintas cosas, tuve gallinas, hasta que empecé a ensayar con quince codornices en el 2018”. Hoy tiene mil ochocientos codornices, con galpón, incubadora y los elementos necesarios para producir cajas de veinticuatro huevos, que valen tres mil pesos cada una. Después de cinco años de reincorporación, cree que el esfuerzo ha valido la pena. “Costó trabajo, sí. Hay que ser dedicado. No le queda a uno tiempo libre”, y agregó que ha trabajado en la ganadería y en el proyecto cooperativo de la ladrillera, con personas de distintas veredas que fabrican ladrillos ecológicos con una metodología de compresión de la arcilla de tierra para producir los bloques a presión.

Más tarde tuve la oportunidad de conversar con un grupo de investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que se hospedaron en el mismo hotel donde estuve. Una profesora que conoce y ha trabajado en el territorio anoriseño, tanto

con excombatientes como con familias campesinas, dijo que es difícil lograr que los excombatientes atiendan a un periodista o a un miembro de una organización, porque se sienten agotados entre las tareas diarias de los emprendimientos y la cantidad de personas que los contactan, no solo desde distintas unidades académicas de la universidad, sino de otras universidades, medios de comunicación, instituciones de cooperación internacional, del Estado o de derechos humanos. “Todos vienen buscando algo de ellos y cuando los llama alguien nuevo, lo primero que dicen es ¡otra persona más!”, reforzó la idea otro profesor.

Me preguntaron si ya conocía el pueblo. Les respondí que en abril del 2018 había tenido el gusto de visitar Anorí para escribir una crónica sobre las expectativas frente a la educación territorial para la paz que tenían los reincorporados a la vida civil. En sus testimonios, se resaltaba la esperanza de terminar la primaria, el bachillerato o la universidad. También reivindicaron los saberes que traían del monte, como la enfermería empírica, el conocimiento de las plantas y las confecciones. Luego me enteré de que algunos pudieron terminar sus estudios básicos y otros hicieron estudios técnicos. Las expectativas de los emprendedores entrevistados en el 2021 se han modificado. Se muestran interesados en capacitarse en comercio, ventas, atención al cliente, manejo de redes sociales y de plataformas web para sus proyectos productivos, entre otros temas relacionados. Antes de dormir, recordé a las mujeres excombatientes que fotografié en la visita del 2018; una de ellas me habló de “feminismo insurgente”. Esa noche llovió.

En la mañana del sábado 6 de noviembre, entrevisté a Rosmary Cortés Marulanda, coordinadora de la Casa de la Justicia municipal, para quien “Anorí es un municipio víctima”. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en el municipio vi-

ven 6.270 víctimas de distintos actores armados, 7.878 personas han sido reconocidas como declarantes del hecho victimizante en este territorio, y 17.006 personas han sido registradas como víctimas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para considerar la proporción, en el censo del 2018, Anorí tenía 14.502 habitantes, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE).

“Anorí todavía tiene algo bueno de este proceso de paz que iniciamos con tanto amor, pero que se ha ido desbaratando sin darnos cuenta. Yo en este momento pienso ¿qué quedó?”, se preguntó Rosemary, quien siguió de cerca la reincorporación porque se desempeñó hasta septiembre del 2020 como coordinadora de Desarrollo Comunitario municipal, que es la oficina donde se focaliza la atención a los líderes sociales y las Juntas de Acción Comunal. Es hija de padres anoriseños y tiene familiares en el pueblo. Resaltó que en Anorí ganó la opción del Sí en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, con el 64,9 %, teniendo en cuenta que el departamento de Antioquia fue un bastión de la opción por el No, que obtuvo el 62 %. “Nos dimos la oportunidad de decir sí. Es un municipio resiliente, sin negar la dificultad que hubo de poder compartir calles, espacios, comercios o reuniones con los victimarios. Estuvimos en la entrega de armas, desde el principio, cuando ellos nos presentaron de manera sensible la voluntad de hacer parte de una vida social normal. No se generó conflicto, pero sí barreras y temores. Hoy somos ejemplo en la relación del campesino anoriseño con los excombatientes de las FARC. Hay dolores, pero hubo aceptación. Pienso que Anorí sí le apostó a la reconciliación”.

Según Rosemary, las dificultades que han tenido los proyectos productivos se han podido superar con el trabajo de los reincorporados. Ha sido un proceso más lento de lo que

ella desearía, pues comenzó por aprender a escuchar, para luego compartir espacios que fueron “álgidos” al principio, que generaron “resultados maravillosos”, y que se expresan en “la buena relación entre el campesino anoriseño y los excombatientes”. Algunos de esos espacios fueron consejos de paz, mesas de reincorporación y el escenario Encontrémonos por la Reconciliación - Anorí 2018, especialmente recordado por haber sido un encuentro entre víctimas y victimarios de La Plancha. “Algunas víctimas pudieron hablar, pero otras quedaron con muchísimo dolor. Fue un espacio lindo, pero dejó heridas abiertas”. Le preocupa que en los últimos dos años de pandemia el trabajo conjunto se ha “desdibujado”.

Al salir de la Casa de Justicia, Rosemary me mostró las marcas frescas, en el piso y en la fachada, que dejó la explosión de una granada lanzada desde una moto en la madrugada del 11 de octubre, una semana después de la masacre que me había obligado a posponer esta visita. Hasta ahora no se sabe quién es el responsable.

El deterioro del orden público no es nuevo. A principios de noviembre del 2021, en la vereda Los Trozos hubo un intento de erradicación forzosa de cultivos de coca por parte del ejército y la policía, que generó enfrentamientos con los campesinos, quienes salieron a defender sus cultivos asegurando que el Gobierno nacional no les cumplió con los compromisos de la sustitución de cultivos. Ese también fue uno de los reclamos de los más de tres mil campesinos que se tomaron el parque principal, durmiendo en cambuches y cocinando en la calle, y que entraron a paro el 25 de abril del 2021, pocos días antes del inicio del paro nacional. Reclamaban la defensa frente a la minería informal y el apoyo al campesino no excombatiente. Rosemary Cortés calculó que fueron unas dos mil quinientas familias las que se inscribieron al programa de sustitución de cultivos de manera

voluntaria con el Proceso de Paz. Con el tiempo y el cambio en el Gobierno nacional, no se han consolidado los proyectos de sustitución por cacao, café, caña, frijol y otros productos.

Desde su fundación en 1808, Anorí ha tenido una economía ligada a la minería de oro, tanto legal como ilegal. Para los señores de la guerra, en el siglo xx el municipio se convirtió en un territorio estratégico por su ubicación y sus recursos. En 1973, el Ejército Nacional realizó la Operación Anorí contra el ELN, que dejó 33 muertos y otros 30 capturados; un golpe fuerte para este grupo guerrillero, que tardó diez años en volver. En los años ochenta llegó el frente 36 de las FARC. En los noventa, se extendieron los cultivos de coca para uso ilegal en las montañas anoriseñas, que sumados a la extracción de oro y a los proyectos hidroeléctricos, atrajeron y profundizaron la guerra en este municipio de 1.430 kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de Antioquia, que cuenta con 51 veredas y un corregimiento. Con la expansión del paramilitarismo, se creó el frente Héroes de Anorí, que hizo parte del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para el año 2000, los enfrentamientos aumentaron y 501 personas fueron desplazadas. Pero en el 2001, cuando comenzaron las aspersiones con glifosato por el aumento en las hectáreas de coca, esa cifra aumentó hasta 2.344 personas desplazadas ese año. “Los campesinos, desesperados por la guerra y porque sus cultivos y afluentes fueron contaminados, salieron expulsados”, según un informe de *Verdad Abierta*. En el 2006 se desmovilizó el bloque Mineros, aunque algunos de los paramilitares no dejaron las armas e integraron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Con la resiembra de la coca entran recursos económicos al municipio, pero aumenta la conflictividad y se fortalecen los grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC.

Avanzada la mañana, me encontré con varios campesinos reunidos afuera de la alcaldía, en el parque principal. Algunos hacían fila para reclamar kits de agricultura. Conversé con otros que ya habían reclamado insumos como semillas, alambres, herramientas y máquinas. “Es tiempo de sembrar”, me dijo un adulto mayor que estaba acompañado de un anciano y un joven. “Nosotros retrocedimos diez años, no solo en el tema de seguridad, sino en lo económico”, y se quejó de que cada vez le rinde menos el dinero, de las alzas en los precios de las materias primas, de los alimentos, por ejemplo, de los lácteos y la carne, y de los servicios necesarios para su familia, como los útiles escolares, y el valor del transporte a Medellín. Mientras me explicaba una manera fácil de sembrar la mata de plátano, los otros dos embalaron las cajas con cinta y las amarraron con cabuya a una pala con un azadón. Del conflicto armado no hablaron mucho, “no se sabe de dónde vienen las balas”, dijo el joven. Después compartí un café perico con el mayor de los tres, a quien le pregunté por la percepción de la seguridad en su vereda después de cinco años del Acuerdo Final. “Ha mejorado, sí. No se siente tanta incertidumbre como antes. Pero tampoco se alcanza a sentir una paz completa”.

El punto de venta de Confecciones La Montaña también está ubicado en el parque principal, sobre la carrera 30, dentro de un conjunto de locales comerciales, en un segundo piso. El taller está en el ETCR, en La Plancha. Además de los morrales y los textiles, también se venden libros que han sido escritos por exguerrilleros, entre ellos Martín Batalla. “Hemos generado alianzas con la sociedad. Tenemos compradores a nivel nacional con un centro de distribución de productos en Medellín, y quienes venden nuestros productos son estudiantes universitarios”, me contó Martín, quien ingresó a las FARC a los veinte años.

Hicimos la entrevista por videollamada porque recibió amenazas y se refugió en otro país. Eso afectó su trabajo en La Montaña, porque suspendió su aporte al manejo de las redes sociales de la marca, uno de los canales de venta a domicilio que les han resultado más efectivos. En su opinión, el cooperativismo es una herramienta fundamental para su proyecto de vida. “Firmamos un acuerdo por el cual nos comprometimos a incorporarnos a la vida civil a través de proyectos productivos que, en nuestra concepción, debían ser colectivos, y cuando miramos la legislación colombiana, vimos que lo que más se parecía a lo que queríamos era el cooperativismo, la economía solidaria, pero no solo en el proceso de reincorporación, sino para generar una transformación integral de los territorios”.

Martín Batalla nació en Manizales, en 1985. Descubrió su talento artístico en el 2000, cuando comenzó a hacer hiphop en las comunas de Medellín, después de escuchar la música que llegaba principalmente de Estados Unidos, con letras que cuestionaban el *statu quo*. “El hiphop aporta a la construcción del país de forma no violenta, en general el arte y la cultura”, dijo Martín, quien empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia en el 2001. Participó de la movilización social contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2005, en plena agudización del conflicto, cuando el Estado desplegó la política de seguridad democrática. El 10 de febrero de ese año, en medio de una protesta en la Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia, murieron las estudiantes de la Universidad Nacional Paula Ospina y Magaly Betancur. “Yo estaba al lado de ellas. Salí con el 73 % de mi cuerpo quemado y los oídos bastante afectados por la explosión. Cuando me dieron de alta en el Hospital San Vicente de Paúl, me recibieron con una orden de captura por terrorismo y rebelión, y me llevaron para la cárcel Bellavista, donde no tuve tratamiento médico.

Yo mantengo mi vena artística, pero tengo dos cirugías en el oído, por eso casi no grabo. Nos presentaron en los medios de comunicación como si fuéramos guerrilleros, cuando éramos estudiantes. Ese falso positivo judicial me llevó a empuñar las armas para defender mi vida y mi libertad”.

Después de guerrear en el frente 36 de las FARC, lo trasladaron a La Guajira, donde participó en un taller de confecciones que, entre otros productos, hacía prendas con propaganda política. Ahí se quedó hasta la firma de los acuerdos, cuando comenzó a hacer pedagogía artística de la paz en Bogotá, junto a otros exguerrilleros, con el objetivo de visitar escenarios de la ciudad para hablar de construcción de paz. Conoció Anorí en el 2018, cuando llegó a trabajar con la cooperativa. Nunca había estado ahí porque el frente 36 tuvo un área de acción que se extendió por el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. “La transformación ha sido grande. La región era un campo de guerra total, había bombardeos, ametrallamientos, asaltos, y el proceso de paz ha permitido que se viva de otra manera”, fue su balance después de cinco años de haber firmado el acuerdo.

El nombre de La Montaña representa mucho para Martín. “Es la transformación rural de la Colombia profunda. La Montaña nos protegía, allá vivíamos, de allá venimos”. Otros firmantes de la paz también le asignaron significados de solidaridad, conexión con el planeta, vínculo con la Madre Tierra o fecundidad del trabajo. Detrás de sus metáforas está la poderosa idea de convertir un taller de confecciones de guerra en construcción de paz. La realidad económica y social del país, su conflictividad y sus heridas abiertas son escollos en el camino de ascenso a la paz tan anhelada. Como la cima de una montaña, que parece inalcanzable, los reincorporados de Anorí saben que es utópica una paz sin conflictos, y que tendrán que resolverlos con su trabajo.

Solo el pueblo salva al pueblo

Por Jorge Escobar Banderas

Jorge Escobar Banderas (1997). Periodista inmigrante. Cursó estudios en comunicación social - periodismo en Venezuela y Colombia. Ha escrito para *Hecho en Cali*, *Realidad 360* y *El Espectador*. Actualmente ejerce el periodismo de forma independiente para medios alternativos como la *Agencia Internacional Pressenza*.

La Asociación para la Investigación y la Acción Social —llamada Nomadesc— es una organización social, encabezada por Berenice Celeita, una lideresa y defensora de los derechos humanos. Ella se la ha jugado toda por promover la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano. Una de las apuestas más representativas de Nomadesc ha sido la Universidad Intercultural de los Pueblos, un espacio donde los saberes académicos y técnicos se combinan con la ancestralidad de los territorios, para generar un proceso de articulación que facilita la construcción de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Berenice Celeita Alayón se despertó ilusionada la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985. Tenía quince años. Ese día, después de haber aprobado el examen de admisión, debía presentarse a una entrevista en la Universidad Externado de Colombia, donde quería formarse para alcanzar su sueño de ser presentadora de un noticiero. Esa mañana no imaginó que sería testigo de un acontecimiento nacional, que también le daría un giro a su vida. Al llegar al campus universitario, ubicado en el centro de Bogotá, percibió que el ambiente estaba caldeado. En una asamblea de estudiantes declaraban persona no grata al presidente Belisario Betancourt.

“Yo me asomé, miré lo que pasaba y luego me fui a preguntar que cuándo era la entrevista; entonces, me dijeron: “Mire, en este momento están pasando cosas terribles aquí en el centro de la ciudad”. “Nunca me imaginé la magnitud de lo que estaba ocurriendo”, recuerda Berenice.

El hecho que tenía lugar en ese instante era la toma del Palacio de Justicia a manos de la guerrilla Movimiento 19 de abril —M-19—. La acción de los insurgentes provocó una respuesta nunca antes vista por parte de los cuerpos de defensa del Estado. Las imágenes que vio Berenice eran propias de una película de acción, demostraban que el conflicto armado había llegado al centro político del país. Escapó del centro de Bogotá esquivando las balas, en medio del ruido de las detonaciones y de la gente que corría. Al llegar a su casa, con la voz nerviosa y un poco quebrada, le contó a su mamá lo que vivió.

Durante varios meses la opinión pública estuvo estremecida por lo ocurrido, el ambiente en el país era de desasosiego y asombro. Colombia vivía los estragos de una guerra que parecía radicalizarse con el pasar del tiempo. En estos hechos fueron asesinadas 94 personas, de las cuales once eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía, quien murió, según el informe de una comisión de la verdad que investigó los hechos en el 2005, por una bala disparada por un militar. Además, doce personas fueron reportadas como desaparecidas. La fuerza pública fue cuestionada por la manera en que se abordó la situación.

Inicio de clases

En el primer semestre de 1986, Berenice inició las clases de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Después de la experiencia que vivió el 6 de noviembre en el centro de Bogotá, quería comprender qué pasaba a su alrededor, por eso asistió emocionada a la primera semana de clases. Como un momento cúlspide de esos días de primípara, recuerda la sesión inicial de la asignatura instituciones políticas colombianas en la que Eduardo Umaña Mendoza sería su maestro.

Por esos días, él era un personaje público en Colombia porque fungía como abogado defensor de las familias de las personas desaparecidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Ese hecho no pasó desapercibido en el primer encuentro con sus nuevos estudiantes, a quienes les hizo una propuesta: invitar a alumnos de distintas carreras a hacer parte del área de investigación del caso que llevaba, para acompañar a las víctimas del Palacio de Justicia. Esa idea le llamó la atención a Berenice, quien le hizo saber a su nuevo maestro que estaba interesada en formar parte del grupo.

Al principio los integrantes del equipo no querían aceptar a Berenice porque apenas tenía dieciséis años. No obstante, gracias a su tenacidad y a su insistencia consiguió un puesto. Una de sus primeras tareas fue indagar en Medicina Legal por los cuerpos de las personas que murieron calcinadas. Luego, les ofreció un acompañamiento a los familiares de los desaparecidos. Ella afirma que en ese momento comenzó su ejercicio social como defensora de derechos humanos.

Por su excelente desempeño, Eduardo Umaña Mendoza la invitó a integrar el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde puso en práctica sus conocimientos en comunicaciones y aprendió sobre leyes y antropología. “Eduardo sí sabía a fondo la importancia de constituir equipos de investigadores, sabía la importancia de ir a terreno, de investigar, y sabía que muchos de sus jóvenes alumnos de esa época seríamos defensores de derechos humanos. Hoy ejercemos en Medellín, en Bogotá y en otras partes del país. Ahí nos formamos como treinta personas”, sostiene Berenice.

Berenice Celeita continuó con la investigación sobre el paradero de los desaparecidos en ese trágico hecho. “Luego de que comenzamos a buscarlos, nos dimos cuenta de que no aparecían por ningún lado”, dice. En ese momento la información sobre el número de personas fallecidas no era del todo clara. Tras un arduo trabajo de búsqueda, el equipo de Eduardo Umaña Mendoza identificó que en el Cementerio del Sur de Bogotá fueron enterrados muchos de los cuerpos.

Por esos días también ocurrió la erupción del volcán Nevado del Ruiz que produjo una avalancha que arrasó con el municipio de Armero, Tolima. Varios cadáveres de ese desastre natural fueron enterrados en el mismo camposanto de la capital del país, lo que originó una confusión porque muchos no habían sido identificados. “Lo tenaz es que ahí podían estar

los desaparecidos del Palacio”, asegura Berenice. Esta situación de injusticia tuvo un impacto en su vida, y a raíz de ello decidió que una vez culminase su carrera en comunicación social estudiaría antropología forense.

“Yo decidí estudiar antropología forense. Mi práctica fue en el Cementerio del Sur, entonces inició mi vida con el caso del Palacio de Justicia. Continué con este caso hasta terminar la universidad y busqué hacer una especialización en antropología forense”, afirma. Después Berenice hizo parte del Departamento de Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia, donde logró identificar algunos cuerpos que correspondían a personas desaparecidas durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

El día que todo cambió

Si bien es cierto que durante su época universitaria Berenice tuvo la oportunidad de acompañar fuera de clases al equipo de investigación de Eduardo Umaña Mendoza, los encuentros con él dentro de las aulas no pasaron desapercibidos y fueron de gran importancia para ella. Según cuenta Berenice, las lecciones del maestro le dejaron arraigados conceptos como *humanismo social*, *planes de vida* y uno muy particular que después se convertiría en el eje central de su mayor apuesta por la defensa de los derechos humanos: las *causas estructurales de los conflictos*. “A mí lo que más me impactó, yo creo que incluso más que lo del Palacio, fue haber ido a la Cárcel Modelo de Bogotá y haber entrado a un lugar que se llama ‘frenocomio’, donde están detenidas las personas con enfermedades mentales. Era una cueva de no más de un metro, donde los reclusos estaban en cuclillas y hacían sus necesidades ahí. Sentí como el impacto de la injusticia. Ahí comencé con el tema de los derechos humanos”.

Mientras se adentraba en el oficio, de la mano de Umaña Mendoza, Berenice descubrió la importancia de defender los derechos humanos con el apoyo de la gente. En ese proceso de aprendizaje, ella reconoció que las comunidades poseen herramientas de resistencia para hacer frente a las situaciones más difíciles.

Cuando terminó los estudios en antropología forense, empezó a recorrer el país. Junto a varios compañeros dictó talleres sobre derechos humanos. “La investigación nos servía para saber qué era lo que estaba pasando y la educación nos permitía buscar alternativas a la situación, mirar cómo la gente podía resistir en su territorio”, explica. En ese camino comprendió que es importante no quedarse silenciada ante las injusticias que viven algunas comunidades cuando son víctimas de masacres, detenciones arbitrarias, torturas u otros hechos victimizantes.

Con una mirada crítica y analítica, luego de recorrer distintos puntos de la geografía nacional, Berenice Celeita decidió establecerse en el suroccidente del país. Cali sería su nuevo hogar y junto a un grupo de profesionales provenientes de distintas disciplinas del conocimiento crearía una organización defensora de los derechos humanos: Nomadesc.

Nomadesc

Transcurría 1999 y el ambiente que se vivía en Colombia a finales del milenio era preocupante. En esa época el conflicto armado se recrudeció, la economía del país estaba en crisis y el desplazamiento forzado se había convertido en una dolorosa realidad para miles de colombianos. Este último problema sigue siendo un flagelo para la sociedad; según la Defensoría del Pueblo, 59.920 personas sufrieron despojos entre junio

del 2021 y mayo del 2022. La mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades negras.

A pesar de la desesperanza que imperaba en el país, había jóvenes que optaban por poner sus saberes al servicio de los demás. Así nació Nomadesc, Asociación para la Investigación y la Acción Social, cuyas siglas reflejan la unión entre el concepto de *nómada* y *desc*, que hace alusión a los derechos económicos, sociales y culturales, que se ven afectados cuando alguien es obligado a desplazarse.

La misión de esta organización es ofrecerles un acompañamiento a las poblaciones campesinas, negras, indígenas e incluso urbanas en la defensa de su territorio, y propiciar un diálogo de saberes para elaborar planes y crear iniciativas que fortalezcan la unidad dentro de las comunidades.

Poco tiempo después de constituir la asociación, Berenice Celeita planteó que la educación y la investigación debían ser las herramientas para reconstruir los tejidos sociales rotos por la violencia. Esa premisa fue utilizada por Nomadesc para dictar sus primeros talleres dirigidos a comunidades afrocolombianas e indígenas.

Tenía sentido imaginarse que la alfabetización podría convertirse en una fuerza transformadora dentro de los territorios. Así fue como inició el diplomado en Educación e Investigación en Derechos Humanos, que ha tenido quince cohortes de las que se han graduado 780 estudiantes. “Algunos que sabían leer, otros que no, unos que sabían escribir, otros que no, pero todos se empoderaron en la defensa de sus derechos”, afirma Berenice.

Encontrar los medios económicos necesarios para llevar a cabo el diplomado se había convertido en una auténtica proeza. Pero el apoyo del movimiento sindical del Valle del Cauca hizo posible que llegaran a Cali decenas de líderes so-

ciales del suroccidente del país a formarse y a compartir sus experiencias. “Con Sintraemcali, en un momento en el que el movimiento sindical en el Valle del Cauca era muy fuerte, logramos que varios sindicatos pudieran aportar solidariamente para que hiciéramos el diplomado con la Universidad Libre, también hubo apoyo del defensor del pueblo de esa época, Hernán Sandoval, y de varias organizaciones sociales”, cuenta Berenice.

Durante diez años Nomadesc se encargó de coordinar esta iniciativa; además, construyó el pénsium académico y facilitó el proceso de articulación con las universidades aliadas, para que ellas pudieran validar el conocimiento y hacer la respectiva titulación. Es así como esta experiencia les abrió las puertas de otras organizaciones sociales para afianzar los lazos de cooperación y acompañamiento.

Tierra adentro

Poco después de la fundación de Nomadesc, en 1999, sus integrantes iniciaron una travesía por el Pacífico colombiano. Encontraron una realidad compleja: desplazamientos forzados y afectaciones a los ríos y a la vegetación. En ese camino también comprendieron que era necesario recoger todas las experiencias y los conocimientos de los pueblos que venían gestando procesos sociales.

Es así como llegaron al municipio de Morales, Cauca, donde conocieron los distintos efectos provocados por la construcción de la hidroeléctrica de La Salvajina, que ha perjudicado a varios territorios de comunidades afrocolombianas e indígenas. Una vez el equipo vio el impacto de lo que ahí sucedió, Nomadesc promovió un ejercicio de empoderamiento ciudadano.

¿El resultado? La Sentencia T-462A del 2014, con la que la Corte Constitucional les reconoció a los miembros de estas comunidades el derecho a la libertad de circulación, a la salud y a la educación de los miembros de los resguardos indígenas Honduras y Cerro Tijeras, los cuales se encuentran en cercanías del complejo hidroeléctrico.

Adentrarse en el territorio no fue un ejercicio sencillo. La primera misión era ganarse la confianza de los habitantes de la zona, para que no sintieran que un grupo de personas ajenas a su realidad se estaba tomando atribuciones inapropiadas en sus discusiones y sus asuntos cotidianos. Para ello, contaron con un equipo de profesionales en distintas áreas del conocimiento.

Una de las integrantes de este equipo es Lina Yajaira Pe-láez, quien posee una doble titulación en antropología y derecho. Ella es una de las integrantes más jóvenes de Nomadesc y hace parte del equipo sociojurídico de la organización, que se encarga de ofrecerles acompañamiento a las comunidades que se han visto afectadas por conflictos territoriales. “No se ve al otro como el sujeto a investigar, donde se va a observar, a diagnosticar, a clasificar, sino que se va a construir, cohabitar, producir y digamos que a narrar, y que en ese sentido también la comunicación dentro de Nomadesc es como muy transversal a todos los procesos, porque todo el tiempo se está buscando un correlato, entre lo que cuentan las comunidades y Nomadesc”, explica Lina.

A su vez, Lina sostiene que esa es una forma muy acertada de abrir caminos con la gente, porque contribuye a la integración de los profesionales a los territorios, cuya premisa gira en relación con que las interacciones “se lean a partir del encuentro con el otro y con la otra, no desde la fragmentación, la ruptura y la clasificación”.

Olga Araújo Casanova lleva dieciséis años junto a Nomadesc; hoy en día se desempeña como coordinadora del área de redes y reconoce que la metodología de la asociación le otorga la máxima prioridad a la labor de inserción con las comunidades. Con esto, no se hace una imposición de planes de acción; por el contrario, se suman esfuerzos para respaldar a las comunidades con lo que más necesiten, que esté al alcance de la asociación. “No es un trabajo de intervención. Cuando nosotros hablamos de inserción es que vamos al territorio, nos quedamos en el territorio. Eso significa que hay una apropiación de todo un proceso, digamos, una dinámica organizativa”, comenta Olga.

Todas las iniciativas que acompaña Nomadesc vienen cargadas de aprendizajes a nivel personal para cada integrante del equipo de trabajo. Juan Carlos Valoy Ramos, un hombre con voz firme, es otro de los integrantes del área sociojurídica y reconoce que durante los últimos años el saber popular ha transformado su forma de pensar. “Cada vez que voy a un territorio, llevo mi bolsita para echar conocimientos. Me encuentro, por ejemplo, con el concepto de los territorios ganados al mar. Y yo, pero ¿qué le ganaron al mar? Y empieza uno a escudriñar eso, a preguntarse cómo fue. Ahí se va empapando uno de esa cultura, de esos saberes que antes no los tenía”.

Juan Carlos también dice que la gratitud de las personas es algo muy especial. “Tratamos un caso de una pareja de adultos mayores, entre 69 y 70 años; ellos habían sido desalojados de su vivienda. Sin el reconocimiento de ningún derecho, logramos, a través de una opción constitucional, que el Estado fuera obligado a que se le reconociera una vivienda a esa familia. Recuerdo en este momento la cara de felicidad de esos adultos mayores y cómo me decían ‘Dios se lo pague, lo voy a invitar a almorzar’”.

Berenice Celeita, coordinadora de Nomadesc, dice que el acompañamiento ofrecido por la organización a las comunidades le ha representado una gran lección de vida: “La dignidad está justamente cuando la gente tiene la posibilidad de tener una casita pobre, pero una casa en la que se construye una familia, donde normalmente hay un líder social que defiende el territorio, que defiende a otros, donde el existir está conectado con la madre naturaleza, está conectado con el río, está conectado con la cosmovisión”.

Universidad Intercultural de los Pueblos

*Unamos la fuerza, vamos a luchar,
vamos a rechazar la violencia,
vamos a rechazar la miseria,
que no haya tanto analfabeta,
desplazados, no.*

Betzayda Domínguez, *Canto a mi pueblo negro*

Si hay algo que comparten los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó es la convergencia de múltiples perspectivas culturales y de vida. En esta región viven campesinos, afros e indígenas que lejos de reclamar un trato homogéneo luchan por que se entienda que cada pueblo tiene una forma distinta de ver la vida.

Para Berenice Celeita, “la resistencia de las comunidades es la base cultural y complementaria, porque no se trata de que los indígenas hagan lo que hacen los negros, o los negros lo que hacen los campesinos, sino que se entienda que interculturalmente somos complementarios”.

Capturar esa multiplicidad de expresiones culturales fue el motor que impulsó a Nomadesc a plantear proyectos educativos que aportaran en la defensa de la dignidad de los pueblos.

Olga Araújo, coordinadora de redes de la organización, agrega que “las comunidades tienen diferentes formas de ver la vida, pero finalmente persiguen las mismas condiciones: para las comunidades negras es vivir sabroso; para las comunidades campesinas, vivir bonito; para las comunidades indígenas, vivir en equilibrio. Persiguen lo mismo, que es vivir en paz, pero desde esos elementos”.

Bajo ese espíritu nació la Universidad Intercultural de los Pueblos —UIP—, una propuesta cuyo enfoque es el humanismo social para la construcción de una paz incluyente, integral y transformadora para Colombia. La perseverancia y la escucha colectiva fueron fundamentales para sentar las bases de esta iniciativa que en el 2010 inició con el diseño de su plan de viabilidad y, posteriormente, entre el 2012 y el 2013, continuó con la selección de los programas y las metodologías a utilizar. Finalmente, en el 2015 iniciaron las actividades con los estudiantes.

Berenice Celeita asegura que ha sido una experiencia satisfactoria porque en este espacio se han formado decenas de líderes y lideresas que se han convertido en autoridades territoriales en materia de humanismo social, con énfasis en planes de vida, derechos de los pueblos y análisis de modelos de desarrollo.

Incluso, algunos estudiantes han sido reconocidos por su labor en defensa de la vida. “Yo creo que eso de alguna manera es, para mí, como una de las fortalezas más esperanzadoras; sin lugar a dudas, la educación y la investigación, en mi concepto, siguen siendo el eje de la transformación social en un país en guerra”, explica Berenice.

La UIP cuenta con cuatro programas de formación. En el primero, denominado Análisis al Modelo de Desarrollo y Derechos de los Pueblos, se identifican y se analizan las causas estructurales del conflicto social, económico y armado que

afecta a las comunidades, y se aprende a plantear alternativas para contrarrestar sus efectos negativos en la población, una evidente huella de los aprendizajes que le dejó Eduardo Umaña a Berenice. En el segundo programa, Planes de Vida y Humanismo Social, se fortalecen las estrategias de vida desde el pensamiento y los quehaceres propios de los pueblos, que facilitan la construcción de planes de vida autónomos cuyo objetivo es el buen vivir.

Comunicación Territorial y Transformadora es el nombre del tercer programa, pensado para que los asistentes se apropien del lenguaje audiovisual y construyan historias desde sus comunidades. El cuarto programa responde al nombre de Soberanías y Buen Vivir, y se centra en la formación de liderazgos a partir de los conceptos de *buen vivir*, *soberanía alimentaria* y *nuevas tecnologías de vida*.

“Nosotros partimos de la idea de que todos, incluso las personas que no saben leer ni escribir, tienen mucho conocimiento, entonces el conocimiento es parte de nuestro sentido de ser cuando es compartido. El conocimiento no se puede quedar en un libro, no se puede quedar atrapado en un video, tiene sentido si regresa al territorio y sobre este se generan propuestas”, resalta Berenice.

Saber popular

El Pacífico colombiano alberga grandes parajes de naturaleza exuberante. Uno de ellos es la cuenca del río Anchicayá, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, donde sus habitantes por muchos años “vivieron sabroso”, hasta que les presentaron una idea equívoca del desarrollo para su territorio.

María Miyela Riascos reconoce que cuando nació no tenían escuelas, centros de salud ni acueducto: “Teníamos una negación

de derechos, pero ni siquiera sabía que existían esos derechos”. Sin embargo, admite que a pesar de ese desconocimiento vivían felices y tranquilos, porque su medioambiente estaba sano. “A nosotros nos dicen que el desarrollo es tener carreteras, que el desarrollo es tener una hidroeléctrica que nos impusieron, entonces encontramos la contradicción, porque resulta que la hidroeléctrica soltó sus lodos aguas abajo y nos hizo un *ecocidio*, nos mató a los peces, nos mató los cultivos y fue otra manera de desplazar a la población”, explica María Miyela.

La organización popular fue clave para dar a conocer lo que estaba pasando, por eso decidió unirse a la Fundación Socio Ambiental Amigos del Río Anchicayá y la Biodiversidad Litoral Pacífico Aribí, con el objetivo de apoyar los procesos para la defensa del territorio y de la naturaleza.

En medio de ese ejercicio social, en el 2014, María Miyela conoce a Berenice Celeita y a Olga Araújo en un acto simbólico en el que estaban “enterrando la violencia” y exigiéndole al gobierno que se apersonara de la situación de orden público en el Pacífico. “Yo ya había escuchado hablar de ellas con otras organizaciones de Buenaventura, pero ahí digamos que empecé a hacer los contactos con ellas, pues empezamos a tejer como esos lazos de amistad, de crear confianza y posteriormente nos invitaron a la Universidad Intercultural de los Pueblos”, cuenta María Miyela.

A ella esta experiencia le ha permitido conectar la realidad de su comunidad con los contenidos que son abordados en los programas de la UIP. “Aquí se ven esas realidades de las diferentes culturas y las diferentes comunidades; entre todos tratamos de hacer el ejercicio de comprender qué hay detrás de todo eso”, explica María Miyela.

Actualmente, junto con la UIP, desarrolla una investigación que recoge las apuestas realizadas por las comunidades étni-

cas, tanto indígenas como negras, mestizas y campesinas del país, para garantizar que se lleve a cabo la práctica de la agricultura y la alimentación adecuada dentro de sus territorios, con el manejo propicio de sus semillas y sus sabres.

La materialización del diálogo de saberes entre las comunidades afros, indígenas y campesinas ha sido fruto del esfuerzo de los profesionales de Nomadesc y de otras organizaciones aliadas que con su ímpetu aportan a la transformación integral de los pueblos, por medio de la formación y el conocimiento, para encontrar alternativas que permitan mejorar su calidad de vida.

El salón de clases

Los procesos de organización social emprendidos por los pueblos indígenas de Colombia son referentes nacionales e internacionales de la búsqueda del bienestar colectivo. Jaime Collazos, autoridad indígena nasa y profesor de la Universidad Intercultural de los Pueblos, menciona que “hoy en día los saberes ancestrales tienen mucha fuerza, mucho impacto para orientar, para dirigir, para planear lo que en verdad se quiere”.

Admite que la UIP no es una academia pensada a partir de elementos teóricos, sino vivenciales, por eso en sus encuentros promueve las salidas pedagógicas a los territorios de donde vienen los estudiantes. Ello facilita la implementación de una metodología de acción y participación con la comunidad, los líderes, los jóvenes y las autoridades, en el marco de los procesos que se vienen gestando. Además, reitera que junto a esas vivencias es necesario tener una universidad crítica, reflexiva y propositiva desde los planes de vida y los planes sociales alternativos de comunicación, economía, producción y soberanía alimentaria.

El diálogo lo es todo. Las clases de Jaime parten desde la escucha colectiva, pues para él es prioritario hacer una cartografía social de las iniciativas que desarrollan los líderes y las lideresas que asisten a las aulas. Esto le permite dirigir los contenidos hacia las necesidades que ellos traen; por ejemplo, la búsqueda de soluciones para distintos inconvenientes desde una perspectiva comunitaria, social, cultural y espiritual.

Al rescate de los saberes

Mientras Berenice Celeita se adentraba en el mundo de la educación, se hizo consciente de que el conocimiento y el saber estaban en manos de un grupo social muy pequeño. Por eso, plantea que la Universidad Intercultural de los Pueblos pone toda su producción académica al alcance de la gente.

En ese sentido, es crítica frente a la postura de distintas universidades que, bajo su óptica, se apropian del conocimiento de los territorios y lo muestran como si fuese una producción propia. “Mientras la academia se convierta en el interlocutor válido de terceros despojadores, por ejemplo las grandes multinacionales, los grandes capitales, pues van a entrar en choque total con los territorios; por eso, digo que entran, extraen el conocimiento, georreferencian el territorio, saben si hay tres o cuatro ríos, si en el territorio hay oro, níquel, uranio, petróleo, saben todo eso y esa información la devuelven, pero no a la comunidad, sino a quienes les financian muchos de los proyectos de investigación; ahí es donde entra en contradicción el deber ser del conocimiento crítico”, explica Berenice.

Berenice es enfática al afirmar que el pensamiento crítico requiere de unas instituciones y unos académicos comprometidos con la realidad del país, conscientes de las desigualdades y que sean capaces de contribuir con sus acciones al bienestar

de los territorios que se han visto afectados a lo largo de los años.

Ella considera que los saberes académicos, técnicos, junto con los saberes propios de cada comunidad, son detonadores de grandes cambios y transformaciones. “Lo que nosotros podemos aprender de las comunidades es su práctica, su cotidianidad en el ejercicio de la soberanía alimentaria, en el ejercicio de vivir en medio de la guerra, en el ejercicio de ser persistentes e insistir en transmitir de generación en generación el conocimiento; y ese conocimiento trae la clave de la resistencia, la clave de no abandonar el territorio, sobre ello las comunidades indígenas, negras y campesinas nos han enseñado muchísimo. Creo que el diálogo de saberes es fundamental y la academia colombiana debe entender que no se trata de extraer el conocimiento y ponerlo en otras palabras, sino de que a partir de ese conocimiento se pueden dar posibilidades de vida, generar iniciativas de permanencia en el territorio, crear propuestas de acciones que permitan la soberanía alimentaria, que es una de las claves para resistir en el territorio, pues vamos a tener otro país distinto”, subraya Berenice.

Sin embargo, llevar a cabo ejercicios como estos resulta retador al reconocer la diversidad propia de cada pueblo y de cada comunidad. En ese sentido, Olga Araújo, coordinadora de redes de Nomadesc, hace alusión a la necesidad de poner en diálogo las realidades de los indígenas, los campesinos y los afrocolombianos, y desde ahí se establecen ciertos elementos de común interés, como la dignidad humana, la equidad y la igualdad.

Asimismo, reconoce que no solo se hace una labor pedagógica con la UIP, sino que ello trasciende en el acompañamiento que se les brinda a las asambleas populares y las misiones humanitarias, que evidencian las distintas formas que tienen de

ver la vida en cada pueblo. “La gente nos pregunta cómo hacemos para poner a dialogar en la universidad, por ejemplo, a los profesionales con don Alvarito, que es un señor que ni lee, ni escribe. Él no sabe de códigos, pero él es el mejor abogado porque conoce muy bien sus derechos; si usted conoce sus derechos, se sabe defender”, comenta Olga.

Ella destaca que es importante visibilizar el pensamiento y las prácticas de las comunidades rurales. De igual forma, asegura que en ocasiones se tiende a no saber de los pueblos debido a que no existe un “código de escritura” ni las formalidades requeridas para socializarlo en ámbitos como el académico. “Por ejemplo, antes yo no entendía por qué las comunidades hablan de sitios sagrados, y los sitios sagrados para ellas son los nacientes de agua, sí, allá donde nace el río, es la madre del agua y ese es el pensamiento de las comunidades. Entonces, lo que hace la academia es borrar todo eso, porque no tiene un código de escritura, entonces elimina ese pensamiento que es el conocimiento de las comunidades para decir que no sirve”, comenta Berenice.

A largo plazo la UIP se plantea fortalecer y acompañar las mingas, las urambas y los convites en pro de la liberación de la Madre Tierra, el goce y el disfrute de los derechos de los pueblos para el buen vivir de las comunidades y de los sectores sociales diversos del país. “La gente se cuestiona cómo hace Nomadesc para mezclar indígenas y afros, pero esa es la riqueza, es el resultado de estos años de experiencias, de ir mirando la metodología de trabajo, pero también el aprendizaje con las comunidades; es lo que nos ha llevado a entenderlo y a poder desarrollar algunas herramientas con las cuales podemos dialogar y poner en conversa todo eso, lo de ellos, lo nuestro, y que eso realmente sea el diálogo de saberes del que tanto se habla en la práctica”, explica Olga Araújo.

Uno de los mayores logros de la UIP ha sido la participación de las comunidades en la decisión sobre sus planes de vida, su armonía y su equilibrio, acumulado vital que anima a continuar las luchas por los derechos de los pueblos.

Acompañar a defender

Nomadesc es una organización que posee distintos frentes de acción para respaldar a los pueblos afrocolombianos, campesinos e indígenas del país. Una de las áreas que está en contacto permanente con la gente es la sociojurídica, y en ella se encuentra Lina Yajaira Peláez, quien considera que “salir a cuidarle la vida al otro no es una labor sencilla”.

Lina admite que uno de los principales retos con respecto a sus funciones es comprender la realidad de los territorios que acompañan, debido a la presencia de múltiples actores involucrados en conflictos que afectan a las comunidades y que perjudican su modo de vida. “El área piensa todo el tiempo en aprender también de esos desafíos que tiene la comunidad en sus territorios, y desde ahí buscar en los cajones del derecho, en los cajones de la antropología, qué sirve para poder enfrentar, de la mano con la gente, estas hegemonías”, explica Lina.

Además, enfatiza en que ello ha representado un aprendizaje colectivo, así como la posibilidad de recibir retroalimentación constante de los integrantes de cada comunidad. También dice que el tiempo se ha convertido en testigo de las grandes esperas que deben enfrentar al momento de llevar un caso. “Son procesos que pueden tomar muchísimos años, se trata de luchar contra la impunidad, luchar contra imposiciones. Esto puede desanimar y desafiar el ejercicio profesional de quienes estamos todo el tiempo ahí, pero finalmente en

los territorios vemos que hay una comprensión amplia de los efectos de esos problemas. La salida puede estar en lo jurídico, porque son violaciones a un derecho humano, a los derechos de los pueblos”, comenta Lina.

La paciencia se ha convertido en una aliada fundamental para su labor, considera que la apuesta va mucho más allá, pensando en el litigio estratégico como una forma de impulsar el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que se vean afectados dentro de los pueblos. Por ejemplo, durante el estallido social de abril del 2021 Nomadesc actuó como organización veedora y defensora de los derechos humanos. A través de su área jurídica, acompañó a varios jóvenes que protestaban en Cali, en barrios como Siloé y Puerto Rellena (renombrado como Puerto Resistencia durante la movilización ciudadana), quienes estaban acusados de cometer delitos.

Esta fue una experiencia muy demandante para el equipo de Nomadesc y en especial para Lina, quien pudo conocer de primera mano varias situaciones de detenciones arbitrarias en contra de las personas que ejercían su derecho a protestar. “El acompañamiento que se hace consiste en ir al centro de detención y presentarse como abogada defensora de confianza. Y empezar a establecer un posible diálogo con los chicos, con las chicas, para poder estar ahí, transmitir tranquilidad y que se les pueda defender en caso de que sean llevados a audiencias preliminares y demás”, afirma Lina.

El momento más álgido llegó cuando le tocó asistir los casos de tortura y evidenció que varios jóvenes fueron violentados mientras se encontraban detenidos por la fuerza pública. Llevar casos como estos implicaba exponerse a altos niveles de peligro y amenazas bastante considerables. Por ello, decidió realizar un ejercicio de documentación; además, llegó a la determinación de no denunciar algunos casos, como medida

de seguridad. “Se intentó acompañar de otras formas, para que no se incrementara el riesgo, tuvimos bastantes problemas con la Fiscalía local”, dijo Lina.

Tras todo esto, la frustración y el miedo se apoderaron de ella, debido a que se podía observar el poder punitivo que tenía el Estado para actuar: “Cuando ese poder político está en contra de uno, pues claramente es muy poco lo que uno puede hacer, así tengas una tarjeta profesional”. Sin embargo, una de las grandes lecciones que le dejó el paro nacional fue que el poder está en manos de la gente, además de la importancia de la organización popular y de la juntanza, para luchar por cuestiones que dignifiquen la calidad de vida de los colombianos. “Entender que solo el pueblo salva al pueblo, sin duda, es la enseñanza más grande en términos políticos, organizativos y sociales”, resalta.

Epílogo: El desplazamiento de Nomadesc

Las casas del barrio San Antonio de la ciudad de Cali conservan —dos siglos después de la declaración de independencia de Colombia— el estilo colonial con el que las construyeron sus primeros moradores. En este sector funcionan hostales, restaurantes y oficinas. En una de sus calles estrechas hay una casa con fachada amarilla y con puerta de madera que era la sede histórica de Nomadesc. La sobriedad del exterior contrastaba con el colorido de su interior. Del techo colgaban tejidos y banderas indígenas, en las paredes se sostenían fotografías y pósteres que daban cuenta de su trabajo. “Deja que tus gritos interrumpen el olvido” y “La vida real es de colores” son consignas que se leen en las imágenes.

Los muros también exhibían mapas de la región Pacífica. Uno de ellos resume la geografía de la Universidad Intercul-

tural de los Pueblos. Frente al comedor se ubicaba la más reciente cartografía. En ella se identifican los distintos puntos de resistencia que se instauraron durante el estallido social del 2021 y cuya ciudad referente, debido a las movilizaciones ciudadanas y a la represión del Estado que tuvieron lugar allí, fue Cali.

En la gráfica se destacan los nombres utilizados por los manifestantes para resignificar los espacios de la ciudad; por ejemplo, el sector de Paso del Comercio se convirtió en Paso del Aguante; el Puente de los Mil Días, en el Puente de las Mil Luchas; el barrio Calipso, en Apocalipso; Sameco, en Samecombate; el Puente de la 14 del barrio Calima, en Paso de la Dignidad; y el Puente de la Luna, en Luna de la Esperanza.

Esta casa era un símbolo de la organización. Las puertas siempre estaban abiertas para aquellos líderes y lideresas con los que Nomadesc ha trabajado en las últimas dos décadas. Pero debido a que ha defendido los derechos humanos, particularmente durante el estallido social, la organización ha sido perseguida. Berenice Celeita contó que el 24 de octubre del 2021 se enteraron de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas.

El hostigamiento escaló a tal punto que en una ocasión un dron ingresó a la casa de Nomadesc. Por tal razón, ante los reiterados hechos apremiantes, debieron reubicar la sede en el barrio Santa Isabel, desplazándose así de aquel lugar que durante tantos años les había servido como su espacio de creación.

Según el programa Somos Defensores, en el 2021 se registraron 996 agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos (139 asesinatos, 655 amenazas y 93 atentados). Ante las dificultades, según Berenice, el equipo se aferra a la creatividad para no perder la sonrisa y para continuar con sus

luchas. “Nos duele, sí, pero como nuestras comunidades indígenas vamos a sembrar nuestros muertos, porque ellos son semillas que darán muchos frutos”, concluye Berenice Celeita Alayón.

Referencias

- Caracol Radio (2006). Una bala del Ejército mató a Reyes Echañá, según la Comisión de la Verdad. https://caracol.com.co/radio/2006/11/15/nacional/1163620800_357104.html.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2020). Palacio de Justicia. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/palacio-de-justicia/>.
- Ramírez, Y. (2022). Cerca de 60.000 personas han sido desplazadas en los últimos 12 meses: Defensoría. *Radio Nacional de Colombia*. <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/desplazamiento-en-colombia-60000-personas-afectadas-en-12-meses>.
- Somos Defensores (2021). *Teatro de sombras. Informe anual 2021. Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDDHH)*. <https://drive.google.com/file/d/1-cyEWpykRIGU57cO-kNZFHmcTvlOJfLy/view>.

La fuerza de las mujeres afro del norte del Cauca

Por Ana María Saavedra

Ana María Saavedra (Cali). Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha trabajado como periodista de las secciones Orden y Unidad Investigativa del diario *El País* de Cali, y como editora de Orden. Desde el 2018 trabaja en *Colombiacheck*, donde actualmente dirige el proyecto contra la desinformación.

Clemencia Carabalí, lideresa del municipio de Buenos Aires, Cauca, es la presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca —Asom—, una organización de mujeres negras que desde hace más de dos décadas teje lazos de unión. Esta es la historia de un colectivo que se ha dedicado a la defensa de los derechos territoriales y del pueblo afrodescendiente, en un territorio afectado por las violencias del conflicto armado y la economía de la minería del oro. “En Asom ninguna de nosotras es tan fuerte como lo somos todas juntas”.

I

Mientras camina, Clemencia Carabalí mueve sus caderas, baila y aplaude. Sigue el ritmo de la canción que suena por el altavoz y tararea: “*Mujeres valientes, afrodescendientes. Que sepa toda la gente que lo vamos a lograr...*”. Saluda a las mujeres reunidas en el parque de Buenos Aires, Cauca. Algunas están sentadas sobre sillas de plástico y otras en los escalones de la plaza. Esperan a que inicie el acto Atarrayando por los Derechos, en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunas de ellas tienen el pelo trenzado, otras llevan puestos turbantes, como símbolo de resistencia y de sus raíces negras.

Clemencia tiene un turbante trenzado como una especie de diadema de color violeta. Tiene trenzas que le llegan hasta los hombros. Está vestida con una camiseta fucsia, *jeans*, tenis y una *pashmina*. Son pasadas las diez de la mañana del 25 de noviembre del 2021. Clemencia toma el micrófono y les habla en primer lugar a los funcionarios de la policía y de la alcaldía sentados a su lado; luego se dirige a sus compañeras: “Somos las mujeres quienes seguimos levantando nuestra voz en diferentes partes del mundo en defensa de la vida. Mujeres, afros e indígenas hemos logrado unos derechos que nos han costado lágrimas y sangre. Gracias a la terquedad y la persistencia de nosotras las mujeres, hemos logrado avances. Si levantamos nuestras voces, somos estigmatizadas, señaladas”.

Son aproximadamente cien personas, la mayoría mujeres, que reunidas bajo la sombra de un samán escuchan a Clemencia. Vinieron en buses y motos desde las veredas y los corregimientos de Buenos Aires: El Ceral, El Porvenir y Timba; Bellavista, El Llanito, Honduras, La Balsa, Paloblanco y San Ignacio. Son mujeres negras, indígenas, mestizas.

“Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la defensa de nuestros derechos. Con que sea posible la vida y también los aportes que nosotras las mujeres le damos a la sociedad. Pero dejándonos de lado no lo vamos a lograr; lo logramos si estamos caminando juntos. Que las mujeres en el municipio de Buenos Aires contemos con garantías para ejercer el derecho a ser mujer. Siempre cuenten con nuestra mano extendida para seguir caminando juntos y juntas”, continúa Clemencia con su intervención.

La aplauden. Clemencia Carabalí Rodallega es un símbolo de liderazgo y resistencia femenina y afro. Hace 25 años recorrió las veredas de Buenos Aires, Cauca, en busca de aliadas para organizarse y luchar por sus derechos. Así fundó la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca —Asom—, organización de la cual es presidenta. Por su labor ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019-2020 y el Premio Woodrow Wilson 2022.

Este último premio, según su página web, es un “reconocimiento público de respaldo al trabajo legítimo por la defensa de los derechos humanos en Colombia (DDHH), como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilidad a su aporte en la construcción de la democracia y la paz”. Es organizado y otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca desde el 2017.

Cuando seleccionaron a Clemencia como defensora del año, los jurados reconocieron “aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo

de la defensa de derechos humanos en Colombia. Sobre sus hombros recaen más de treinta años de constante trabajo en defensa del territorio ancestral de las comunidades negras y los derechos de las mujeres, superando toda clase de adversidades. Uno de sus principales campos de trabajo es el desarrollo de proyectos productivos basados en la recuperación de la finca tradicional, con el fin de promover la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo de las fuerzas de producción tradicional del pueblo negro”.

El 8 de septiembre del 2019 Clemencia subió al podio de los vencedores en pleno auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana, en Bogotá. Vestida de blanco, con sus largas trenzas sueltas y un turbante trenzado color violeta y rosado habló de paz. “Instamos a los grupos que se rearmen y al Gobierno nacional a cumplir la palabra, a cumplir la palabra empeñada, a cumplir los acuerdos de paz. Para las comunidades negras una manera de proteger nuestras vidas es cumplir con la implementación del capítulo étnico de los acuerdos de paz”, dijo.

Ese 2019, la Organización de las Naciones Unidas —ONU— verificó el asesinato de 107 defensores de derechos humanos. Las cifras de la organización Somos Defensores son más preocupantes: en ese año ocurrieron 844 agresiones contra esta población en Colombia, de las cuales 124 fueron asesinatos. El Cauca fue el departamento más afectado, pues allí mataron a 34 defensores. Meses antes de recibir el premio de derechos humanos, Clemencia pudo haberse convertido en una más entre los líderes y las lideresas asesinados.

El 4 de mayo de ese año Clemencia, junto con varios líderes afro del norte del Cauca, sobrevivió a un atentado en la finca La Trinidad de Santander de Quilichao. Ella recuerda que estaban en una reunión cuando algo explotó a unos

metros de distancia. Se tiraron al suelo, mientras sus escoltas reaccionaron. Se inició un tiroteo. Ella se refugió en un baño y otra granada cayó en la cocina de la vivienda. Los agresores, al parecer tres, escaparon, y dos de los escoltas quedaron heridos, uno por las esquirlas de la granada y el otro por un impacto de bala.

En la finca estaba reunida la plana mayor de los líderes y las lideresas afro del norte del Cauca. Aparte de Clemencia, estaban Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia; Carlos Rosero, uno de los fundadores del Proceso de Comunidades Negras —PCN—; la activista Sofía Garzón, también del PCN; y Víctor Hugo Moreno, quien era el presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y durante las elecciones pasadas fue candidato al Senado por el Partido Verde. Ninguno de ellos quedó herido, pero las amenazas no cesaron luego del atentado.

Clemencia ha recibido nuevas amenazas tras el ataque. Ella es una sobreviviente. En las décadas que lleva luchando por los derechos de su pueblo negro ha sufrido nueve atentados. La situación de violencia en el Cauca, antes que mejorar, se ha agudizado.

Buenos Aires es un municipio del Cauca, ubicado 112 kilómetros al norte de Popayán. Tiene 410 kilómetros cuadrados y aproximadamente treinta mil habitantes; según un documento citado en el Plan Estratégico para el Desarrollo en el Norte del Cauca de la Gobernación, la mitad son afrocolombianos.

Es un pueblo afro y su historia en esta región de Colombia está ligada a la minería aurífera. En 1536 los colonos españoles que dominaron esta zona del suroccidente de Colombia monta-

ron en el cerro Catalina un enclave esclavista para extraer oro. Luego, en 1823, el caserío se desplazó más cerca del río Cauca, donde está ubicada actualmente la cabecera municipal.

“Los casos de Suárez y Buenos Aires, Cauca, ilustran el talante de la política minera. En estos dos pueblos, donde las necesidades básicas insatisfechas cubren a la mayoría de la población, la minería es la actividad que les da sustento a 15.000 personas que la practican en minas o en los lechos de los ríos. Desde hace cuatrocientos años comunidades afrodescendientes viven de la actividad. En el 2004, la empresa AngloGold Ashanti empieza a solicitar concesiones para la explotación de oro en la zona”, según explican los investigadores Juan Pablo Fernández y Mario Alejandro Valencia en el libro *Comercio y minería en Colombia. El caso de AngloGold Ashanti*.

En el informe *Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia* se indica que en el Cauca se produce el 6 % del oro de Colombia. En el 2017 se reportó una producción de 2.525 kilogramos del metal precioso. “En Cauca existen 353.188 hectáreas en títulos mineros. A las áreas mineras se les debe agregar un área de influencia de cinco kilómetros de acuerdo a las normas mineras. Sumando el área destinada a la explotación y los cinco kilómetros de protección, hay 1.292.000 hectáreas destinadas a la extracción de recursos no renovables”, indica la investigación publicada en el 2019 por María Soledad Betancur.

El informe cita una investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en la que se explica que “de las 350.000 hectáreas tituladas en minería, a diciembre de 2012, 82.000 se traslapan con consejos comunitarios y 7.000 con resguardos”.

Las concesiones a las grandes empresas por la explotación minera han sido una de las grandes luchas de las comunidades

negras del norte del Cauca. El caso de La Toma, en Suárez, municipio aledaño a Buenos Aires, se ha vuelto un referente de lucha por sus derechos. Francia Márquez, lideresa y hoy vicepresidenta de Colombia, fue galardonada en el 2018 con el The Goldman Environmental Prize, conocido como el Premio Nobel Ambiental. La lucha de Francia y de su comunidad para permanecer en su territorio marcó un hito en el país.

Es la misma lucha que las mujeres de Asom han dado durante más de dos décadas por su territorio. Luchan por ser reconocidas y respetadas. Luchan para que los grupos al margen de la ley no las amenacen y para que sus cuerpos no sean botín de guerra. Luchan contra la violencia de género. Luchan para sacar adelante sus proyectos productivos. Luchan contra el machismo. Luchan contra el racismo estructural.

El centro urbano de La Balsa, una de las veredas de Buenos Aires, está ubicado a orillas del río Cauca, en el margen oriental. El afluente marca la línea divisoria entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En La Balsa, un puente metálico conecta a los vallunos y a los caucanos, quienes comparten el paisaje de una vega bañada por las aguas ocre del río y al fondo las siluetas del relieve de la cordillera Occidental.

Si el río Cauca hablara, contaría una historia de dolor. El 15 de febrero del 2019 los habitantes de esta zona realizaron un acto de sanación en La Balsa. Llegaron en chivas, motos, a pie, con música de fondo. Un grupo abordó unas lanchas e hizo un recorrido. Bailaron y cantaron para sanar las heridas de ese río que los paramilitares y los guerrilleros llenaron de sangre cuando arrojaron los cadáveres de personas asesinadas.

Con ofrendas de flores y con sus cánticos buscaron sanar el río, porque como dijo una de las mujeres que asistió al evento en Buenos Aires, “si acaban el río Cauca, acaban el territorio. Que viva el río y que viva la comunidad de La Balsa”. Es que

las comunidades negras han estado ligadas al agua: al río o al mar. Allí se bañan, pescan, lavan el oro, lavan la ropa.

Si el río Cauca hablara, también contaría la historia de resistencia y resiliencia de las y los habitantes de las poblaciones del norte del Cauca que han padecido la guerra. En el margen oriental del río Cauca, en La Balsa, germinó la semilla de mujeres que tejieron lazos de apoyo para resistir. Si el río hablara, contaría la historia de las mujeres de Asom, la historia de Clemencia Carabalí Rodallega.

II

Escuchen esta canción que cantamos las mujeres.

Escuchen esta canción que cantamos las mujeres [...].

Asom, Asom, Asom. Asociación de Mujeres.

El trabajo que se ha hecho solo ha sido con las uñas, pues tenemos muchas ganas, pero fortuna ninguna. Tenemos muchos cultivos que son tradicionales: yuca, plátano y maíz, y también medicinales; vemos el café, hortalizas y legumbres, pues están en nuestra comida que ya se volvió costumbre, que se está en nuestras comidas y ella se volvió costumbre.

Canción *AsomAsomAsomAsomAsomAsomAsom*,
de las mujeres cantaoras de Asom

Clemencia Carabalí Rodallega nació hace 51 años en La Balsa, vereda de Buenos Aires. Es la última de nueve hermanos y madre de dos hijos. Clemencia cuenta que desde niña ha sido inquieta, persistente y rebelde. “No me acomodo a lo que los demás quieren. Veía muchas cosas y pensaba que las mujeres no podíamos estar siempre en ese lugar, que nuestros sueños se podían realizar”, asegura la lideresa sentada en el parque principal de Buenos Aires. Al fondo se escuchan los cánticos de dos mujeres de Asom, que participan en el evento contra la violencia de género.

En cuanto Clemencia se graduó del colegio, empezó a reunirse con otras mujeres de su pueblo. Poco a poco se convirtieron en una red. “Nacimos con la idea de contribuir de manera colectiva con nuestros derechos”, dice. La asociación está conformada por diez grupos de mujeres con 230 integrantes de diez municipios del norte del Cauca y tres de la costa Pacífica caucana (López de Micay, Guapi y Timbiquí). Entre sus actividades están las capacitaciones en derechos humanos y étnicos, con programas como la escuela de las mujeres constructoras de paz o campañas de sensibilización y prevención de violencias contra las mujeres; los procesos de desarrollo sostenible y las cooperativas de mujeres.

Nancy Vergara es otra de las socias fundadoras de Asom. Ella recuerda que hace años Clemencia Carabalí llegó a Honduras, otra vereda de Buenos Aires, para proponerles que se unieran en el trabajo comunitario. Nancy ya pertenecía a una organización de mujeres que había nacido en los años ochenta con el apoyo de un misionero católico.

Nancy decidió aliarse con Clemencia y juntas empezaron a recorrer los corregimientos y las veredas de Buenos Aires en busca de más mujeres para su red. “Éramos 84 mujeres. Así arrancamos, con un grupo sin nombre. Ella iba de pueblo en pueblo invitando a las mujeres a que se unieran, y así nos fuimos agrupando hasta que llegamos a 220 en 1997. Ese año, luego de una asamblea, le pusimos nombre a la asociación”, relata Nancy.

Sus primeras actividades fueron las huertas caseras, para mejorar la calidad de vida de las mujeres de su vereda. Luego, abrieron un fondo rotatorio, llamado Buena Paga, para poder hacer préstamos y financiar proyectos productivos. Con ese dinero las mujeres de Honduras criaron pollos, cerdos y vacas. Otro de los proyectos que abrieron fue una tienda de aba-

rrotes, que actualmente funciona como ferretería, en la que trabajan varias integrantes de la agrupación.

Como dice Clemencia, la autonomía económica de las mujeres contribuye al desarrollo de sus comunidades y, sobre todo, es una forma de combatir la violencia de género. La ONU describe la violencia de género como “los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”. Y esa violencia, que en muchos casos ocurre en los hogares, no es solo física, sino también sexual, económica y psicológica. Por eso, como dice Clemencia, que las mujeres tengan un proyecto de vida y una independencia económica es el primer paso para combatirla.

En Buenos Aires, como en muchos municipios que viven el conflicto, la violencia de género se cruza con la guerra y los actores armados se convierten en otro de los verdugos de las mujeres. Los grupos paramilitares cometieron varias masacres en Buenos Aires. La primera de ellas se presentó en septiembre del 2000, cuando miembros del frente Farallones del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— llegaron a La Balsa y asesinaron a cinco personas. En la incursión “violaron mujeres y torturaron jóvenes. También desaparecieron treinta personas en hechos que aún se encuentran sin esclarecer”.

En el libro *Una realidad que no se transforma: Las violencias contra las mujeres en Buenos Aires, Cauca*, publicado en el 2019 por Casa Mujer y el Colectivo de Mujeres Trascendiendo, se recopilaron varios testimonios de esa violencia. Una mujer re-

lató que los paramilitares “fueron generadores de desplazamientos de muchas mujeres, acceso carnal abusivo en todo el municipio”. Otra recordó que han sufrido la violencia desde los años sesenta, cuando ocuparon la región diferentes actores armados y “las mujeres perdimos garantía a los derechos sexuales y reproductivos, además no denunciarnos, quizás por miedo o desconocimiento”.

En el 2021, cuenta Clemencia, en Asom atendieron 56 casos de violencia de género contra las mujeres, y la mayoría de los hechos ocurrió dentro de sus hogares. Para apoyar a las víctimas de maltrato en todo el proceso, la asociación cuenta con tres psicólogas, dos trabajadoras sociales y dos abogadas.

Pero una de las razones por las que los ciclos de maltrato continúan es, según la experiencia de Clemencia, la dificultad que enfrentan las mujeres para alcanzar la autonomía económica. Por eso, una de las líneas de trabajo de Asom es el empoderamiento económico de las mujeres, para que construyan un proyecto de vida y tengan una independencia financiera. En este tiempo, han acompañado a mujeres que cultivan frutas y verduras, y que crían pollos y cerdos. También a colectivos que, por ejemplo, montaron una ferretería y una fábrica de productos de aseo. Las mujeres más jóvenes, por otro lado, han incurrido en la producción de videos y programas radiales.

En La Balsa, cerca al parque principal, se encuentra la sede de Asom. Es una casa de ladrillo y rejas blancas. En esta vereda, donde nació Clemencia, está parte del corazón de este proyecto, allí funciona la tienda donde venden las frutas que cultivan y los productos que hacen con sus manos: piñas, limones, mandarinas, collares, bolsos tejidos y camisetas estampadas. Estos mismos artículos también los ofrecen en su portal web Asomcauca.org. Y al otro lado de la calle una de las integrantes de la asociación tiene un restaurante.

III

Las mujeres afrodescendientes de Buenos Aires y nuestras comunidades fuimos desplazadas forzosamente, desde el 86 hasta el día de hoy. Nos insultaban y nos humillaban con el acoso sexual por nuestro color de piel, y con el acoso sexual por nuestro color de piel. Haciendo resistencia hemos podido vivir; avanzando en los procesos de nuestra región. [...] Mujeres de Asom caminemos con tesón, sanando las heridas que la guerra nos dejó.

La gente no ha olvidado todo lo que pasó, algunos lo recuerdan con mucho dolor:

La gente no ha olvidado todo lo que pasó, algunos lo recuerdan con mucho dolor:

Se perdieron las cosechas, se murieron los animales, las mujeres aguantando hambre por esta situación. Ay, Dios mío, qué dolor; al ver la desolación, cuando las mujeres del campo partieron para la ciudad a trabajar en casas de familia para sus hijos levantar. Haciendo resistencia hemos podido vivir; avanzando en los procesos de nuestra región.

Nancy Vergara y su hija Mónica Solís Vergara cantan esta canción en el parque de Buenos Aires durante el acto contra la violencia del 25 de noviembre del 2021. Con su canto narran lo que han vivido: la guerra y su historia como asociación. Ambas usan turbantes y ropa florida. Nancy lleva una blusa roja con un pantalón de flores. Mónica tiene una camisa de flores de colores con una bermuda blanca. Sus voces retumban en los parlantes instalados en la plaza, mientras sus compañeras tararean la canción.

Buenos Aires y los otros municipios del norte del Cauca han padecido la guerra en las últimas décadas. Primero con las guerrillas y luego, en 1999, con la llegada del bloque Calima de las AUC sufrieron amenazas, violaciones, desapariciones, asesinatos y desplazamientos. Este municipio, una de las

entradas a la región del Naya, padeció el inicio de una de las masacres más recordadas en el país, una incursión de varios días en la que los paramilitares recorrieron esta zona, que se para los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Su recorrido de terror empezó el 10 de abril del 2001 en Buenos Aires y terminó en Puerto Merizalde, en el Pacífico. Aunque la comunidad asegura que más de cien personas fueron asesinadas, solo se recuperaron 27 cadáveres.

“Un pueblo de esta zona es reconocido y ha sido estigmatizado por los niños que nacieron de esa violencia. Los llamaban los “paraquitos”. Muchas de nosotras tuvieron que desplazarse del territorio. Recuerdo a Isabel Carabalí, era una mujer frontera que fue perseguida y tuvo que irse. A nosotras, las de la asociación, nos querían callar porque decían que éramos un obstáculo para el desarrollo. Nosotras luchamos por la consulta previa. Para los grandes terratenientes de Cali y de otras regiones, para los dueños de los megaproyectos, que nosotras exijamos nuestros derechos es un escollo”, asegura Clemencia.

Nancy Vergara recuerda que en el 2001 ella viajaba a Cali con unos productos de su tienda cuando los paramilitares la pararon. Le quitaron lo que llevaba y le dijeron que se fuera o la mataban. “Señalaron un cultivo y nos dijeron ¿quieren servir de abono? La asociación estuvo a punto de acabarse, no podíamos reunirnos porque prohibieron las reuniones. Los *paras* también nos restringieron la movilidad”, asegura.

Estábamos en la cocina cuando llegó un señor diciendo salgan que voy a cocinar. Me quedé pasmada, no sabía qué decir porque aquel hombre llevaba en sus manos un fusil, porque aquel hombre llevaba en sus manos un fusil.

Los niños se mantenían a la orilla del fogón, cuando sonó un disparo y la olla se rompió.

Queremos paz, seguridad en nuestras vidas. Un territorio libre de violencias. Queremos paz, seguridad en nuestras vidas. Un territorio libre de violencias. Después de este gran susto, me repuse y lo enfrenté al ver mis niños llorando.

Canción *La olla rota*, de las mujeres cantaoras de Asom

La olla rota es otra de las canciones en las que las cantautoras relatan sus experiencias. Episodios como la incursión de hombres armados en sus casas hicieron parte de sus vidas en los años más duros del conflicto. La desmovilización de las AUC no acabó con la violencia en Buenos Aires. Tampoco la firma del Acuerdo Final de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— en el 2016. Ahora hay nuevos actores: la columna móvil Jaime Martínez y la columna Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC, así como otros grupos sin identificar.

Clemencia ha sido amenazada varias veces. Tiene que estar escoltada. Mientras habla ante las mujeres del parque de Buenos Aires, sus escoltas no la pierden de vista; si ella da un paso, ellos la siguen. Los diferentes actores han querido callarla debido a su trabajo. “Siempre hemos sido estigmatizadas, señaladas por nuestro trabajo en la asociación”, dice.

El ataque al que sobrevivió en Santander de Quilichao en el 2019, junto con los otros líderes y lideresas del norte del Cauca, no fue el primer acto de violencia que sufrió. El 9 de octubre del 2007, diez hombres armados llegaron a su casa en La Balsa para interrogarla. “Clemencia se encontraba en estado de embarazo y dicha situación provocó la muerte de su hijo. Por estos hechos se vio obligada a desplazarse a Santander de Quilichao, donde estuvo durante tres meses. Al cabo de los mismos retornó. En febrero del 2008 debió dejar nuevamente su lugar de residencia por las frecuentes indagaciones

de personas desconocidas sobre sus quehaceres”, según se relata en un documento del PCN.

Dos años después, en mayo del 2009, se indica en el mismo documento que un hombre se acercó a la sede de Asom en La Balsa. Preguntó qué hacía y dónde se encontraba Clemencia Carabalí. “Cuando las compañeras le informaron que no estaba en la vereda, le dejó razón de que cuidara a su familia y que no se metiera en lo que no le importaba. Razón similar le dejó a la compañera Liliana Sandoval, también integrante de Asom, después de indagar si ella trabajaba con Clemencia Carabalí”.

En la denuncia también se dice que varias de las compañeras de la asociación fueron amenazadas mediante llamadas a sus teléfonos celulares. Les preguntaban si trabajaban con Clemencia Carabalí y luego les decían que cuidaran a sus familias y que no se metieran en lo que no les importaba.

La última de las amenazas, cuenta, ocurrió aproximadamente en octubre del año pasado. “Una chica que había sido maltratada por su pareja denunció el caso. Nosotras la apoyamos. Al esposo le salió una orden de captura y me mandó razón de que me iba a mandar a levantar. Cuando lo confrontamos, dijo que no”, explica Clemencia.

“Las violencias basadas en género se han agudizado. En la asociación hemos apoyado a muchas mujeres que han sido víctimas de maltrato y a niñas que han sido víctimas de violación. Tenemos apoyo psicológico, con abogadas y trabajadoras sociales”, les dice Clemencia a las mujeres que la escuchan ese 25 de noviembre en el parque de Buenos Aires.

La propia Clemencia ha visibilizado lo que pasa en Buenos Aires en espacios internacionales. En junio del 2020 tuvo una intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “En muchos territorios del país hay una reconfigura-

ción de los grupos armados ilegales y organizados, que han entrado en los territorios que antes controlaba la antigua guerrilla de las FARC-EP; dentro de este panorama se suman las tensiones que generan múltiples conflictividades, como son la presencia de élites económicas con intereses extractivistas, así como las economías ilegales a través de los cultivos de uso ilícito, la corrupción y la minería criminal”, expresó ante los diplomáticos del organismo internacional.

Su voz, que es la voz de 230 mujeres afro del Cauca, ha llegado alto. Ese mismo año, el 2020, se postuló para reemplazar en la Comisión de la Verdad, una institución que se creó por la firma del Acuerdo Final de Paz, a la comisionada María Ángela Salazar, quien falleció el 7 de agosto del 2020. Clemencia llevaba 35 cartas de aval y más de trescientas firmas de organizaciones e individualidades afrodescendientes, campesinas y académicas del país. En la postulación se mostraba la lucha de Clemencia en favor de los derechos de las víctimas. “Ha liderado procesos de reconstrucción de la memoria y de búsqueda de la verdad”, expresaba el documento.

Un año antes, en el 2019, Asom le entregó a la Comisión de la Verdad el documento *Voces valientes*. “Este informe analiza graves faltas contra los derechos de las mujeres y niñas afrodescendientes del municipio de Buenos Aires en el norte del Cauca. En su elaboración se facilitó un espacio de sanación para todas nosotras. Le entregamos a la comisión las voces de mujeres que han sido silenciadas”, dijo Carabalí en la presentación del informe ante los comisionados.

La comisionada Ángela Salazar resaltó en esa ocasión el trabajo de las integrantes de Asom: “Entiendo la valentía de estas mujeres, sobre todo cuando un actor armado llega a nuestro territorio y desbarata nuestra cultura y nuestros cuerpos, y debemos seguir luchando por nuestros hijos. El infor-

me final de la comisión tendrá su capítulo étnico y ahí estará la voz de la mujer negra para decir que somos portadoras de vida, no solo por parir, sino porque luchamos por nuestra cultura y nuestra comunidad”.

IV

Escuchen esta canción que cantamos las mujeres, somos las Renacientes y les queremos contar el papel de nuestras mujeres en nuestra comunidad. Desde África hasta el Cauca esclavizadas vinieron todas aquellas ancestras y las cadenas rompieron. Ahora en este presente en el que estamos viviendo, territorio y legado es lo que les contaremos.

Mónica es una de las intérpretes de este tema. Ella hace parte de Asom desde el 2016, a través de la escuela de liderazgo. Junto con un grupo de jóvenes formaron la agrupación Las Renacientes. “Somos como diez chicas que mientras hacemos, aprendemos. La mayoría empíricas. La aventura de Renacientes empezó en el 2018 con una convocatoria. Estoy terminando *Viva voz* con cincuenta entrevistas a lideresas y saldrán cuatro productos documentales”, relata.

Uno de los trabajos de este proceso, el proyecto *Polifonía afro femenina*, fue ganador del laboratorio de desarrollo documental del Noveno Festival de Cine y Video Comunitario del Distrito de Aguablanca (Fesda) en su versión del 2017. En el 2018 se ganaron una beca de producción para *Comunicación étnica*, del convenio entre el Ministerio de Comunicaciones y Señal Colombia.

En sus documentales y en las letras de sus canciones narran las vivencias del conflicto. En *Polifonía afro femenina* entrevistan a sus ancestras. Hablan de ellas, de sus saberes, de sus batallas. Les rinden un homenaje a las que las antecedieron, las

que han marcado su ruta. “Dar a conocer las luchas que están librando en la defensa de los derechos de las mujeres y como población étnica, todas han aportado en el crecimiento de la organización y Clemencia Carabalí ha estado allí ayudando”, dicen en el documental las jóvenes renacientes.

En uno de los documentales aparece un plano cerrado con unas manos en un volante de conducción. Luego se observa el rostro de Clemencia. Al fondo, en el radio del carro, suena: “Escuchen esta canción que cantamos las mujeres. Escuchen esta canción que cantamos las mujeres”. Clemencia Carabalí cuenta su historia, mientras una de las jóvenes renacientes la entrevista. “Mi trabajo desde hace más de veinte años ha sido una pasión por la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres y especialmente por las mujeres afros”.

Mientras se encuentran sentadas junto a un río, la joven le pregunta a Clemencia: “¿Por qué es importante que las mujeres se organicen?” Y Clemencia le responde: “Si estamos organizadas, las acciones son más contundentes y tienen mayor impacto. Y sobre todo para mantener y fortalecer esos lazos de solidaridad y de apoyo mutuo que son muy propios en nuestra cultura. El mantenernos organizadas nos permite resistir y resolver ciertas situaciones”.

Clemencia recuerda que durante el conflicto armado esa unión ha sido vital. En el primer desplazamiento masivo, que se presentó debido a la masacre del Naya, las mujeres de Asom apoyaron el retorno al territorio. En el parque de Buenos Aires, ese 25 de noviembre del 2021, las mujeres escribieron con marcadores varias frases en cartulinas para el acto organizado por Asom. Uno de los letreros que se repetía tenía la frase que se ha convertido en su eslogan: “En Asom ninguna de nosotras es tan fuerte como lo somos todas juntas”.

V

*Escuchen esta canción que cantamos las mujeres.
Escuchen esta canción que cantamos las mujeres.
Ahora sí que nos respeten los derechos y saberes.
Ahora sí que nos respeten los derechos y saberes.
En La Balsa, el 20 de abril del año 97, doscientas veinte
mujeres nos reunimos sin machetes.
Desde Honduras hasta La Alsacia, todas puntual acudi-
mos, dejando nuestras parcelas y nuestras mentes unimos,
dejando nuestras parcelas y nuestras mentes unimos.
Asom se llama la sigla con derechos y deberes, y traduce
Asociación, asociación de mujeres. Asom, Asom.*

Canción *Asom*

Es 24 de abril del 2022. En el parque principal de la vereda La Balsa, en Buenos Aires, las mujeres de Asom celebran los veinticinco años de la organización con una feria de servicios. Debajo de carpas y sentadas en sillas, las mujeres aplauden, mientras observan los eventos del día. En varias mesas, muestran los productos que producen ellas mismas: aguacates, plátanos, naranjas, maracuyás, huevos, bolsos tejidos, camisetas. Al fondo, bombas azules y blancas, y un letrero que dice “Ninguna mujer es tan fuerte como todas juntas”. Una frase que refleja el alma de su organización.

Suena la canción que cuenta la historia de su organización. La presentadora anuncia un mensaje que enviaron a la celebración: “Atendamos para que entre todas descubramos qué persona se une a la conmemoración”, dice. Y por los altavoces se escucha una voz con este mensaje: “De manera especial quiero saludar a todas las familias de Buenos Aires. A toda la comunidad en general. Soy Francia Elena Márquez Mina, candidata a la vicepresidencia de Colombia, y les mando este

mensaje de amor, alegría, compromiso por cambiar la historia de nuestro país, por dignificar la vida, lograr la paz, la justicia social, dignidad para nuestro pueblo históricamente olvidado y excluido”. Varias de las mujeres gritan: “¡vamos a vivir sabroso!, ¡uuuuuh!”, y aplauden.

Luego, la presentadora anuncia a Clemencia Carabalí, “que ha tenido un reconocimiento local, nacional e internacional por defender los derechos humanos en nuestro territorio. Esto la hizo merecedora del premio por la defensa de los derechos humanos en el 2020, y también este año fue ganadora de un premio internacional, el premio Wilson al servicio público”. Clemencia toma el micrófono: “Veinticinco años de trabajo constante por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos étnico-territoriales, y por la defensa de la paz. Cuando hablamos de derechos étnicos nos referimos a toda esa legislación que hemos conquistado como grupos étnicos, es decir, la Ley 70 que nos da derecho como comunidades negras a vivir en territorios libres de violencia. La consulta previa... Un cúmulo de leyes, fruto de muchas luchas que hemos dado la gente negra, pero que lamentablemente desde el gobierno no se cumplen. Permanentemente se viven vulnerando nuestros derechos [...]. Son veinticinco años de trabajo por el empoderamiento organizativo de las mujeres, generar espacios para capacitarnos [...]. Son veinticinco años en los que nos hemos hermanado para construir paz”.

Clemencia tiene una camiseta blanca con su foto estampada y con la frase “Soy porque somos”, el eslogan de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico. Ella ha acompañado en esta campaña a Francia Márquez. Ambas llevan años luchando por el territorio, por los derechos de la población negra y por los derechos de las mujeres.

Son días difíciles. Poco después del aniversario de Asom, en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, el 15 de mayo del 2022 asesinaron a Edgard Quintero, integrante de la guardia cimarrona. Debido a los combates entre dos disidencias de las FARC se desplazaron forzosamente 44 familias de la vereda Mazamorrero de Buenos Aires. Los medios de comunicación, además, registraron dos feminicidios en Cauca. Y la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez durante todo el año ha sido objeto de ataques racistas, en el contexto de las elecciones presidenciales.

Los ancestros de la población afro del Pacífico colombiano vivieron la esclavitud y con ello la denigración de sus vidas. Recientemente en este territorio los negros han sufrido por cuenta de las empresas mineras que exploran sus territorios y las acciones de los actores armados que se oponen a sus planes de vida colectivos, a lo que denominan vivir sabroso. Pero en esta historia, donde están presentes la muerte, el miedo y las violaciones, las mujeres afro también han conocido la valentía y la resistencia de los negros y las negras cimarrones.

La voz de Clemencia Carabalí y las voces de las mujeres de Asom son símbolo de esa resistencia. Son voces que retumban en el parque de Buenos Aires, en el parque de La Balsa y en escenarios internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en Washington, donde Clemencia recibió el premio Woodrow Wilson 2022. En todos esos lugares exige que se implemente el Acuerdo Final de Paz, pide que se respete la dignidad de los pueblos étnicos en el Cauca y en Colombia. Su voz suena más fuerte cuando hay un acto de violencia contra las mujeres o contra el pueblo negro.

Referencias

- Betancur, M. S. (2019). *Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia*. https://co.boell.org/sites/default/files/2019-12/20190612_Mineri%C3%81a%20del%20oro%2C%20territorio%20y%20conflicto%20en%20colombia%20para%20web.pdf.
- Casa de la Mujer y Colectivo de Mujeres Trascendiendo (2019). *Una realidad que no se transforma: Las violencias contra las mujeres en Buenos Aires, Cauca*. <https://www.casmujer.com/wp-content/uploads/2019/01/Una-realidad-que-no-se-transforma.pdf>.
- Fernández, J. P. y Valencia, M. A. (s. f.). *Libre comercio y minería en Colombia. El caso de AngloGold Ashanti*. https://www.bilaterals.org/IMG/pdf/Libre_comercio_y_mineria.pdf.
- Proceso de Comunidades Negras —PCN— (2009). Boletín de prensa. *Renacientes*. <https://renacientes.net/blog/2009/06/23/el-pcn-se-permite-poner-en-conocimiento-de-la-comunidad-nacional-e-internacional-los-siguientes-hechos/>.

Waishanyá, guardián del pueblo

Por Claudia Ortega

Claudia Ortega Sarria (Pasto, 1976). Comunicadora Social y periodista de la Universidad Mariana, especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Nariño y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Minuto de Dios. Premio Simón Bolívar 2016. Premio Silvio León España 2010. Jefe de noticias de *Caracol Radio* en Pasto.

El Valle de Sibundoy, un territorio del norte del Putumayo, es el *běngbe waman tabanok* (lugar sagrado, nuestro lugar de partida y de llegada) del pueblo indígena kaměntšá biya. Sobre ese territorio circulan a diario las ondas sonoras de la emisora Waishanyá (guardián del pueblo), una radio indígena que programa contenidos para salvaguardar la lengua, las tradiciones y la cultura de los comuneros kaměntšá. Por su labor durante estos catorce años de funcionamiento, la emisora es una voz protectora y un banco de memoria del patrimonio y la diversidad cultural de Colombia.

Marcelino Chindoy Jansasoy se levanta todos los días a las cinco de la mañana. Luego de alistarse enciende su motocicleta y sale de su casa, ubicada en el barrio Comuneros de Sibundoy, Putumayo. Tras un recorrido de diez minutos llega al parque principal del municipio e ingresa a la Casa del Cabildo Mayor, donde se encuentra la cabina de la emisora radial Waishanyá, su lugar de trabajo.

La Casa del Cabildo Mayor es un sitio sagrado para los indígenas kamëntšá biya, porque allí se toman las decisiones del Gobierno propio que rige a esta comunidad. Es la *uaman posadoc* (casa de encuentro), un lugar adornado con figuras y murales que representan su pensamiento y sus tradiciones. La emisora está ubicada en el segundo piso, sus paredes internas están forradas en madera y sobre estas están colgadas pinturas y fotografías con imágenes de mujeres tejedoras, máscaras y símbolos que evocan sus actividades cotidianas en el campo o en sus días de fiesta.

La llegada de Marcelino a la emisora coincide con el amanecer. Lo primero que hace es escoger las canciones, los cuentos y las palabras que se emitirán durante la programación que tiene a cargo. Después prende un computador y una consola a la que están conectados dos micrófonos. A las seis de la mañana en punto activa el transmisor y enciende la radio Waishanyá 97.3.

“*Basty yesca pamillang*. Un saludo de buenos días para toda la familia kamëntšá”. Estas son, cada día, las primeras pala-

bras de Marcelino frente al micrófono. Con voz enérgica anima a quienes lo escuchan, los insta a sembrar, a no abandonar los proyectos que tienen en sus casas, y a las personas que están delicadas de salud las convoca a seguir adelante, a no desfallecer.

“Es un gusto estar aquí a través de la radio, ya estoy listo para hablarles con el permiso de todos”, continúa Marcelino en el espacio que conduce en la estación radial. Para los indígenas Waishanyá es la guardiana de la memoria de su municipio, debido a que allí se guardan las voces de los mayores, los cuentos y los relatos que se transmiten en la programación.

Marcelino tiene 36 años y, además de coordinar la emisora, es artesano: elabora máscaras e instrumentos musicales. Es corpulento y de estatura media, usualmente se viste con una *këbsaiyá*, una especie de ruana larga tejida en telar, una técnica ancestral que utilizan las mujeres kamëntšá, con la cual expresan su manera de pensar, de sentir y de ver el mundo. Tiene seis hijos con edades entre siete y diecinueve años, quienes trabajan con él en su taller artesanal.

“Esta es una emisora del pueblo, para guardar las palabras de los mayores y transmitir las, para hacer memoria y que ese banco de la memoria sirva para las actuales y futuras generaciones, para fortalecer la lengua materna y las costumbres, para apoyar a los músicos regionales, ante el gran potencial de artistas que componen con lengua materna y ritmos propios”, dice Marcelino sobre los objetivos que se han trazado los indígenas kamëntšá con su emisora.

Este comunero descubrió su afición por la comunicación cuando era niño. Escuchaba en la emisora local Manantial Estéreo a su hermano Jesús Chindoy y a uno de sus primos, que eran locutores. Como los admiraba tanto, Marcelino empezó a imitar sus voces y las lecturas de los textos. A diario les pre-

guntaba qué se sentía estar frente a un micrófono, por eso lo llevaron a conocer los estudios, donde ensayó su voz y descubrió su talento para comunicar.

En el 2012, cuando Marcelino tenía 26 años, pidió un espacio para aprender en Waishanyá. Después de su práctica, en el 2015, fue escogido como coordinador, cargo que ocupó hasta el 2017. Y en el 2022 nuevamente el *arcanyë* (alcalde) lo eligió para que estuviera al frente de la emisora.

“La vida es muy bonita y Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí, en este campo terrenal, para que la misión a la que hayamos venido sea cumplida. La preservación de nuestra lengua materna y revivir las costumbres que se han perdido son para mí esenciales, hago mucho énfasis en mis programas en recuperar el *shinjac* (fogón), que es donde se encuentra el espíritu de fuego, donde se junta la familia para revivir las costumbres. Uno de los mensajes más fuertes que hago es preservar las semillas puras que están en nuestro *jajañ* (huerta), donde se cultiva frijol, maíz y frutas”, explica Marcelino.

Para Marcelino la radio Waishanyá representa la oportunidad de aprender cada día y descubrir que hay maneras diferentes de llegarle a la gente y transmitirle mensajes que ayuden a proteger el patrimonio cultural e inmaterial del pueblo kamëntšá. Que no se fumiguen los pastos, que no se usen agroquímicos, que se cuide el agua y que se conserve la medicina tradicional son sugerencias recurrentes que se escuchan en la voz de Marcelino.

El tema de la medicina tradicional merece especial atención para Marcelino, pues este pueblo es reconocido en las montañas de los Andes y en la Amazonía por sus conocimientos medicinales. En sus intervenciones suele transmitir mensajes que ayudan a reforzar el amor por estas prácticas ancestrales, pues los kamëntšá realizan rituales sagrados, como la toma de

yagë y la interacción con otras plantas que consideran sagradas y que, a su juicio, les permiten conversar con Dios a través de la fuerza que llevan por dentro. “Es curar el espíritu y el cuerpo”, asegura.

Por eso, a través de las ondas sonoras, Marcelino difunde mensajes para quienes están emprendiendo en la medicina tradicional, les pide que lo hagan con profundo respeto, como lo hacen los mayores, que no sea una práctica para enriquecerse, sino para compartir con la humanidad los conocimientos de las medicinas propias, que ayudan a curar enfermedades y a equilibrar la relación entre el ser humano y la madre tierra. “Que no se haga por dinero, sino que se practique para vivir bien”, señala Marcelino.

La palabra *waishanyá* significa cuidadores o guardianes del pueblo kamëntšá y su cultura. Por eso Marcelino dice que “venir a la radio es como un sentir”, y añade que al igual que sus compañeros se siente retribuido con las llamadas que recibe en la emisora y las palabras de reconocimiento de sus radioescuchas.

Muchos vecinos que oyen Waishanyá conciben la emisora como una verdadera guardiana, por la difusión de su lengua y sus tradiciones; también porque los acompaña en sus jornadas de trabajo en el campo. Marcelino sabe que muchos comuneros kamëntšá incluso dejan la radio encendida cuando salen de la casa, como una forma de protección de las moradas cuando están solas.

Como Marcelino conoce bien el aprecio que la comunidad le tiene a Waishanyá, también intenta transmitir su pasión por la radio y por su cultura. Su legado ya ha dejado huellas en su familia; sus dos hijos, Jenay Santiago y Andrés Felipe Chindoy Chindoy, de diez y de siete años, también hacen parte del equipo de comunicadores. Ellos llegaron a la radio por su propia

cuenta, buscando dirigirse a los niños kamëntšá con contenidos que ayudaran a preservar los valores de su etnia.

Hoy Marcelino y sus hijos sueñan con que su mensaje sea entendido y con que tanto su emisora como la lengua propia persistan en el tiempo, sin los temores de otras épocas, en las que el Estado colombiano amenazaba con cerrar y decomisar los equipos de la radio, porque como no tenían licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las autoridades consideraban que la emisora era ilegal.

En ese camino que Marcelino ha recorrido en la emisora, recuerda la época en que tenían equipos obsoletos, los cuales fallaban cuando ventecaba fuerte en el Valle de Sibundoy. Por eso, uno de los días más felices de estos diez años fue cuando Waishanyá estrenó unos equipos que ayudaron a mejorar la operación y ampliaron su señal.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho de las comunidades indígenas a comunicarse ha mantenido a los kamëntšá luchando para que su medio de comunicación se entienda como una necesidad para los habitantes de Sibundoy y las futuras generaciones.

Kamëntšá biyá, de aquí mismo, de nosotros mismos y que así mismo habla

El pasado 29 de julio de 2022 fui a Sibundoy para conocer la emisora Waishanyá. Desde Pasto, la capital de Nariño, el recorrido en carro duró una hora y media. La carretera pavimentada que conecta estas dos localidades atraviesa la cadena montañosa del páramo Bordoncillo, conocida como *uyañin* por los kamëntšá. Este es un “lugar sagrado, donde se preservaba la medicina ancestral, y un lugar de vida y nacimiento del agua para las comunidades que habitan el Valle de Sibundoy”,

según Jessica Rosalba Villamil Ruiz, quien hizo un estudio sobre el pueblo kamëntšá en el 2020.

Después de atravesar el páramo se divisan el Valle de Sibundoy y las montañas que lo rodean, un amplio y complejo territorio que los indígenas denominan *bëngbe waman tabanok*, que traduce “nuestro lugar sagrado, nuestro lugar de partida y de llegada”.

Aunque Sibundoy hace parte del departamento de Putumayo, cuya capital es Mocoa, esa localidad está a tres horas de distancia en carro por una carretera destapada. Por eso sus habitantes tienen mayor relacionamiento con Pasto, la capital de Nariño. A esta ciudad acuden las personas cuando necesitan realizar trámites administrativos, remisiones al sistema de salud y actividades comerciales, como la venta de los productos que cosechan en la zona.

Sibundoy está ubicado sobre un valle que lleva el mismo nombre de la población. Se encuentra a 2.100 metros sobre el nivel del mar, incrustado en un complejo montañoso conocido como Macizo Colombiano, cerca de la Amazonía, donde la tierra es muy fértil.

Los habitantes de Sibundoy tienen una gran vocación agrícola. Cultivan papa, maíz, arracacha, frijol, frutales y otros alimentos. Muchas familias también poseen algunas cabezas de ganado. Históricamente este municipio ha sido un punto de encuentro e intercambio de semillas, alimentos, artesanías y medicina ancestral entre pueblos andinos y amazónicos.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Sibundoy tiene una población de catorce mil habitantes, de los cuales el 30 %, unas 4.200 personas, son indígenas del pueblo kamëntšá biyá, nombre que según el poeta Hugo Jamioy Juagibioy traduce “de aquí mismo, de nosotros mismos y que así mismo habla, es decir: hombres de aquí con pensamiento y lengua propia”.

El valle donde viven los kamëntšá está dividido por el río Shonjay o San Pedro, y lo comparten con el pueblo indígena inga. La relación entre ambas comunidades es armónica y de respeto mutuo por la autonomía de sus autoridades y sus tradiciones. El pueblo kamëntšá tiene un Gobierno propio, que según el *Plan especial de salvaguardia del Bëtschnaté* (Carnaval del Perdón) “está integrado por el *uaischanja* (gobernador del Cabildo), máxima autoridad que vela, protege y busca el bienestar comunitario; el *arcanyje* (alcalde mayor), quien acompaña y reemplaza al gobernador en caso de que se ausente; el *alguacero* (alguacil mayor), responsable de impartir justicia mediante el látigo, de acuerdo a las decisiones del gobernador y los familiares de quien ha contravenido el orden; y los *uatëcmá* (alguaciles)”, quienes tienen a su cargo la parte operativa de las actividades que se organizan en la Casa Cabildo.

Sobre las paredes de la Casa Cabildo y en las fachadas de otras viviendas de Sibundoy se observan gigantescos murales, a través de los cuales los kamëntšá rinden tributo a algunos mayores y a las expresiones culturales del pueblo indígena. Estas pinturas se caracterizan por su colorido y porque representan los rostros de mujeres y niños, así como la vida en la selva amazónica y en las montañas de los Andes colombianos.

Por lo general, los murales los pintan los cabilderos a principios de cada año, un poco antes del *Bëtschnaté* o Carnaval del Perdón, en una iniciativa denominada Minga Muralista Kamëntšá, convocada por un grupo de jóvenes a la cabeza de Luis Jacanamejoy.

El pueblo indígena kamëntšá celebra el *Bëtschnaté* para fortalecer las relaciones sociales, establecer vínculos con la comunidad y recomponer el equilibrio entre vecinos que se hayan visto afectados por alguna circunstancia.

Uno de los elementos más simbólicos de los indígenas kamëntšá es su vestimenta elaborada en telar, una técnica ancestral que se fabrica de forma manual con lanas de colores y símbolos que representan el sol, la luna, el agua, las montañas, las plantas e incluso los relatos orales. Los tejidos son hechos principalmente por las mujeres, y para el pueblo étnico significan una manera de resistir, conectarse con el territorio y comunicar su idiosincrasia.

“Nosotros los kamëntšá tejemos desde hace muchos, muchos siglos. Tejer es una forma de escribir, de pensar, de ver y sentir el mundo. Las abuelitas dicen que cuando se teje se siembra la vida, la cultura y todo aquello en lo que creemos como pueblo indígena”, explica un texto publicado por la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá en el 2020.

Los vestidos tradicionales los utilizan de manera especial y con más orgullo durante las fiestas tradicionales, como el *Bëtsnate*, uno de los carnavales más auténticos de Colombia, que se celebra cada año el lunes previo al Miércoles de Ceniza y que fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación en el 2012.

La celebración del *Bëtsnate* empieza con el sonido de tambores y danzas. A su ritmo, los participantes recorren las calles para llegar al parque principal, donde se realiza un acto de consagración de los bastones de mando de las autoridades propias.

El parque principal, en cuyo alrededor están la iglesia y varias instituciones educativas, hoy se conoce como Parque de la Interculturalidad y se considera un espacio sagrado que los kamëntšá llaman *lamentacionents*, puesto que ahí reposan los restos de los ancestros de esta etnia.

Las armónicas, las flautas y otros instrumentos andinos, así como los collares de semillas que lucen las personas, resuenan en este recorrido engalanado por el colorido de la vestimenta

que usan los kamëntšá, con un ritual en el que se agradece a la *Tsbatsaná Mama* (Madre Tierra), y en el que se comparten chicha y alimentos.

“En esta gran festividad ritual las mujeres nos vestimos con *betiyá*, un rebozo de colores rojo, verde o fucsia; *wasnaníya*, una manta de tela negra; *tsombiách*, una faja tejida también con colores vivos y con símbolos; y *wabetsajónësha*, una corona hecha con fajas de tela más delgadas y que también utilizan los hombres. Ellos, por su parte, llevan *shabuanguániya*, una túnica de color negro; otra túnica o sayo llamada *këbsaiyá* y tejida en telar; un *sëndorëch* o faja hecha también en telar; y un collar de cuentas de chaquira o *chakermésha*. Casi todas estas prendas las tejemos a mano, muchos meses antes del *Bëtskënaté*, para poder lucir allí nuestras mejores galas”, explicó una mujer tejedora en el libro *Etnoeducativa rural bilingüe artesanal kamëntšá*.

Según la Organización Indígena de Colombia (ONIC), la cultura de este pueblo tiene una particularidad: el respeto por su lengua materna. Así se evidencia cuando se llega a esta población, en donde sus habitantes se refieren constantemente a la autoridad que representan sus mayores, su sabiduría, la medicina ancestral y el Gobierno propio, sobre el cual hay un profundo respeto.

Este pueblo ha resistido a la amenaza del contacto con otras culturas y ha logrado construir procesos sociales y culturales para mantener la lengua como máxima expresión de su amor por la comunidad.

La emisora Waishanyá

En el 2008, en El Ejido, una vereda de Sibundoy, nació la emisora Waishanyá. El entonces *arcanyë* (alcalde), taita Ángel Jacanamijoy, inquieto por la música y las comunicaciones, inició

las emisiones con un viejo transmisor que irradiaba su señal a las veredas El Ejido y Sagrado Corazón de Jesús.

Antes de crear la emisora, el taita Ángel Jacanamijoy transmitía información de interés, a través de un megáfono, a los habitantes. Por su liderazgo comunitario quería estar en contacto con la comunidad y mantenerla informada de las distintas actividades.

Ante la carencia de un espacio para operar, la emisora inició sus transmisiones en un pequeño cuarto del espacio de armonización, una casa a donde se llevaba a las personas que cometían faltas o contravenían las normas dictadas por el Cabildo. Luego fue trasladada a la sala de la Junta de Acción Comunal y posteriormente a las instalaciones de la Casa Cabildo, en donde se instalaron nuevos equipos para mejorar la cobertura.

La emisora no tiene licencia de funcionamiento por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, opera a través de un Acto Administrativo del Gobierno propio y por eso funciona en la Casa del Cabildo Mayor. El *arcanjé* o alcalde mayor es el principal interlocutor y quien imparte las directrices para su manejo.

Iván Agreda, anterior coordinador de Waishanyá, explicó a *Radiónica* en un video publicado en enero del 2021 que “la emisora comenzó a funcionar de manera ilícita para el Ministerio de Comunicaciones, sin su visto bueno. Pero, finalmente, nosotros somos los dueños del territorio. Lo que es el ejército, la policía, la alcaldía, ellos llegaron después que nosotros. O sea, ¿nosotros a quién le estamos pidiendo permisos?”, se preguntaba el músico y comunicador.

La estación de radio se ha convertido en el principal puente de comunicación de los habitantes de Sibundoy y las autoridades propias, y en el mecanismo de difusión de campañas cívicas, sociales y festividades, no solo del *Bëtsnaté* (Carnaval

del Perdón), sino también del *Uacjnayte* (Día de Guardar o Día de los Difuntos), que se celebra en el mes de noviembre.

El objetivo principal de Waishanyá es contribuir a la preservación de la lengua kamëntšá y apoyar la construcción de un banco de memoria, acorde con el Plan de Salvaguarda de esta etnia, que se hizo por orden de la Corte Constitucional, mediante el Auto 04 de 2009,¹ que determinó que “existen 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural”, entre los que se encuentra el pueblo kamëntšá.

Igualmente, la emisora aporta al Plan de Salvaguardia del *Bëtsnaté*,² en el que se dejó claro que el pilar fundamental la vida de este pueblo es la relación armónica entre el hombre y su territorio. Para proteger esa armonía, y por lo tanto el *Bëtsnaté*, el Plan de Salvaguardia Kamëntšá promueve acciones como el fortalecimiento de su Gobierno propio, la educación desde la familia, la protección de los derechos naturales, la economía, la cultura, la salud y la medicina ancestral, como garantía de pervivencia conforme a sus creencias, que han sido dadas en espacios intergeneracionales. Todos estos temas son abordados en la emisora Wishanyá.

Según la investigadora Jessica Rosalba Villamil Ruiz, en su trabajo *La territorialidad del pueblo kamëntšá de Sibundoy (Putumayo, Colombia). Una dimensión cultural para la construcción política*, “la oralidad como práctica vital es la posibilidad de encontrar en la palabra, la raíz del origen, revitalizando la memoria que preserva una cosmovisión milenaria y orienta

1 El Auto 04 que emitió la Corte el 26 de mayo de 2009 hace parte del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en la que declaró el estado de cosas inconstitucional por la ausencia de una política estatal sólida para enfrentar el desplazamiento y otros hechos victimizantes, que afectan a los pueblos indígenas y otros sectores de la población colombiana.

2 El plan está consagrado en el Convenio Interadministrativo 1026 de 2013, celebrado entre el Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntšá Biyá.

en la práctica los saberes de los mayores”. Esta idea evidencia la relevancia de Waishanyá como uno de los espacios que salvaguarda la oralidad y la difunde a través de transmisiones de programas en lengua propia, la música de la región, los cuentos y los poemas de autores autóctonos, y de eventos como las fiestas, el Día de la Familia, la Semana Cultural o el torneo de fútbol, denominado Copa de la Hermandad de los Pueblos Kamëntšá e Inga del Valle de Sibundoy.

La parrilla de programación Waishanyá arranca con música a las seis de la mañana, cuando Marcelino enciende el transmisor. Entre las 7:30 y las 8:30 la emisora se enlaza con el programa *Panorama informativo Putumayo* que produce Manantial Estéreo.

“Para hoy, encuentro entre padres de familia de la Mesa Permanente Conjunta y la Secretaría de Educación junto a la oficina de Prevención del Riesgo”. “La Secretaría de Educación ha emitido un comunicado sobre ingreso y formalización del servicio escolar en Sibundoy”. “Como estaba previsto, estará cerrada la vía entre San Francisco y el Pepino”. “Siguen los casos de desaparición forzada en el departamento del Putumayo”. Estas son algunas de las noticias que se emitieron el pasado 22 de agosto del 2022.

Entre las 8:30 y las 12:00 se emiten los programas *Jotsbanaor* (*Levántate en las mañanas*) y *De rumba con Leidy*, en los que se difunden la música andina, saludos a los artesanos y campañas educativas en favor del medioambiente, la limpieza de zanjas y el ahorro del agua. Además, se promueve la realización de mingas, una práctica propia de las comunidades indígenas y campesinas en la que los vecinos se unen para realizar una tarea común, y en la que el beneficiado ofrece comida a los voluntarios. Se utiliza, por ejemplo, para el arreglo de vías o para la construcción de una vivienda.

Una de las agrupaciones que suena en la emisora es Juabnayëng, un grupo de música andina que se conformó en el 2018, en el que la dirección musical está a cargo del maestro Wilson Chindoy Jacanamejoy y la composición de las canciones la hace Yeny Tandioy. Sus canciones se hacen con ensambles de guitarra, zampoña, bajo, charango, quena, semillas y chachas. Una de las canciones más conocidas de Juabnayëng se titula *Uaman luar* (*Territorio sagrado*).

*Muentse endmën botaman luar
Tabanoc uaman posad
Muentse sendëtsomñe atsbe
fshantsiñ sendoyen
Botaman luar bëngbe uaman tabanoc
Njetsca pamillang mochjobuertan
Y botaman mochjaversia
Cabëngbe soy jisejandmanam
Ainanocan jisebobonshanan.*

*Aquí existe un territorio sagrado
En nuestro pueblo existe nuestro cabildo
Vivo aquí
En mi propia tierra
Es hermoso nuestro territorio
Todos bailemos
Y cantemos bonito
Para recuperar lo nuestro
Desde nuestro corazón.*

En Waishanyá no se programa música en inglés ni tampoco se incluyen géneros como el reguetón, porque los indígenas consideran que su mensaje no es constructivo para la cultura kamëntšá y, en algunos casos, resulta irrespetuoso con las mu-

jeros. Según el coordinador de la emisora, Marcelino Chindoy, esta decisión ha sido dialogada con la audiencia joven, que en su momento reclamó ese tipo de música.

Al mediodía inicia *Shinyak chaotsenan* (*Fuego que suena*), un espacio a cargo de Fernando Juajibioy, que combina lo educativo y lo musical. En este programa se difunden mensajes para acompañar las cocinas indígenas y la mayor parte del tiempo se habla en la lengua materna. El *shinyak* (fogón), para los kamëntšá, es un lugar sagrado donde hay fuego, se cocina y se dialoga.

Entre las dos y las cuatro de la tarde empieza *Tardes educativas*, con Luis Fernando Jansasoy y Ricardo Gaviria. Su trabajo se desarrolla en un ejercicio conjunto con el *Programa de educación propia*. Entre las cuatro y las seis de la tarde la programación es musical y está a cargo de Ricardo Gaviria. Después llega *Resistencia por la vida*, un programa musical y cultural que se emite los lunes y los viernes, y que incluye mensajes, servicios sociales y rap.

Los martes, los miércoles y los jueves el colectivo Área 52 está a cargo de la radio en la franja de seis a ocho de la noche. Este grupo es liderado por los hermanos Jenay Santiago y Felipe Chindoy Chindoy, quienes leen historias de siembras, costumbres, cuentos y sueños que alternan con una programación musical que va hasta las ocho de la noche, cuando se apaga la estación radial Waishanyá.

La programación vespertina de los sábados se enfoca en la música, para entretener a los oyentes, y cierra la programación con canciones propias, pensamientos y cuentos indígenas que evocan la palabra de los mayores.

Los domingos Claudia Adriana Janamejoy es la encargada de encender la emisora, con el programa *El madrugón*, en el que se enfatiza el valor del trabajo en el campo y el respeto por la tierra.

A lo largo de ese día se emiten música andina y veinte cuentos, cada uno de veinte minutos de duración, que reviven historias míticas, como el cuento de la culebra, el del oso y otras narraciones relacionadas con Dios, con el Viento y con la Fiesta Propia.

Los guardianes de la palabra

En la historia de esta emisora, además del taita Ángel Jacanamijoy, se destaca el aporte de sabios de la tradición oral, como Calos Jamioy, y de otros líderes, como Alirio Chicunque, Cecilio Agreda, Yeni Tandioy y Jaime Conrado Juajibioy, algunos que ejercen como comunicadores y otros como apoyo desde otras instancias, para fortalecer el trabajo de la estación radial.

En la actualidad, además de Marcelino Chindoy Jansasoy, la emisora tiene una nueva generación de comunicadores y comunicadoras indígenas. Son doce personas que distribuyen su labor a lo largo de la semana entre los distintos espacios y programas. Una de esas personas es Claudia Adriana Janamejoy, quien tiene 34 años y hace parte de Waishanyá desde el 2018. Antes de llegar a la emisora indígena ella pasó por Inga Kamëntšá, una estación radial del vecino municipio de Santiago, y por la emisora Waira, del municipio de Mocoa, en el Bajo Putumayo.

Ella descubrió su vocación para trabajar como comunicadora indígena gracias a un tío a quien admiraba, porque hacía un programa en la emisora Diamante Estéreo, del vecino municipio de San Francisco. Cuando él falleció, Claudia sintió que por sus venas corría el interés de llegar a otros a través de la voz; quería transmitir enseñanzas, manejar una consola, seleccionar la música y enfrentarse a un micrófono.

Claudia tiene a su cargo el programa *Fusión cultural*, que se emite los sábados y los domingos. Al inicio de cada programa, como un ritual, saluda y pide permiso a Dios, al cielo, a la madre tierra, a los taitas y a las autoridades para empezar la transmisión.

Más allá de tener un apellido indígena o de usar el traje tradicional kamëntšá, Claudia dice que el integrante de esta comunidad se define por la palabra; es su fuerza, asegura. Por eso, su trabajo se centra en transmitir el amor por la lengua propia.

Claudia fue pionera en la emisora junto con Yeny Tandioy; las dos lograron abrir las puertas para que otras comunicadoras se interesaran en formar parte de la radio indígena y en difundir los mensajes y la música. Ella señala que la participación de las mujeres en la emisora Waishanyá no debe verse solo como una cuestión de género, sino que, en la comunidad, al ser *dadoras* y *tejedoras* de vida, es necesario que se empoderen.

Según Claudia, la radio es un medio para explorar y aprender, a través del contacto con los niños y sus mayores, y así lo hace en cada jornada. En ese sentido, ella tiene claro que, como sus compañeros, se ha convertido en una cuidadora de la palabra, de la historia, de las tradiciones y de los mensajes de su comunidad.

Por otra parte, hace algún tiempo Claudia empezó a llevar a la cabina a sus hijos de quince, doce y cuatro años. La compañía se convirtió en un proceso de enseñanza, en el que los tres niños terminaron haciendo parte de sus producciones a través de la locución de cuentos.

Claudia sueña con que sus hijos hereden el mismo empoderamiento cultural que ella tiene: “Quiero que a mis hijos no les dé vergüenza decir que son indígenas, ni hablar su len-

gua”, y que esto lo hagan con orgullo. Por eso, además de vincularlos a sus actividades propias, los matriculó en la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntšá.

Además, Claudia combina la comunicación con sus labores cotidianas como artesana y con el cuidado de su *chagra* (huerta de cultivo). Con sus tres hijos trabaja en su pedacito de tierra, que está sembrada de frutales, maíz y plantas tradicionales; además, cría animales para su propio consumo. Con estas otras actividades sostiene económicamente su hogar.

Ella querría dedicar más tiempo al aire, pero debe compartir con sus hijos y buscar el sustento para ellos, puesto que es una madre cabeza de familia. No obstante, cada minuto frente al micrófono se expresa con amor y entrega, porque sabe que, si bien no hay una retribución económica, la mejor compensación es el legado cultural que ofrece a sus hijos y a la comunidad.

Lady Viviana Jamoy Erazo es otra de las personas que hacen parte de Waishanyá. Ella tiene 31 años, pertenece a la comunidad indígena de Sibundoy y lleva un año en la emisora. Desde pequeña tuvo interés por la radio. Hizo un diplomado en locución y periodismo, en el que reforzó sus conocimientos empíricos. Reconoce que, aunque hace parte de la etnia kamëntšá, no tiene dominio de la lengua materna; por eso, hoy la está aprendiendo para difundirla entre sus sobrinos y su audiencia. *Bastí* fue la primera palabra que aprendió en lengua materna y esta se utiliza para saludar por la mañana y hasta el mediodía.

Uno de los programas que conduce esta comunicadora indígena se llama *De rumba con Lady*, y se emite en directo de lunes a viernes, entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. En este programa interactúa con la comunidad a través de servicios sociales, como la difusión de información

sobre los funerales, la pérdida de documentos, entre otros acontecimientos. Para ello, los oyentes llegan hasta la sede de la emisora con sus mensajes o los envían por WhatsApp, y el servicio se presta totalmente gratis.

Sus frases del día, la música y la animación hacen que tenga un reconocimiento entre los miembros de su comunidad. Lady prioriza en su programación canciones de artistas regionales que intercala con música campesina, para cautivar también a esta audiencia.

Además de este espacio tiene otro programa, llamado *Flor de piel*, que va de doce a una de la tarde. Su sueño es seguir en la comunicación y aprender cada vez más de este oficio. Combina su trabajo en la emisora con el bordado, la cría de especies menores para su sustento y la prestación de servicios domésticos. En su barrio, además, es secretaria de la Junta de Acción Comunal.

Otro de los integrantes de Waishanyá es Ricardo Andrés Gaviria Maigual, quien tiene 26 años y es oriundo del municipio de San Francisco, ubicado a pocos minutos de Sibundoy. Ricardo llegó a la emisora en el 2021, buscando una oportunidad en medio de la pandemia del covid-19. Desde niño Ricardo tuvo interés por la radio; por eso, cuando se enteró de que buscaban locutores, no dudó en postularse.

Luego de demostrar su interés, Ricardo logró que lo vincularan para que realizara uno de los programas diarios de la emisora: *Tardes educativas*, en el que emite música, comunicados, servicios sociales y noticias. Él cumple su rutina con rigor, pese a que tiene una condición de discapacidad que reduce su movilidad y a que diariamente debe desplazarse desde otro municipio para llegar a la sede de Waishanyá, donde además debe subir las escaleras hasta el segundo piso de la Casa del Cabildo, para finalmente sentarse frente al micrófono.

Ricardo no hace parte de la etnia kamëntšá, él es indígena inga, pero guarda un profundo respeto por las autoridades y las tradiciones de este pueblo indígena, y por eso, poco a poco, ha ido aprendiendo algunas palabras de esta lengua. Tiene un sentimiento de profundo agradecimiento por Marcelino, debido a que “me abrió las puertas al aprendizaje, no solo en radio sino también en artesanías, como el tallado en madera y las chaquiras”, dice.

Ricardo alterna el trabajo de la locución con la elaboración de manillas y la edición de audio. Este joven sueña con que este medio de comunicación llegue a más lugares, para que los niños aprendan la lengua materna. “Yo soy indígena inga, no sabía lengua materna, hoy con esta oportunidad estoy aprendiendo kamëntšá y espero que con ello yo también pueda enseñar a quienes nos escuchan”.

Los niños de Waishanyá

Jenay Santiago Chindoy Chindoy tiene siete años. Su nombre viene de la palabra *jenán*, que significa semilla. Cree que sus padres escogieron ese nombre por el amor a la agricultura y a la *chagra* (huerta de cultivo), que tienen en la parte trasera de su propia casa y de la que obtienen los productos para el consumo cotidiano de la familia. Los Chindoy consideran que el trabajo en la *chagra* es una actividad de tradición kamëntšá que debe permanecer de generación en generación.

Jenay es el hijo menor de Marcelino, el coordinador de la emisora. El niño dice que cuando oye a su padre en la radio se siente orgulloso y emocionado. “Yo quiero hablar como él y quiero que mi voz sea chévere como la de él”. Las primeras palabras que aprendió en lengua kamëntšá fueron los nombres de los animales, los mismos que va difundiendo cuando

participa en la emisión de sus programas junto a su hermano Andrés Felipe, quien tiene doce años.

“Nosotros en la emisora animamos a la gente, algunas personas trabajan en silencio y lo que nosotros hacemos es precisamente animarlas para que no estén solas”, asegura Jenay, quien agrega que, además del gusto por la radio, también heredó de Marcelino la pasión por la música, por el cuidado de la tierra y los cultivos, y por las artesanías. Asegura que sigue sus enseñanzas para comunicar el amor por sus tradiciones y el lugar en el que viven.

Por eso, en los mensajes que difunde en la emisora, el pequeño Jenay se dirige a los comuneros que se dedican a las labores agrícolas. En sus intervenciones les pide que no se desilusionen y que sigan cultivando, como lo hace él cuando ayuda a sus padres a sembrar en el huerto de su casa.

Jenay también se ha interesado por la difusión de la poesía indígena, de la cual hay grandes referentes, como Hugo Jamioy Juajibioy, un indígena kamëntsá que nació en Sibundoy, en 1971, y cuya obra se titula *Bínjbe oboyejuayëng* (*Danzantes del viento*). De este libro de poemas hay una pieza que el niño comparte con sus vecinos a través de la emisora.

Bëngbe otjenayan

*Otjenayán mondmën ayenëngbe sosong
tcojtsan or mochanjonÿna
y ché acbe anënguiñ
buiñec echantonÿna tsëm otjenayán
chent’s echantsinÿnanán acbe jobiá, acbe ainán,
chë shajuan acbe tbotëjënguentsán...*

Nuestros soñados

*Los sueños son los hijos de la vida,
caminando brotan*

*y en tus pasos
la sangre retoña nuevos sueños;
ahí va quedando tu rostro, tu alma,
el fruto de tus raíces.*

Jenay se siente orgulloso de pertenecer al pueblo kamëntšá, dice que su tarea en la emisora será inculcarles el amor por su cultura al resto de los niños y adultos que lo escuchan. “No tiene que darnos pena de qué raza somos, porque debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, nosotros también somos especiales, como las demás personas”, asegura.

Que la palabra no muera

Los comunicadores de radio Waishanyá no reciben retribución económica, su trabajo es voluntario y están motivados por el amor a la radio y, ante todo, a la comunidad. Esto no es razón para perder el entusiasmo ni la alegría con la que realizan cada uno de los programas a lo largo del día. Se sostienen gracias a actividades como la artesanía, el trabajo en las labores agrícolas e incluso en las labores domésticas.

Para ellos la mejor retribución es que la comunidad los escuche, se apropie de sus contenidos y tenga en su mente que la cultura y los valores de la etnia kamëntšá deben preservarse en el tiempo.

Cada una de las personas que han pasado por Waishanyá, así como quienes hoy hacen parte de este medio de comunicación indígena, saben que su labor deja una huella en el pueblo y que, por ello, el legado debe continuar. Su comunidad y la *Tsbatsana Mamá* (Madre Tierra) los necesitan, porque sus voces replican la palabra y la sabiduría, dos valores indispensables para resistir, para que sus historias sigan siendo contadas y para pervivir en el territorio.

Aunque la emisora no tiene una licencia de funcionamiento, hace ya un buen tiempo que ese trámite legal dejó de ser un limitante, afirma Marcelino, porque “Waishanyá ya es un patrimonio de la comunidad, es un derecho legítimo y necesario dentro del territorio para comunicarse, para preservar lo más sagrado de su cultura y de su lengua”. Según él, en la radio está la posibilidad de que la palabra materna no muera, sino que se prolongue, para así conservar las enseñanzas de los mayores acerca de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, de perdonar y de construir el buen vivir.

Referencias

- Cabildo Kamëntšá de Sibundoy (s. f.). *Plan especial de salvaguardia del Bëtsnaté*. <https://bit.ly/3U0kOaP>
- ___ (2014). Convenio interadministrativo 1026 de 2013 celebrado entre la nación - Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntšá Biya de Mocoa, Putumayo. *Plan de salvaguarda del pueblo kamëntšá*. https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_kamentsa_diagnostico_comunitario.pdf.
- Corte Constitucional (2004). Sentencia T-025 de 2004. https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/sentencia-t-025-04_0.pdf.
- ___ (2009). Auto 004 de 2009. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.html>.
- Gómez, Pablo F. (2020). El Carnaval del Perdón (*Bëtsnate*) en Sibundoy: prácticas comunicativas, solución de conflictos y esbozo de una teoría de la armonización. https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/pdf/IV_81.pdf.
- Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamentsá (2020). *Kamëntsábe ainán y biánëj/ Tejido y vida kamëntsá*. <https://bit.ly/3B0QzIa>.
- Jamioy, H. (2017). *Bínjbe oboyejuayëng = Danzantes del viento*. Bogotá: Ministerio de Cultura - Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia. <https://bit.ly/3B8Z2cg>.

- Juabnayëng (2021). *Uaman Luar - Territorio sagrado*. <https://www.youtube.com/watch?v=O9GF8pdfiSU>.
- Kowii, W. (2020). *La territorialidad del pueblo kamëntšá de Sibundoy (Putumayo, Colombia). Una dimensión cultural para la construcción política*. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7428/1/T3224-MEC-Villamil-La%20territorialidad.pdf>.
- Mavinsoy, W. J. (2009). *El lugar sagrado de los que hablan kamëntšá*. https://www.academia.edu/38140672/El_lugar_sagrado_de_los_que_hablan_kam%C3%ABnts_%C3%A1.

Una historia de lucha por la autonomía campesina

Por Germán García Barrera

Germán García Barrera (Sogamoso, Boyacá). Comunicador social - periodista. Ha laborado en medios de comunicación como *Caracol Radio* y *El Tiempo*. Fue docente del programa de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá y actualmente es coordinador editorial del portal *Entreojos.co*, un medio de comunicación independiente dedicado a la cobertura de temas ambientales.

Paula Quiroga y sus compañeros de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro persisten en su propósito de consolidar en la vereda Plan Brisas, de Aguazul (Casanare), un territorio agroalimentario como parte del sueño de lograr un sistema económico comunitario y solidario. Su lucha los ha llevado a asumir una posición crítica frente al Estado y la industria petrolera para reclamar mayores inversiones. Como consecuencia de su liderazgo han sido perseguidos, amenazados y estigmatizados. Varios de sus integrantes afrontan procesos judiciales y ellos solo piden respeto por sus derechos, su dignidad y su autonomía.

El queso, el plátano y la miel que Johana Parada y sus vecinos de Plan Brisas producen en sus parcelas deben transitar por un camino sinuoso. Una carretera destapada, con baches en muchos de sus tramos, un barrizal insufrible en invierno y excesivamente polvoriento en verano.

Las promesas del gobierno y de los candidatos que por acá han pasado ya no los ilusionan. Tampoco los compromisos oficiales para mejorar y mantener periódicamente las vías de acceso por las cuales transitan carrotaques cargados de petróleo, el oro negro apetecido en las bolsas de valores y generador de millonarias ganancias en dólares.

Es una escena paradójica a la cual están acostumbrados los pobladores de esta región. Se habituaron a ver cómo se explota el recurso de las entrañas de la tierra y se deterioran el suelo y las fuentes de agua, sin que nadie pague por ello. Mientras tanto, sus cabalgaduras y los vehículos en los cuales movilizan sus productos deben padecer los rigores propios de un país que invierte más en las ciudades que en la periferia.

Plan Brisas es una vereda de Aguazul que, después de Yopal, es el segundo municipio más poblado de Casanare, departamento que hace parte de la Orinoquía colombiana, junto a Arauca, Meta y Vichada. Para llegar hasta Plan Brisas hay que transitar por una carretera veredal irregular, especialmente en época de lluvias. Su deterioro ha sido uno de los motivos de la permanente discordia entre las comunidades que habi-

tan este territorio y la estatal petrolera Ecopetrol, responsable de la operación del pozo Liria YW12.

En esta zona de Casanare, compuesta además por las veredas Volcán Blanco, Florida, Cunama, Retiro Milagro y Unión Charte, que hacen parte de la Asociación de Veredas de Cunama, hay tres pozos petroleros implantados hace aproximadamente treinta años. Sus comunidades dicen que no han visto el progreso, por lo menos no de parte del Estado, pero sí el deterioro del entorno, la disminución del caudal en los nacimientos de agua y el reiterado incumplimiento de las promesas oficiales de mejorar sus condiciones de vida.

Sus reclamos han sido vehementes, les han exigido al Estado, representado por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Aguazul, y también a Ecopetrol que hagan efectivos los compromisos de adecuar las vías de acceso utilizadas por los campesinos, pero también por los vehículos de carga pesada de la industria de los hidrocarburos. El paso permanente de la maquinaria deteriora los caminos y dificulta la movilización de los productos cultivados y cosechados en la región, así como el desplazamiento de sus habitantes hacia los centros urbanos cuando, por ejemplo, requieren atención médica.

Paula Quiroga es habitante de la zona, habla en un tono bajo, pero con contundencia. Es una mujer de ascendencia araucana, robusta, de cara redonda y ojos claros. Paula cuenta que el abandono oficial y las promesas rotas han hecho de esta una comunidad beligerante, que reclama, que exige, que no traga entero. Esta es, insiste, una de las razones por las cuales varios de sus voceros han sido judicializados.

Paula hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro —Asonalca—, una organización que aglutina a habitantes del campo de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés

y Vichada. Asonalca tiene afiliados en Plan Brisas y en otras ciudades y poblados de Casanare, como Yopal, Tauramena, Pore, Nunchía y Trinidad. En esos territorios la organización impulsa y ejecuta proyectos vinculados con sus principales líneas de acción: derechos sociales, economía propia, interlocución, asuntos minero-energéticos y de tierra, territorio y territorialidad.

La comunidad pide respeto

Esta asociación campesina, que llegó a Casanare en el 2013, tiene como misión impulsar la organización social y de trabajadores del campo en el centro oriente de Colombia, en procura de garantizar su permanencia en el territorio y de lograr la reforma agraria y la soberanía alimentaria.

Para alcanzar estos propósitos tienen definidas dos estrategias claras: exigir sus derechos y construir propuestas encaminadas a asegurar un país sin hambre y con vida digna. La exigencia de sus derechos se hace a través de movilizaciones, de la participación en plantones y en concentraciones a través de las cuales piden a los gobiernos local o departamental garantías para la movilidad en condiciones dignas, para la protesta en armonía con los derechos ciudadanos y para su bienestar y su progreso social de manera equitativa.

Eso lo han buscado por décadas los habitantes de Plan Brisas, en Aguazul, y las familias desplazadas que viven en asentamientos humanos, especialmente en Yopal y Pore. Desde hace varios años reclaman tierras para trabajar, un trato digno, acceso a servicios esenciales, como salud, educación y agua, y que las autoridades, algunos sectores de la sociedad y los medios de comunicación dejen de estigmatizarlos.

Danitz Rodríguez Moreno es residente de Plan Brisas e integrante de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes

de Colombia —Anjeco—. De piel trigueña y mirada firme, habla con desparpajo, sonríe con mucha frecuencia y sus movimientos gráciles develan su dinamismo y su determinación. A veces frunce el ceño, como cuando recordó que en la década de los noventa la región que habita, en la que creció junto a su familia y sus amigos, y por la que hoy trabaja, fue catalogada como una zona roja a pesar de la permanente presencia del Ejército Nacional, acantonado allí para proteger la infraestructura petrolera.

Comprobé la afirmación de Danitza cuando visitamos la vereda el 31 de octubre del 2021. Algunas personas nos advirtieron sobre el riesgo que representaba viajar al caserío, hasta donde no llega el transporte público. Cada quien se moviliza como puede: en bestias, en carro particular, en el camión lechero o a pie.

Ese día hubo jolgorio. La comunidad tenía programada la primera Feria del Queso, que incluía la exposición y la venta de lácteos en diferentes presentaciones, además de plátano, yuca, miel, artesanías y artículos para el hogar elaborados por las mujeres de las veredas vinculadas a la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare —Asmuc—. También, por su supuesto, hubo música de la tierra plana, un *show* de contrapunteo y carne a la llanera.

Esta feria hizo parte de la estrategia de la comunidad para obtener ingresos por su trabajo diario, para vender lo que cultivan y procesan, y su montaje estuvo a cargo de la Asociación Agroempresarial Campesina de Casanare —Agroecas—, una organización que busca apoyar a los productores rurales en la comercialización de sus artículos.

El intento por realizar una feria de estas características no es nuevo, lo tenían en remojo, así como la intención de llevar sus productos a otras regiones y de diversificar la oferta. La

pandemia aplazó sus planes, pero no el deseo de estos llaneros del Casanare de seguir batallando contra la adversidad para labrarse su propio futuro.

Mientras transcurría la programación del certamen ferial, en un parlante colgado de un estantillo se escuchaba el poema del compositor araucano Héctor Paúl Vanegas, titulado *Ser llanero cuesta caro*:

*Llanero no es el que canta
ni aquel que baila joropo
ni quien forma el alboroto
dándole golpes a un arpa,
ser llanero vale un alma
y muchas leguas de tiempo,
hay que sentirse por dentro
como la sabia en la palma
como la pepa en la guama
que ni el invierno desconcha,
como guarura en su concha
como gabán con gabana,
y ensogar con la bonanza
noches negras de tremedal
y velar en la soledad
el rebaño de la calma.*

A propósito del poema, Paula Quiroga y sus vecinos de Plan Brisas encarnan ese carácter laborioso de quienes habitan en esta parte del Casanare. “Aquí la gente es tranquila, alegre y trabajadora”, me dice Paula, la mujer robusta, de cara redonda y ojos claros, para describir la cotidianidad de sus paisanos mientras recorremos la feria; por eso, lamenta que algunos sectores de la opinión pública departamental, incluidas las autoridades, los vean con desconfianza.

Nuestro diálogo ocurre cuando llegamos al trapiche comunitario a donde nos desplazamos para alejarnos del bullicio. Es una instalación amplia y bien dotada que les sirve a todos los cultivadores de caña para producir panela. Allí, sentados sobre unos troncos, Paula se queja de la difícil relación con el Estado y sus contratistas: “Lo único que hemos hecho es reclamar por nuestras necesidades, no es justo que las petroleras se lleven los recursos de la tierra y no se invierta en lo social, en la gente, en proyectos productivos”.

La estigmatización a la que alude está asociada al actuar de organizaciones al margen de la ley, como el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional —ELN—, que en el pasado ha atentado contra la fuerza pública o dinamitado instalaciones de Ecopetrol en inmediaciones de Plan Brisas, como lo reportó *Caracol Televisión* el 26 de febrero del 2016. Ese día, un grupo de hombres armados activó una carga explosiva al paso de un camión con uniformados de la Policía Nacional que se disponían a prestar servicios de vigilancia en la zona petrolera de Cusiana. En el hecho murieron tres miembros de la institución.

También el diario *La República* da cuenta de un ataque en contra de la infraestructura petrolera ocurrido el 10 de enero del 2018. En esa ocasión “Ecopetrol informó que fue activado un plan de contingencia luego de haberse registrado un posible atentado en cercanías al pozo Cupiagua YZ210, en el sector conocido como Plan Brisas en la vereda Volcán Blanco en Aguazul (Casanare)”.

Desde Asonalca rechazan cualquier vinculación con ese tipo de acciones y en varias ocasiones han pedido a las autoridades y a la prensa de Casanare parar los señalamientos hacia quienes pueblan esta vereda de Aguazul. Paula Quiroga sostuvo que este tipo de situaciones se han institucionalizado,

al punto en que la Fiscalía ha emprendido acciones penales contra varios integrantes de Asonalca que lideran las protestas cuando han reclamado por los incumplimientos oficiales.

Uno de ellos es Miguel Daza Galindo, capturado el 23 de febrero del 2021 en medio de un operativo de allanamiento ordenado por la Fiscalía 113 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio, según un artículo publicado por el portal *Verdadabierta.com*.

Allí se advierte sobre la presunta implantación de pruebas falsas para incriminar a Daza como colaborador de la guerrilla, y se describe que el 23 de febrero del 2021 “las autoridades realizaron en Casanare cuatro operativos de allanamiento por orden de un fiscal especializado en busca de presuntos guerrilleros del ELN”.

Verdad Abierta informó que la familia de Daza denunció la implantación de material incriminatorio en su contra y la presencia, como parte de la comisión de la Fiscalía y de la Policía Judicial, de una persona sin uniforme ni identificación que se paseó por la vivienda. Allegados al líder social lo señalan de colocar de manera subrepticia material panfletario en el segundo piso de la residencia.

A pesar de su declaración de inocencia y de persistir en no aceptar la imputación que se le estaba haciendo, Miguel Daza Galindo estuvo privado de la libertad durante ocho meses en la cárcel de Yopal. Aunque salió de su reclusión, aún continúa vinculado al proceso. El 2 de mayo del 2022 el líder volvió a ser capturado por las autoridades.

Liderazgos sociales en riesgo

Luis Jerez, profesional del Sistema de Alertas Tempranas —SAT— de la Defensoría del Pueblo de Casanare, presentó un

inquietante panorama de la situación que hoy afecta a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en ese departamento. Lo hizo durante una entrevista que sostuvimos el 27 de enero del 2022.

Citó de manera particular las amenazas, la estigmatización y los atentados contra la vida y la integridad de líderes comunales, reclamantes de tierras, trabajadores campesinos, voceros de asentamientos humanos, representantes de organizaciones sociales y de las mesas de víctimas establecidas en el departamento.

Jerez describió que la labor de estos hombres y mujeres, de los colectivos que abogan por el respeto a la dignidad de las comunidades, la defensa de sus territorios y el cumplimiento de compromisos por parte del Estado o de empresas del sector petrolero, deben hacerla acudiendo a un bajo perfil, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia sistemática que en el pasado ha experimentado esta región del país.

De acuerdo con los reportes consignados por la Defensoría del Pueblo en el SAT y las denuncias presentadas por los afectados, los principales responsables de las amenazas en su contra son integrantes de grupos armados ilegales y delincuencia organizada, y en el caso específico de los defensores de derechos humanos, sus señalamientos se dirigen de manera particular hacia miembros de la fuerza pública.

Según Jerez, en algunos casos la situación puede ser tan compleja que las quejas sobre intimidaciones son reportadas exclusivamente a la regional de la Defensoría del Pueblo solo para su conocimiento, “pero nos dicen que no hagamos nada, que no quieren esquemas de seguridad ni actuación de ninguna autoridad”, explica el funcionario. “Hay quienes, incluso, por sus propios medios, tratan de identificar el origen de las amenazas y en un acto de osadía contactan a los responsables,

los confrontan y en varias ocasiones logran establecer que estas son infundadas”, aseguró Jerez.

Los municipios en los que con mayor frecuencia se registran amenazas contra líderes sociales o comunales son Sácama, La Salina y Támara. Allí se concentra el accionar del ELN y de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC; este último actor apareció en la región de manera casi simultánea a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en el 2016. “Las condiciones topográficas y la débil presencia del Estado, incluida la fuerza pública, facilita el actuar de estos actores armados ilegales”, explica la Defensoría del Pueblo en sus alertas.

Además de lo que ocurre en Sácama, La Salina y Támara, varias organizaciones sociales vinculadas al Congreso de los Pueblos y a Asonalca han denunciado reiteradamente el hostigamiento y la persecución por su trabajo en Yopal, Aguazul, Pore y Paz de Ariporo. Según Jerez, en los expedientes se menciona a la fuerza pública como responsable de este tipo de acosos.

Alertas que inquietan

La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, con el que previene a las autoridades sobre vulneración de derechos y riesgos de la población civil, y hace recomendaciones para su protección, ha emitido, desde el 2017, seis alertas sobre el riesgo al que está expuesta la ciudadanía por la incursión de grupos armados ilegales en Casanare.

La Alerta 036 del 2017 expuso el alto grado de incertidumbre que viven los pobladores del corregimiento El Morro y el asentamiento Mi Nueva Esperanza de Yopal, y del corregimiento Cupiagua y la vereda Plan Brisas de Aguazul, por

el actuar del frente José David Suárez del ELN, que extiende y consolida zonas de influencia.

También advierte sobre presuntos grupos armados paramilitares vinculados a las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), y sobre otros conformados después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ejercen presión sobre los líderes comunales y sociales que desarrollan una agenda de diálogo con la industria petrolera relacionada con las inversiones en la región, las acciones de compensación ambiental, las oportunidades laborales y la contratación de bienes y servicios.

“La alta conflictividad socioambiental entre las comunidades de El Morro, Cupiagua, Plan Brisas y las empresas de la industria petrolera [...] ha propiciado un escenario para la intervención de organizaciones armadas ilegales que afectan principalmente a la población civil”, señaló la Defensoría del Pueblo y agregó que los ilegales buscan “desarticular las actividades de protesta y debilitar los procesos de exigencia que realizan las comunidades usando vías de hecho [...], con lo que se limitan las reivindicaciones autónomas de los derechos sociales, económicos, ambientales y políticos por parte de la comunidad”.

Este escenario ha dado pie a la estigmatización de los líderes comunales y sociales, “cuando se señala que las reivindicaciones realizadas por la comunidad están orientadas por los actores armados ilegales, específicamente por la influencia del ELN en la región”. Tal situación, según la Defensoría del Pueblo, ha servido de justificación “para el ejercicio de la violencia contra los líderes, presentándose incluso prácticas de constreñimiento ilegal en aras de lograr objetivos de inteligencia militar”.

El caso de Miguel Daza y de otros líderes regionales así lo evidencia; por esta razón, Asonalca insiste en pedir garantías para el libre ejercicio de la protesta social. Sus voceros consideran

que exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones es un derecho, y los ciudadanos no deben ser perseguidos por eso.

Otras alertas

Entre el 2018 y el 2020, la Defensoría del Pueblo publicó cuatro alertas tempranas y en ellas se pronunció sobre el inminente peligro en que se hallaban las comunidades indígenas a causa del actuar delincencial del ELN y de grupos paramilitares, especialmente para aquellas localizadas en Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama y Támara.

La última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre el territorio de Casanare es la 008 del 2021. En ella la entidad le advierte al Ministerio del Interior sobre la inminencia de riesgo en el que se encuentran los pobladores de Sácama, La Salina, Támara, Yopal y Aguazul, en Casanare; y Pajarito, Paya y Pisba, en Boyacá, a raíz del accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la circulación de un panfleto intimidatorio. “Este grupo armado expresa amenazas directas contra la población civil, particularmente aquellas personas consideradas como colaboradores de las facciones disidentes de las ex FARC y el Ejército de Liberación Nacional”, denuncia el Defensor.

En esta Alerta 008 añade su preocupación por posibles extorsiones a empresarios, comerciantes, transportadores, ganaderos, arroceros y compañías de hidrocarburos, y plantea de manera concreta la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos, “a quienes los grupos armados señalan de obstaculizar su actividad represiva”.

Allí también se expuso de manera concreta que en este caso el mayor riesgo se focaliza en las personas que ejercen lideraz-

gos sociales en los corregimientos de Cupiagua, Plan Brisas y Cunama, del municipio de Aguazul y el corregimiento El Morro, que comprende dieciocho veredas de Yopal, la capital de Casanare. “Por tanto, es posible que puedan presentarse amenazas, señalamientos, atentados contra la integridad personal, homicidios selectivos, masacres, secuestros y/o desapariciones forzadas”.

Las petroleras deben pagar la deuda social y ambiental

Jorge López Ardila es vocal de la directiva nacional de Asonalca y desde muy joven ha intervenido en proyectos sociales. En su condición de descendiente de una familia campesina, ha vivido de cerca las carencias y los padecimientos de los pobladores rurales, por eso hoy dedica sus días a velar por sus intereses.

López sentó la posición de esta asociación frente a la industria petrolera con la cual estas comunidades de Casanare se han mantenido en conflicto, situación que ha dado pie a las judicializaciones. Dijo que la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ha defendido la permanencia de los pobladores en sus territorios y, por eso, lucha contra la presión ejercida por el Estado y las compañías para provocar su desplazamiento.

En el marco de ese planteamiento sostuvo que han trabajado en el diseño de una ley orgánica minero-energética encaminada a lograr garantías para el respeto a los territorios, la autonomía de las comunidades y la protección de los recursos naturales. Frente a las áreas de páramo y de importancia ecológica tienen una posición clara: allí no se puede permitir la extracción de petróleo, ni la mediana ni la gran minería.

Sus reclamos al gobierno han abogado además por el pago de la deuda histórica, social y ambiental de las petroleras con las zo-

nas en donde hacen presencia, de donde extraen los recursos no renovables, y han propuesto la conformación de territorios campesinos agroalimentarios para privilegiar las vocaciones productivas locales y contrarrestar las imposiciones de las compañías.

La respuesta sobre las inversiones petroleras

Ante los reclamos de la comunidad le consultamos a Ecopetrol sobre sus inversiones en el territorio. La empresa informó que desde el 2017, año en que se recibieron las operaciones de campo Recetor, la estatal petrolera ha aportado más de doce mil millones de pesos para el desarrollo de iniciativas y proyectos de inversión social en beneficio de las seis comunidades que conforman la Asociación de Veredas de Cunama (Retiro Milagro, Volcán Blanco, Cunama, Plan Brisas, La Florida y Unión Charte).

Reportó además que “los proyectos de inversión social desarrollados y los que se encuentran en ejecución son el resultado del trabajo articulado con la Alcaldía de Aguazul, y responden a las principales necesidades del territorio, priorizadas con líderes y comunidades”.

Según la empresa, los recursos mencionados se enmarcan en las siguientes líneas de inversión social de la Estrategia de Entorno de Ecopetrol: infraestructura pública y comunitaria, acceso a los servicios públicos, desarrollo rural inclusivo, educación, deporte y salud, y fortalecimiento institucional comunitario.

Asonalca y la lucha campesina

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro fue creada en el 2011 con el objeto de “agrupar a campesinos y campesinas de todo nivel social y étnico que adelanten actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas y acuícolas

con el fin de satisfacer y defender intereses comunes para contribuir al desarrollo del sector rural nacional, sin delimitación patrimonial, en los cuales los asociados son simultáneamente los aportantes y gestores del mismo”, como se lee en su carta de principios.

Paula Vargas, una mujer joven, menuda y vehemente, licenciada en matemáticas, integrante del comité directivo de Asonalca y vinculada a iniciativas sociales en Boyacá y Casanare, lo resumió de la siguiente manera: “Luchamos por el reconocimiento político del campesinado colombiano”.

Fue categórica al lamentar que el Estado se niega a reconocer a los campesinos, como sí lo ha hecho con la población afro y los indígenas. Se refirió puntualmente a la posición del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez de abstenerse de votar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre del 2018.

Jorge López Ardila, miembro de Asonalca, complementó este argumento con lo que llamó desarraigo territorial, a través del cual se pretende la expulsión del campesinado por la vía de hechos violentos, de la aprobación de leyes de estímulo a la agroindustria y al acaparamiento de tierras, del fomento de proyectos minero-energéticos y de la asfixia generada por los altos precios de los insumos agrícolas y el debilitamiento o la inexistencia de estrategias de mercadeo y comercialización de los productos cultivados por los trabajadores del campo.

En el diagnóstico sobre la situación del campesinado colombiano, Asonalca ha denunciado que la macroeconomía del país está fundada en priorizar el cultivo de alimentos para la exportación, y en dejar en manos de las grandes empresas la alimentación de los colombianos. “Estamos produciendo

do para exportar, pero dejamos de lado la alimentación al interior del país. Es una crisis estructural que genera pobreza y desplazamiento, y provoca una desaparición acelerada del campesinado. Se está impulsando la empresarización del campo lesionando la economía tradicional y las formas de organización social”, puntualizó Jorge López Ardila.

Desde Asonalca también advirtieron que la agroindustria del narcotráfico está contaminando la economía nacional y su creciente presencia está incidiendo en la arremetida en contra de organizaciones sociales, campesinas, negras e indígenas. Además, les preocupan las llamadas zonas de desarrollo empresarial o zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, estas últimas conocidas como Zidres, pues consideran que con estas figuras se “favorece la acumulación de tierras, pretenden evadir las restricciones legales a la concentración de baldíos y representan una amenaza para el campesinado y el desarrollo rural”, aunque el Ministerio de Agricultura defiende sus bondades al describir que su fin es “desarrollar planes rurales integrales, fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar el desarrollo económico y social de sus habitantes”.

En un documento de la Presidencia de la República, del 29 de enero del 2016, se explica además que las Zidres son territorios especiales, aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero alejados de los centros urbanos, con baja densidad de población y limitada infraestructura.

Allí también se hace referencia a los beneficios de su implementación: “Aumentará la disponibilidad de tierra para desarrollos agroindustriales y gozarán de una política de incentivos y estímulos, siempre y cuando vinculen como asociados al pequeño o mediano productor sin tierra. Asimismo, facilitarán que los campesinos y trabajadores involucrados en su desarrollo adquieran sus propias tierras”. Frente a estos

planteamientos, la organización campesina se declara escéptica. Y Jorge López Ardila agrega que las Zidres o las zonas de desarrollo empresarial permitirían que el gobierno entregue baldíos de la nación, que deberían ser destinados a familias sin tierra, a grandes emporios económicos.

Una guardia comunitaria

Durante la Feria del Queso, que tuvo como escenario el Centro Comunitario de Plan Brisas, todo transcurrió en calma. A pesar del ambiente festivo y de la masiva asistencia de campesinos, no se presentaron alteraciones a la tranquilidad. Los pobladores de la zona han aprendido a valorar la importancia de la convivencia y así lo demostraron dos cantantes llaneros que contrapunteaban al ritmo del arpa, el cuatro, la bandola y los capachos, como les dicen a las maracas en esta región.

El contrapunteo es un género del folclore llanero, muy común tanto en Venezuela como en las sabanas de la Orinoquía colombiana. Consiste en la confrontación de dos intérpretes que a través de versos cantados se desafían en torno a temas tan comunes como el amor por la llanura, el adiestramiento de sus caballos o su habilidad para conquistar a la joven más bonita del parrando. La intensidad alcanzada por los artistas locales y el uso de expresiones que podrían considerarse ofensivas no empañaron el espectáculo. Este finalizó en medio de las risas y los aplausos de quienes rodeaban a los protagonistas.

Entre los asistentes estaba Javier Danilo Fulla, integrante de la guardia campesina de Plan Brisas, encargada de garantizar el orden. Ese día llevaba un sombrero alón de paja blanca, una camisa a cuadros, *jean* azul y botas de caucho. Lo distinguí porque Paula Quiroga, su esposa, me lo señaló de lejos, y como referencia me dijo que era el de barba y bigote. De esta-

tura promedio y manos fuertes, Javier se tomó su tiempo para explicarme la razón de ser de la guardia campesina.

Esta se creó hace cinco años con el propósito de velar por la seguridad de la comunidad, especialmente para controlar la presencia de ladrones y, eventualmente, como un mecanismo para ayudar a zanjar diferencias entre los pobladores que hacen parte de la Asociación de Veredas de Cunama, integrada por Volcán Blanco, Florida, Cunama, Retiro Milagro y Unión Charte.

“No podemos confiar en nadie más sino en nosotros mismos, en nuestra gente, así como la guardia indígena; esta es una guardia popular, es la que garantiza que los campesinos tengan su ganado, es la que vela por nuestra seguridad, es legítima”, complementó Paula y añadió un hecho no menor, pues cuando participan en movilizaciones, plantones o protestas, esta guardia es la encargada de blindar al colectivo campesino de la presencia de posibles infiltrados.

Su labor comunitaria no es vista con buenos ojos por el Estado. Javier Fulla dice que algunas autoridades los han asociado con la insurgencia, pero con su trabajo y el reconocimiento de sus vecinos han demostrado todo lo contrario. “Somos de acá, no somos forasteros”, reclamó el representante de la guardia. A pesar del recelo con que son vistos por la policía y el ejército, la guardia campesina tiene sus estatutos y en varias ocasiones se han reunido con los representantes de la alcaldía y la gobernación para socializar su trabajo.

Una figura de vigilancia similar opera en los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad, y en departamentos como Arauca, Santander, Cauca, Casanare y Meta. Este colectivo de campesinos encargados de la seguridad en su territorio ha recibido capacitación de la guardia indígena y su labor se articula con las actividades de liderazgo y emprendimiento de las

otras organizaciones sociales presentes allí, como la de mujeres y la de jóvenes.

La lucha por la igualdad y la dignidad

Alix Andrea Calderón es educadora y hace parte de la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare. Durante la Feria del Queso fue una de las coordinadoras de la cabalgata, por eso nuestro diálogo se dio al final de la tarde. De tez blanca y agraciada figura, Alix llevaba como distintivo una camiseta azul con visos verdes claros y un sombrero de fieltro tostado por el sol. Un poco agitada por las labores del día y exhibiendo su amplia sonrisa, la profe, como la llaman sus compañeros, describió sin ambages la razón de ser de Asmuc: “El propósito es luchar por una vida digna como mujeres”.

El surgimiento de la asociación se dio luego de que se evidenciaran las necesidades, las carencias y la condición de vulnerabilidad en la que se hallan las mujeres campesinas, y en torno a esa realidad se crearon espacios de unión y de trabajo solidario. Encontraron el apoyo tanto de Asonalca como de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia.

A pesar de laborar todos los días en sus hogares y de llevar sobre los hombros la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, por ser cabezas de familia, no tienen ingresos permanentes. El diagnóstico preliminar realizado tanto en Aguazul, como en otros municipios del departamento en donde tienen presencia, arrojó como conclusión que el principal problema es el desempleo. Ese panorama les permitió concluir que la generación de recursos económicos debería ser una de las líneas de acción. Desde entonces, se propusieron impulsar proyectos productivos a partir de la caña, el plátano, la piscicultura y la venta de comida en eventos.

Su inspiración ha motivado la vinculación de mujeres de otros municipios, como Pore, Nunchía y Yopal. “Acá pueden estar todas las que quieran participar, las puertas están abiertas”, dijo con desparpajo Alix Andrea Calderón. La creación de Asmuc es de alguna manera fruto de otros procesos organizativos, como el de Asonalca y Anjeco. Así lo reconoce precisamente Danitza Rodríguez Moreno, de Anjeco.

Este colectivo juvenil surgió en agosto del 2012 como resultado de una serie de encuentros nacionales en los que se expusieron los problemas y los retos a los que se estaban enfrentando las nuevas generaciones de hombres y mujeres en diferentes zonas del país. De esta forma los primeros afiliados provinieron de departamentos como Arauca, Cundinamarca, Casanare, Cauca, Meta, Norte de Santander, Santander y Vichada.

Danitza detalló que con sus paisanos ya tenían un proyecto juvenil avanzado, denominado Asociación de Jóvenes Aguazuleños, que surgió con el fin de hacerles frente a varias necesidades, algunas de ellas catalogadas como verdaderos riesgos para su propia integridad y la de sus familias: la militarización de la zona, el reclutamiento forzado, los problemas para el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales.

La frecuente presencia de uniformados y la incertidumbre generada por la incorporación de los adolescentes a las filas oficiales, que en muchos casos puede provocar acoso de otros actores armados, fue una de las razones por las cuales se organizaron. Danitza dejó clara la resolución de sus congéneres de no querer empuñar las armas y de abstenerse de participar en confrontaciones militares. Su aspiración, argumentó, es trabajar por la comunidad y aportar a procesos sociales en beneficio de los intereses campesinos.

Los jóvenes de Aguazul agremiados en Anjeco han incluido en su agenda temas como el rescate de la historia local, la de sus padres y sus abuelos, la de sus luchas por la defensa del territorio que hoy habitan, la de limpiar su nombre de la estigmatización y la de gestionar becas para sus integrantes y proyectos de educación, salud, recreación y deporte.

Otro de los asuntos prioritarios para los jóvenes está relacionado con la vulnerabilidad de los recursos naturales. Ellos han sido testigos del impacto de la sísmica en la estructura del suelo, del deterioro de las quebradas, de la disminución de las fuentes de agua, de las variaciones del clima y de las modificaciones al paisaje como consecuencia de la operación petrolera. “Por esto hemos salido a protestar, por asuntos ambientales, laborales y de derechos humanos, y por eso también hemos sido perseguidos y judicializados”, concluyó Danitza.

Economía comunitaria y solidaria

Una alternativa a la industrialización del campo colombiano y al temido desplazamiento que generan la agroindustria y la megaminería es la conformación de los territorios campesinos agroalimentarios. Asonalca, de la mano del Coordinador Nacional Agrario —CNA—, espera que en Casanare se puedan conformar esas áreas de beneficio colectivo.

En un territorio campesino agroalimentario una comunidad organizada decide sobre la vocación de sus tierras, promueve una producción orgánica y ecológica y se fortalece organizativa y políticamente. “Lo que se busca es crear un embrión de autoridad campesina con autonomía sobre lo que se puede y no se puede hacer ahí”, apuntó Jorge López, directivo de Asonalca. Desde el CNA se explica su alcance de la siguiente manera:

Es un territorio concebido (pensado), habitado y organizado por nuestras familias, comunidades y organizaciones campesinas, orientado por un Plan de Vida Digna Campesino, resultado de procesos organizativos, sociales, políticos, económicos y culturales. Allí, como campesinos, hombres y mujeres construimos nuestras relaciones sociales y comunitarias, y tenemos una relación directa y especial con la tierra, la naturaleza y el agua, fruto de procesos y prácticas sociales y productivas donde se unen el pasado y el presente.

Un primer paso hacia esa posibilidad fue la creación, el primero de junio del 2018, en Plan Brisas, de la Asociación Agroempresarial Campesina de Casanare —Agroecas—, que busca apoyar a los productores rurales en la comercialización de sus artículos en mercados próximos, como Yopal y Aguazul.

Johana Parada Duarte, presidenta de Agroecas, explicó que la asociación surgió de la necesidad de los campesinos de hallar alternativas encaminadas a mejorar su manutención. Johana, de estatura mediana y complexión fuerte, es una mujer que habla sin rodeos y actúa con arrojo. No tiene reparos para denunciar la ausencia del Estado en los escenarios comunitarios ni modestia a la hora de ponderar la capacidad de lucha de sus coterráneos.

“Hace tres años varios vecinos estuvimos de acuerdo en asociarnos para encontrar mejores oportunidades y estar fortalecidos como comunidad en el desarrollo de proyectos de beneficio colectivo; sin embargo, la falta de dinero y la pandemia retrasaron ese propósito”, explicó la líder de este emprendimiento.

A mediados del 2021 sus promotores retomaron el impulso de Agroecas y avanzaron en la construcción de una quesera en la vereda Plan Brisas. La obra fue terminada gracias al aporte de los vecinos y actualmente se gestionan recursos para su

dotación. Esta se suma a otra iniciativa en funcionamiento, un trapiche en donde se procesa la caña de la comunidad.

Johana Parada detalló que en la quesera se transformará la leche de las ganaderías locales, y el queso en sus diferentes variedades podrá ser vendido en centros poblados de Casanare o de otras regiones del país. Los habitantes de las veredas Plan Brisas, Volcán Blanco, Cunama, Retiro, Unión Chartre y La Florida también están en capacidad de proveer plátano, yuca, pollo, huevos y pescado de calidad. Esta iniciativa está acompañada de una estrategia dirigida a garantizar que la población privilegie su seguridad alimentaria, se beneficie de lo que cultiva y produce, y abastezca la demanda de sus futuros clientes.

Johana sostuvo además que la clave para salir airoso está en la asociación, en trabajar unidos, “solo de esa manera podremos salir adelante ante la ausencia del Estado”. Esta unión a la que hace referencia la integrante de Agroecas se materializa en Plan Brisas con el trabajo articulado entre Asonalca, la asociación de jóvenes, Anjeco; y la de mujeres, Asmuc.

El esfuerzo colectivo es su única esperanza, es el motor que los guía, es lo que los motiva a seguir exigiendo y a marchar cuantas veces sea necesario por ser reconocidos como campesinos con autonomía para decidir responsable y sosteniblemente sobre la tierra que les fue legada.

Referencias

Contagio Radio (25 de febrero del 2021). Comunidad y organizaciones sociales de Casanare en grave riesgo por persecución y amenazas de las AGC. <https://www.contagioradio.com/comunidad-y-organizaciones-sociales-de-casanare-en-grave-riesgo-por-persecucion-y-amenazas-de-las-agc/>.

Corporación COSPACC (25 de febrero del 2021). Alertamos sobre la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales y comunidad

- en general del departamento de Casanare. *Twitter*. <https://twitter.com/CospaccOficial/status/1364993771788713986?s=20&t=9QsM-dDxjCVIoEujpApVxyw>.
- Defensoría del Pueblo (2017). Alerta temprana 036 de 2017. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/008-21.pdf>.
- ___ (2018a). Alerta temprana 075 de 2018. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/075-18.pdf>.
- ___ (2018b). Alerta temprana 078 de 2018. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N%C2%B0-078-18-CAS-Hato-Corozal-y-Paz-de-Ariporo.pdf>.
- ___ (2019). Alerta temprana 050 de 2019. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/050-19.pdf>.
- ___ (2020). Alerta temprana 023 de 2020. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/023-20.pdf>.
- ___ (2021). Alerta temprana 008 de 2021. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/008-21.pdf>.
- La República (10 de enero del 2018). Ecopetrol activó plan de contingencia por atentado en Aguazul, Casanare. <https://www.larepublica.co/economia/ecopetrol-activo-plan-de-contingencia-por-posible-atentado-en-cercanias-a-pozo-cupiagua-2587242>.
- Noticias Caracol (4 de diciembre del 2016). Tres policías muertos y cuatro heridos deja ataque contra patrulla en Casanare. https://www.youtube.com/watch?v=vjYDBCP_Pwc.
- Presidencia de la República (2016). Lo que debe saber de la Ley Zidres. <http://es.presidencia.gov.co/noticia/Lo-que-debe-saber-de-la-ley-Zidres>.
- Verdad Abierta (28 de febrero del 2021). ¿Fiscalía “implantó” pruebas para capturar a líder social de Casanare? <https://verdadabierta.com/fiscalia-implanto-pruebas-para-capturar-a-lider-social-de-casanare/>.

¡Las señalan y les importa un bledo!

Por Gina Juliet Rojas Hoyos

Gina Juliet Rojas Hoyos (Tunja, 1989). Comunicadora social y periodista. Ha trabajado como reportera en medios de comunicación como *El Tiempo*, *Extra Boyacá*, *Positiva Fm*, *Revista Semana*, *Última Hora Noticias*, *Facetas de Boyacá* y *Perfiles de Nuestra Gente*. Actualmente es parte del equipo de *Sin Censura*, *el Poder de la Libertad*, medio boyacense dedicado a asuntos de género, familia y diversidades.

En Boyacá, un departamento del centro de Colombia, la organización Femidiversas interpela a la muy conservadora sociedad boyacense. El colectivo es el proyecto de vida de la psicóloga Laura Zabala y de aliadas como Andra Hernández, Amapola Suárez, Lilith Cristancho, Jahira Quintero, Annyka Becerra, Astrid Castellanos y Juan Lamo. Todas trabajan para que lesbianas, gays, bisexuales y trans no sean discriminadas ni violentadas, sino que sean reconocidas como parte del pueblo boyacense. Esta es la historia de Femidiversas, contada a través de las escenas del *Kabaret transfeminista*, una *performance* que les permitió a sus integrantes hacerse visibles y denunciar las violencias que sufren.

Escena 1: El *show* cabaret

No somos peligrosas, estamos en peligro.

Arenga oficial del *Kabaret transfeminista*

La noche del 12 de octubre del 2019 un grupo de mujeres con faldas cortas, escotes profundos y cabello suelto se tomó el espacio público en una esquina estigmatizada del centro de Duitama, Boyacá. Desafiando las frías ráfagas de viento que ese día azotaban el sector, irrumpieron gritando arengas y luciendo sus tacones, lentejuelas y maquillaje de colores. Con sus cuerpos interpretaron bailes y movimientos sensuales entre las aceras y las señales de tránsito de la carrera 19 con calle 17 de esta pequeña ciudad boyacense. Ese día este lugar se volvió el escenario de su *performance*: el *Kabaret transfeminista*.

“La calle es el único espacio al que fuimos relegadas en esta ciudad, pero estamos decididas a invadir otros lugares. Utilizar toda la ciudad porque es nuestra. No solo tenemos que estar en la esquina de la 17 con 19, nosotras podemos estar en cualquier lugar, en cualquier restaurante, comiendo helado, en el centro comercial... Porque todas tenemos vidas, es importante que nos empoderemos y hagamos uso de esta ciudad como cualquier persona, es nuestro derecho”, expresó Annyka Becerra, una mujer alta, rubia, de ojos negros y tez blanca, que hace parte de la *performance*.

Annyka es reconocida por ser una de las primeras mujeres trans que adquirió visibilidad en este municipio, después de

asumir un liderazgo entre sus compañeras. A ella las mujeres trans le cuentan sus sentires y necesidades, que luego comunica a las autoridades de la localidad para pedir soluciones y cambios. Según ella, el *Kabaret transfeminista* no tiene precedentes. Por primera vez, dijo, son más que una presencia calificada como hostil por sus vecinos; ahora, son magia que engalana la noche de la llamada Perla de Boyacá, como se le conoce a Duitama.

Hasta finales del 2015, en la esquina de la 17 con 19 estaba ubicada la principal terminal de transportes de Duitama. Hoy, alrededor de estas calles, funcionan dos modestos hospedajes, una ferretería y un par de tiendas de abarrotes. En las noches del *Kabaret* la esquina de este cruce de calles deja de ser el lugar estigmatizado que muchos ciudadanos evitan transitar, por encontrarse desolado, sucio y abandonado, y se convierte en la pasarela del *Kabaret transfeminista*, una *performance* de las mujeres trans del municipio.

Durante la puesta en escena de aquel 12 de octubre las trabajadoras sexuales trans, apoyadas por otras de sus hermanas, brillaron no solo por sus ojos maquillados y sus sonrisas, sino también por su actuación. No tuvieron miedo ni vergüenza. Llegaron al escenario después de varios meses de estudiar, preparar y ensayar sus *shows*, porque querían exhibir sus talentos en la calle que es su sitio de vida y de trabajo, pero también el espacio donde las han violentado y donde las han invisibilizado. Por eso, gritaron con fuerza: “¡Nunca más!”.

Entrada la noche, esta ciudad conservadora que ha marginado a las mujeres trans fue testigo, por primera vez, de la esencia especial que las une. Así, Duitama empezó a saber de ellas a través del arte y la cultura, como una forma de cicatrizar sus heridas y demostrar que no son peligrosas, pero que sí están en peligro.

Annyka es una de las columnas vertebrales que desde la organización Femidiversas sostiene al equipo de artistas que hacen el *Kabaret transfeminista*. Es asesora de imagen, motivadora y chaperona. Mientras ella se subía al escenario extendía los brazos para ayudarlas a todas. Entre tanto, otras se persignaban y elevaban una oración a Dios, como lo hacen todos los días antes de salir a la calle, buscando protección divina para que ningún botellazo llegue a su humanidad, ningún golpe las lastime, nadie las encierre y nada las destruya.

Antes de salir a escena, revelaron algunas mujeres, sentimientos que emanan dolor y frustración invadieron sus corazones. Esas emociones les recuerdan la estigmatización a la que son sometidas, la misma que les dificulta encontrar trabajos diferentes a los servicios sexuales y el estilismo. Annyka aseguró que son pocos los momentos en los que sus amigas pueden caminar sintiéndose poderosas. El baile, las piruetas, el ritmo se convierten en liberadores de sensaciones, sentimientos, pensamientos, deseos y metas. Cada paso cobra un significado diferente para decir: “Aquí estamos, existimos y tenemos talentos”.

“Lo que yo haga con mi cuerpo no le afecta a nadie, a mí me lo dieron para hacer con él lo que se me da la gana, sin importar nada, eso no afecta en nada a mi vecino, a mi amigo, a la señora de enfrente, y hay que ser fuertes y sentar una posición”, manifestó Annyka. Sus palabras tenían como telón de fondo la canción de la cantante mexicana Thalía, que en las noches de *performance* se convierte en un himno de vida para estas mujeres.

Este sentido de identidad y libertad de expresión que ha adoptado el *Kabaret transfeminista* es fruto del empoderamiento que han asumido estas mujeres gracias a la labor de las organizaciones sociales Furia Transfeminista y Femidiversas,

que se unieron para apoyar la exhibición de las puestas en escena que liberan sus cuerpos.

Escena 2: Detrás del telón, Femidiversas

La *performance* del *Kabaret transfeminista* es una de las expresiones públicas de un proyecto que emprendió hace varios años un grupo de personas que querían cambiar la dura realidad de estigmatización y violencia que sufren las mujeres trans en Boyacá. A ese proyecto lo llamaron Femidiversas.

Las memorias escritas y audiovisuales de las trayectorias de estas organizaciones hacen pensar que las construcciones y los cambios que promueven colectivos como Femidiversas han sido fáciles de alcanzar, pero llegar a puntos como la puesta en escena del *Kabaret transfeminista* en Duitama es la materialización de una utopía.

Esta puesta en escena es el resultado de muchos años de trabajo académico y práctico. Femidiversas surgió en el corazón de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia —UPTC—, de Tunja, y de Astrid Castellanos Correcha, una mujer que por su labor con la población diversa en la región es considerada la madre de mil hijos, un título que lleva, según ellos mismos, por ser “cuidadora y amorosa, que rescata vidas y las apadrina en sus inmensos brazos”.

Astrid es médica de profesión y feminista de formación y vocación. Desde 1997 es docente en la UPTC, un oficio con el que apuesta por la construcción de una sociedad con más justicia social. Es defensora de derechos humanos, creó la cátedra electiva de medicina social para la misma universidad y en el año 2008 asumió la dirección de la Casa de la Mujer de la UPTC, un proyecto social con perspectiva de género, desde el cual implementa procesos de prevención de violencias

y protección dirigida, especialmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, población diversa y personas en situación de vulnerabilidad.

“Astrid me trajo a esta vida. Es mi madre, mi ejemplo y mayor apoyo, y para Femidiversas es pieza fundamental. Fue ella quien abrió los espacios para la comunidad LGBTQ+ en la Casa de la Mujer y fue ella con quien empezamos a consolidar la conformación de la organización como un hijito de la Casa de la Mujer. Ella es la mejor muestra de que la lucha debe ser transfeminista”, dijo Laura Zabala Ramírez, quien actualmente es la coordinadora de la Casa de la Mujer.

Laura tiene 36 años, es psicóloga, activista, defensora de derechos humanos y la fundadora de Femidiversas. Desde que era adolescente tuvo en su mente la posibilidad de liderar un proyecto de atención psicosocial con trabajadoras sexuales, pero fue solo hasta el 2014, cuando tenía 28 años, que ese propósito se convirtió en una realidad.

Su camino inició en una colaboración que hizo en Manizales como psicóloga, donde ayudó a consolidar el proyecto Armario Abierto y trabajó con Vanesa Londoño y Marcela Bedyoya, dos lideresas trans del Eje Cafetero. En esa región buscaron fortalecer las relaciones comunitarias de mujeres trans del sector de la terminal de transportes, lo que dio paso a la iniciativa *Ni putas, ni travestis, somos unas guapas*. Esta experiencia le mostró el horizonte en la búsqueda de ese objetivo que se planteó desde la adolescencia.

“El proceso en Boyacá arrancó con Trabajadoras con Amor, proyecto dirigido a trabajadoras sexuales cisgénero de Tunja. Luego empezamos a ver convocatorias de otras organizaciones, como Fondo Lunaria, y en el 2017 decidimos crear una organización que fortaleciera a la población diversa de una forma más amplia; así creamos Femidiversas”, relató Laura.

Durante estos seis años de trabajo Femidiversas se ha consolidado en Boyacá como una organización que defiende los derechos de la comunidad diversa, mediante el acompañamiento psicosocial, la incidencia política y la promoción de espacios artísticos y culturales, como la *performance Kabaret transfeminista*, que organizó con sus aliadas de la Furia Transfeminista. Con su trabajo cotidiano, las integrantes de Femidiversas quieren interpelar las prácticas patriarcales y machistas, y las imposiciones de roles de género que afectan a la población LGBTIQ+ del departamento. En todo este trabajo, así como en el *Kabaret transfeminista*, Laura es un personaje que actúa tras bambalinas, pero como lo señalan varias integrantes del equipo de Femidiversas, ella es el corazón de la organización.

Escena 3: Luces, cámara, acción

Punta-tacón, punta-tacón, mirada profunda y besos al aire. Andra Hernández salió al escenario durante la presentación del *Kabaret transfeminista*. En ese momento del *show* las mujeres recordaron a las hermanas que ya no están y también agradecieron a las madres que cuidan cada cuadra de la zona donde las chicas ejercen un trabajo sexual.

En la primera línea que acompaña a Laura Zabala en Femidiversas están quienes han recibido formación y, en algunos casos, quienes han iniciado su transición de género, como Andra Hernández, quien es hoy una reconocida lideresa. Ella es una mujer que ha sentido públicamente cómo la sociedad acribilla a quienes son diferentes a los ideales hegemónicos del pueblo boyacense. Por eso asumió el compromiso de aportar para que haya cambios sociales con respecto a esta problemática. En la organización ella acompaña, escucha y ayuda a

las mujeres trans que viven agresiones por parte de las instituciones y de la sociedad.

Andra estudia derecho. Es inspiradora, tiene una voz dulce, pero un carácter firme. “Inicié en el activismo desde el 2013, cuando tenía 15 años, y fue a raíz de la violencia que viví al interior de mi familia, principalmente por parte de mi papá. Esto me llevó a pensar que no quería que otras personas sufrieran lo mismo. Que esperaba que ellas tuvieran acompañamiento. También trajo otras posibilidades, como caminar desde la utopía, entender que somos diferentes, cuestionarme. Es bonito por la incidencia de estar en lugares que nos habían negado y es satisfactorio abrir caminos en los que decimos aquí estamos, aquí está la resistencia trans, aquí estamos luchando por todas las poblaciones vulnerables”, comentó.

Su trabajo en la sociedad boyacense ha sido reconocido y destacado. Ya es un personaje público, como modelo ha posado ante las cámaras con su mejor ángulo, ha sido retratada en fotografías que ahora están exhibidas en las plazas del departamento, entre ellas la de Tunja, en el marco de campañas que promueven el respeto por la diferencia y la eliminación de las violencias contra las mujeres. En las imágenes han quedado plasmadas las carcajadas que muchas veces tuvo que ocultar, pero que gracias a un trabajo de base hoy puede expresar.

Andra dice que la labor de Femidiversas no se trata del asistencialismo para atender por un momento las necesidades más profundas de las personas, sino que se trata de permitirles construir un proyecto de vida digno, en el que puedan volar.

Escena 4: En la calle

Antes de comenzar otra de las escenas de la *performance*, el director del trabajo audiovisual *Kabaret transfeminista*, Jorge

Becerra, entregó las instrucciones precisas: “Cuando suene la música vamos a caminar como cuando estamos en Duitama. Pensando en que somos poderosas”. Luego de escucharlo, las mujeres trans que participan en el espectáculo giraron sus cabezas hacia los destellantes *flashes* de las cámaras fotográficas que comenzaban a retratarlas. Mientras eso sucedía, una cámara las filmaba a sus espaldas y ellas caminaban con un ritmo intenso.

Amapola Suárez es una de las mujeres trans que ocupa las calles de Tunja y de Duitama, y sus compañeras la describen como una artista creativa que se proyecta desde Femidiversas. En su cuerpo y su espíritu carga la lucha por la población que representa. Ella inició su autorreconocimiento de identidad de género en Argentina, uno de los países donde a través de luchas sociales las personas han conquistado más derechos para la población diversa. Allí adquirió bases suficientes para llegar a enfrentar la hostilidad de la sociedad boyacense.

“Empecé los procesos en Duitama, conociendo a todas las chicas trans que ejercen trabajo sexual, porque también ocupé la calle con ellas. Me he permitido estar en una cercanía y en sintonía distinta con todas ellas, lo que ha hecho que pueda reconocer el hostigamiento policial, la violencia institucional, las cosas por las cuales las chicas se quejaban. Desde el inicio me di cuenta de que todo era real y que hay desconocimiento de derechos”, relató Amapola.

Esta mujer no esconde su rostro, al contrario, lo proyecta desde la profundidad de sus ojos negros al hablar. Es altiva, sincera y apasionada. Ella lidera actividades artísticas y culturales, y el hecho de que entrega su tiempo en las noches trabajando con sus hermanas y exigiendo sus derechos ha forjado su carácter, el mismo con el que desarrolla argumentos de defensa y alerta sobre las injusticias que sufren.

Cuando llegó a Femidiversas, muy incrédula con respecto al activismo, entendió que era un sitio seguro, un espacio donde podría sentir confianza para hablar y escuchar. “Porque en muchas ocasiones no hay a quién decirle lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos duele... así que estar para escuchar y contener es muy valioso”, afirmó Amapola.

En su piel, en su ropa, en su voz, en cada salida artística que hace, Amapola lleva las banderas de lucha por la defensa de las demás compañeras, del activismo LGBTQ+, algo que la llena de orgullo, pero que también le produce temor, porque “nos acarrea cuestiones de inseguridad, persecución por parte de la policía, de la Sijín. Ha sido muy triste ver cómo han criminalizado a varias por estigmas sociales”.

En las oscuras calles que recorre todas las noches, Amapola es testigo de las enormes necesidades que hay a su alrededor, de realidades sociales como el consumo de droga, la violencia, la intolerancia, las mentiras, la corrupción, los hechos que se van difuminando por las esquinas a las que la institucionalidad no llega a atender, pero sí a desterrar, dijo.

Amapola ve más allá y al trabajar con la comunidad se ha dado cuenta de que cada persona tiene su propia potencialidad y de cómo eso puede ser la ventana para contar una historia, muchas historias. La música recorre cada parte de sus cuerpos. Sienten la fuerza que el arte en la calle les entrega. Al fin son libres. En sus movimientos no hay maldad, hay hambre de sentirse reconocidas como parte de la sociedad: “Cuando nos tomamos las calles hay quienes lo ven mal y hay quienes pasan y nos dan comentarios positivos, y es con esos comentarios que me quedo, porque se permitieron un momento de reflexión, de repensarse que hay otras realidades”, expresó Amapola.

A muchas de las mujeres trans que hacen parte de esta iniciativa, las mismas que hoy contonean sus caderas en el *show*,

les han sido negados diversos espacios. Vienen cansadas de golpear puertas y que no las dejen entrar. De pedir permiso y recibir como respuesta portazos en la cara. Ellas han decidido no esperar más y tomar las riendas de sus caminos, sin violencia, sin dañar, sanando desde cada movimiento artístico entregado al público distraído, atento o indiferente que pasa a verlas.

En ese proceso, las mujeres han aprendido que el arte ofrece muchas posibilidades para contar una historia que sea entendida por cualquier persona. Por esta razón, el trabajo de Femidiversas hace énfasis en el arte como una herramienta para que las mujeres hagan catarsis, expresen sus sentimientos y muestren diversas capacidades que les han impedido exhibir.

Escena 5: Un nuevo ritmo

El maquillaje no es un accesorio más, es un todo de composición y armonía de los cuerpos para rodear al público nocturno. En el escenario las mujeres trans que se apropian de la carrera 17 con calle 19, se paran bajo el precepto de que con amor se transforma el mundo y que algún día las tablas que pisen serán las de la sala de un teatro.

Mientras tanto, en el *Kabaret transfeminista* las parpadeantes luces sobre esta esquina del centro de Duitama abrieron paso al imponente arribo de una mujer esbelta, de mirada profunda, rizos negros, piel canela, labios gruesos y espíritu fiestero: Jahira Quintero, coordinadora de proyectos de Femidiversas. Ella es artista y una de las lideresas más fuertes del Equipo T (Equipo Trans de la Casa de la Mujer de la UPTC).

En su *show*, Jahira movió los brazos de lado a lado, subió la mirada al cielo, cruzó las piernas y luego puso a bailar la cadera con destreza, manteniendo un ritmo decidido, combativo y siempre alerta. La forma en que se movía denota parte

de su personalidad, la de una persona con experiencia de vida transfemenina que inició sus luchas por un hecho de violencia, hasta llegar a la Casa de la Mujer de la UPTC, donde encontró apoyo y hermandad.

Al bajarse del escenario, Jahira recordó cómo luego de pasar por una etapa en la que trabajó como estilista encontró en Femidiversas la oportunidad de hacer un trabajo de pregrado para la Licenciatura en Psicopedagogía sobre entornos inclusivos para la comunidad diversa al interior de la UPTC, sede central, con asesoría de Astrid Castellanos y Laura Zabala.

“Yo siempre destaco los papeles de mis compañeras, todas aportan muchísimo a Femidiversas. Mi rol es de coordinación de proyectos de Femidiversas. El estilismo fue por un momento crítico de mi familia, tengo la indumentaria para trabajar en eso, pero mi camino era ser psicopedagoga. Yo agradezco lo trans como se ha venido dando y el espacio que me entregó, porque yo no me veo trabajando en una institución. Mi esfuerzo desde lo social y en lo comunitario me dio el lugar que tengo”, explicó Jahira.

Jahira ahora es la presentadora de *La disidencia*, un espacio de opinión del periódico *El Espectador*; algo que para ella es fruto de lo que ha vivido hasta ahora, porque “desde el principio todo fue con apoyo de Femidiversas, y en honor a nuestra lucha he aprovechado la posibilidad de hablar libremente, pues antes de Femidiversas yo era de las que tragaba todo entero, de las que se burlaba de las activistas, de las que no sabía cómo defenderse”.

Detrás del telón: discriminación y violencia

“La discriminación a la comunidad LGBTQ+ parte del irrespeto por el otro motivado por estereotipos o prejuicios. A esto se

suma el consentimiento de toda una sociedad y, por tanto, el desinterés por enfrentar esta injusticia social. Según la Encuesta de Cultura Política (ECP) realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la discriminación (sexual, étnica y de género) no es uno de los motivos para resolver los problemas en las comunidades. Las personas están más motivadas por temas como el aumento de la inseguridad y las tarifas de servicios públicos, comportamiento que se mantiene desde el 2011 hasta el 2017”. Con estas palabras un diagnóstico publicado en el 2020 por la Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Género del Departamento para la Prosperidad Social de Colombia, dimensiona la raíz estructural de las violencias que se ejercen contra la población LGBTIQ+ en Colombia.

Según un informe de Colombia Diversa, en el 2020 el país registró la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra la población LGBTIQ+. El documento da cuenta de 1060 víctimas, de las cuales 333 sufrieron crímenes de odio basados en género. Este documento, además, denunció que hay subregistro “debido a que no existen investigaciones detalladas o respuestas transparentes por parte de los sistemas de información de las instituciones estatales competentes”.

El equipo de Femidiversas también desarrolla trabajos de investigación que aportan al análisis. Recientemente Lilith Cristancho Téllez y Jahira Quintero Rodríguez hicieron parte del equipo de investigación sobre violencias contra las mujeres jóvenes LGBTIQ+, recopilado en el libro *La gente me señala*, trabajo que también tuvo como limitación la deficiente información estatal sobre la violencia contra esta población.

No obstante, gracias a entrevistas y grupos focales adelantados por esta organización, se obtuvieron algunos datos importantes sobre la discriminación y las violencias que sufren las mujeres lesbianas y bisexuales. Dicha violencia se desen-

cadena desde el momento en que las personas exponen de forma explícita la orientación sexual, según el informe, por las concepciones religiosas que caracterizan a gran parte de las familias boyacenses. Como actores que ejercen violencia, el estudio menciona principalmente a hombres de la familia, sin importar su edad o su parentesco.

En lo que tiene que ver con bisexualidad, el informe señala que “la escuela suele ser el espacio donde inicia la expresión de género no normativa de las mujeres lesbianas y bisexuales, sin que estas niñas diversas sean conscientes de ello, y eso es básicamente la detonante de violencia”. Lilith y Jahira hicieron un apartado especial frente a la discriminación y las violencias que sufren las mujeres trans, en el que parten de datos que fueron recolectados mediante coloquios con catorce mujeres trans, entre ellas Annyka Becerra, quien dice que “casi todo lo que tiene que vivir una mujer trans es violento”. Según el informe, a las mujeres trans se les vulneran frecuentemente casi todos los derechos fundamentales, por ejemplo, la vivienda, cuando hay exclusión familiar.

Además, el informe de Lilith y Jahira indica que las mujeres trans sufren violencia física, simbólica, sexual y psicológica. Su principal agresor es el padre de familia. En las aulas de clase se agudiza la situación al no ser reconocida su identidad sexual en la mayoría de las oportunidades. En los espacios públicos las violencias se expresan porque “se notan trans”, situación que produce una constante tensión e incomodidad, y se expresa, por ejemplo, en la acción cotidiana de ir a un baño público donde son señaladas y juzgadas. Además, en este ámbito se hace énfasis en la violencia policial “que se suele asociar a las mujeres trans, específicamente con aquellas que ejercen trabajo sexual (que representan un porcentaje importante de mujeres trans)”, aclara el informe.

El documento agregó que acceder a un trabajo digno es una de las principales dificultades que ellas afrontan, debido a los estereotipos de género normalizados en la sociedad. Además, en relación con la salud, se les limita el acceso a diferentes servicios porque no aparecen en el sistema o porque la atención es apática.

Las investigadoras denunciaron, al final del texto, la presencia inesperada de la policía en el *show* del *Kabaret transfeminista*, realizado en Duitama el 12 de octubre del 2019, que hostigó a las mujeres trans para entorpecer el evento. A esta denuncia agregaron otro hecho ocurrido el 30 de enero del 2020 en la misma ciudad: “Cuando movilizaron policía y ejército para ingresar a la zona, como una respuesta exagerada, mediática y estratégica para viralizar el odio hacia nosotras en este espacio”. Ante estas situaciones, Femidiversas reaccionó con denuncias públicas y procesos legales para garantizar los derechos de la población diversa en Duitama.

Escena 6: ¡Sabotaje!

Avanzada la noche el escenario de la *performance* se llenó de humo blanco y luces de colores. Una bandera con los tonos del arcoíris ondeaba en el lugar, mientras, desde el discurso, las mujeres reivindicaban sus cuerpos, sus espacios y sus sentires, como una forma de asumir la propiedad de las calles y de sus propios seres.

La *performance* está colmada de coreografías milimétricamente preparadas y de arengas que rechazan la violencia y llaman a la solidaridad de género: “¡Siempre con las putas, nunca con la policía!”. Este tipo de mensajes, el cierre de la vía que impidió el tránsito vehicular y la incomodidad que algunos peatones expresaron durante el desarrollo del *show* atraje-

ron la presencia institucional que comenzó con el arribo de la policía a esta calle de Duitama. Luego llegaron un funcionario de la alcaldía, periodistas y varios transeúntes que juzgaban a las mujeres y pedían que se callaran y que las apresaran.

Algunos policías se enfrentaron con las mujeres trans, les pidieron que se vistieran, que se retiraran del espacio público y que le bajaran el volumen a la música. Al mismo tiempo, algunos vecinos del sector se burlaron de las mujeres, les gritaron “sinvergüenzas, inmorales, atrevidas, putas indeseables”. Por su parte, los periodistas grabaron a los funcionarios públicos que dijeron que el evento no estaba permitido, por lo que todas se debían retirar, y ofrecieron disculpas a la comunidad por tan “bochornoso espectáculo”. La noticia, a pesar de que fue emitida a altas horas de la noche, causó revuelo y logró presionar aún más para que se acabara el evento.

Sin embargo, las mujeres no respondieron con violencia, intentaron dialogar e insistieron con sus arengas: “¡No somos peligrosas, estamos en peligro! ¡Abajo la transfobia, abajo la transfobia!”. En ese momento fue cuando entró a mediar Juan Daniel Lamo, quien hace parte del equipo de derechos humanos que acompaña la *performance*. Su misión es consiliar y evitar a toda costa que las artistas del *Kabaret* sean agredidas.

“A nosotros no es que nos guste salir a marchar, no es que nos guste salir a defender derechos humanos, sino que lo vemos como una necesidad y hay que tener el reconocimiento de esas necesidades, de los derechos humanos y del apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad”, expresó Juan Daniel, quien encabeza las salidas de exigencia de derechos de las mujeres.

“Antes de empezar a hacer activismo, sexualmente yo era una persona muy reprimida; luego, por una experiencia personal, logré liberarme. Reconocí la necesidad de trabajar por las personas dimensionando un poco más ese trato indigno,

inhumano y degradante que hay para quienes son diferentes. Entonces, para mí, el paso por Femidiversas ha sido el conocimiento de muchos temas y el reconocimiento de muchas violencias que se ejercen”, afirmó Juan Daniel.

Aunque no es una persona trans ni es trabajadora sexual, este hombre ha logrado un alto nivel de empatía con las mujeres que hacen parte de este proyecto. Por eso manifestó que “las personas que ejercen trabajo sexual merecen respeto y dignidad, no son personas de segunda categoría; somos parte de una misma sociedad con múltiples variables”.

Escena 7: Encajes

Tras las tensiones con la policía y los funcionarios de la alcaldía, el *show* del *Kabaret transfeminista* pudo continuar. Sin embargo, en este punto el espectáculo tuvo un cambio de ritmo. Un chachachá de medios giros, fonomímicas y afinados gritos prolongados se apoderó del escenario. Cayeron las chaquetas y salieron los encajes. La sensualidad de Lilith Cristancho se hizo presente. Su línea de trabajo en Femidiversas es la salud, su espacio ha sido ganado después de muchas batallas en las que ha luchado contra servicios deshumanizados a los que se enfrenta la población trans cuando recibe atención en salud sexual y reproductiva.

De fondo suena la música. “Tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver”, canta Lilith. Ella inició su tránsito de género mientras cursaba entre el quinto y el sexto semestre de medicina. “Viví el tránsito de género al mismo tiempo que salí a trabajar. Esperaba que la forma en que me trataran fuera humanizada, pero resultó ser todo lo contrario: sufrí mucho con todo y los prototipos que

tenía que cumplir. Estar en un lugar en el que no te sientes cómoda y quieres aprender es muy complejo”.

Lilith es una luchadora, una mujer cuyos sueños radican en sus sentimientos de hermandad. En los mismos que nacieron gracias a Astrid Castellanos y la Casa de la Mujer de la UPTC, que la apoyaron para que no tuviera que vivir más violencias, para impedirlo, para denunciarlo, para contarlo.

Su existencia, desde mucho antes de que llegara al hospital, fue cosificada e hipersexualizada, y hoy en día es una mujer distinta a la de hace cuatro años, cuando ingresó a Femidiversas, donde creció, aprendió y perdió el miedo. Por eso Lilith expresó: “Más que ser un grupo sobre otro grupo, somos un acompañamiento horizontal por el respeto a la diversidad sexual”.

Escena 8: Justicia

Hacia el final del espectáculo, las mujeres hicieron una pausa en el *Kabaret transfeminista*. Detuvieron la música festiva, gritaron y exigieron justicia. El paréntesis era para recordar que todas las personas trans están de luto por el asesinato de odio de La Biopo, una mujer transgénero oriunda de Venezuela. El caso de esta víctima da cuenta de cómo muchas mujeres trans migrantes, que buscan oportunidades, no encuentran más opciones que el trabajo sexual, lo que las convierte en un blanco de odio social.

Amapola asegura que “la situación de La Biopo refleja cómo muchas mujeres deben salir adelante prostituyéndose o robando en la calle, ya que cuando ella quiso un trabajo diferente la rechazaron, la hicieron ir del sitio donde vivía, porque consideraban que no debía ubicarse dentro de otro rol en la sociedad. Con su muerte se demuestra cómo vivimos en un país negligente y que circula alrededor de una discrimi-

nación constante hacia la diferencia, que suele ser peor para los extranjeros por la xenofobia que se agudizada hacia las personas trans”.

El 28 de junio del 2021 fue un despertar diferente. En la madrugada un grupo de más de treinta personas asesinó a Adriana Díaz, La Biopo. Según narran algunas integrantes de Femidiversas que atendieron el caso, además de ser linchada con odio y sevicia, esta mujer no recibió protección por parte de la policía ni atención médica oportuna.

Sobre los hechos, las autoridades reportaron que después de un servicio Adriana habría intentado hurtar a un conductor de taxi. Posteriormente, el hombre buscó refuerzos para atacarla y la hirieron en varias ocasiones con objetos contundentes. El crimen ocurrió en el barrio Ricaurte, en el suroccidente de Tunja.

No obstante, también existe la denuncia de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo Trans), que por medio de las redes sociales difundió un impactante video que muestra a La Biopo tendida en el suelo mientras hombres armados con objetos contundentes le propinan golpes en la cara y el cuerpo. En las imágenes, añadió la fundación, se ve que los uniformados de la Policía Nacional no intervinieron para evitar que hubiera más violencia, por lo que la golpiza continuó durante varios minutos.

Luego de ser golpeada, La Biopo fue trasladada en una patrulla a dos centros asistenciales. Según la denuncia de la fundación, en el primer traslado le fue negada la atención, razón por la cual fue necesario realizar un segundo recorrido, que sumó más tiempo de auxilio médico, por lo que la organización afirmó que “el paseo de la muerte” hizo que se debilitara más su cuerpo y al final falleciera. “La mataron los taxistas, la policía, el sistema de salud, las instituciones, la sociedad, la

transfobia y la aporofobia”, expresó la fundación mediante un comunicado publicado el 28 de junio del 2021.

Desde Femidiversas aseguraron que a lo descrito anteriormente se suma el desconocimiento sobre la identidad de género de una persona a la que las autoridades llamaron por el nombre de la cédula y no como se reconocía en vida, revictimizándola incluso después de su muerte. Agregaron que el hecho demostró por qué muchas personas trans no se presentan a denunciar, ya que interpretan lo sucedido como el compendio de brechas de acceso a servicios vitales y de justicia, lo cual se vuelve insostenible cuando además se ve atropellada la dignidad.

“No hay voluntad política por parte de las instituciones. Desde el 2019 hemos venido denunciando ante las instituciones, denunciando ante la sociedad los atropellos y vulneraciones a las personas trans trabajadoras sexuales, más que todo en Duitama y Tunja. Hemos elevado esas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo hicimos el año pasado, pero las instituciones a nivel departamental y municipal no ponen atención a esta situación”, dijo Andra Hernández.

Hasta el momento, y pese a que después de su asesinato hubo tanto movilizaciones como acciones legales, no se registran resultados de capturas por parte de las autoridades frente a este crimen. “Para que haya violencia se necesita complicidad social y estatal, cuando la institucionalidad desconoce los derechos de la población le da el permiso y le envía un mensaje a la sociedad de que puede también violentar a las personas diversas, y esto ha llevado a que a nivel nacional, departamental y municipal se esté creando una necropolítica en donde las personas se creen con el derecho a quitar la vida, con el derecho a decidir cómo se debe vivir, cómo se debe morir e incluso cómo se debe ser hasta asesinada”, señaló Andra.

Escena 9: El *show* debe continuar

Sigue la música... “Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme... Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas”. Con esta canción de Gloria Trevi de fondo, comenzó a bajarse el telón. Los decibeles de la música también disminuyeron. El *Kabaret* acabó su función, pero el *show* no terminó. Sí, el *show*, el de cada noche y de cada momento de la vida de las mujeres trans, que siendo artistas no pueden tener un escenario de risa y baile diario, pues de alguna manera deben sobrevivir en la selva de cemento que las margina todos los días.

El *Kabaret transfeminista* terminó con un baile grupal de despedida en el que se repitieron el contoneo de las caderas, los guiños y los besos al aire con los que las mujeres quieren hacerle saber a la sociedad que están ahí. Así, desde el arte, esperan que algún día todos los transeúntes que pasan por la esquina de la 17 con 19 las vean como algo más que las personas trans que deben ser desterradas del terminal antiguo.

Al final de la jornada, se escucharon diálogos dispersos con algunos policías y espectadores que se tomaron un momento para reconocerse como seres humanos. En medio del maquillaje, las extensiones, las pestañas, los trajes y los tacones, las mujeres sintieron que algo cambió dentro y fuera, pues más allá de la puesta en escena saben que en Duitama se han dado un lugar que ahora les permite tener conversaciones con la institucionalidad. De paso, las mujeres trans son conscientes de que han asumido responsabilidades frente a la lucha de derechos, porque aquí todas son lideresas y entre todas se representan.

“No deja de ser difícil pensarse en la calle sin tener grandes reflexiones; por ejemplo, el consumo conflictivo, porque se ven

muchas situaciones con personas llevadas de todo, y es como tener esa distinción de por qué camino me voy: el bueno o el malo. Yo veo a las compañeras muy responsables y con voluntad de saber manejar eso. No digo que no haya consumo, sino que ellas se ganan el respeto evitando esas cosas”, explicó Amapola.

Para Femidiversas quedan retos, desean crear otras iniciativas, como una cooperativa de trabajo, así como seguir ganando espacios como constructoras de paz, contra la impunidad y por una justicia más operante, lo cual no resulta nada imposible. Mientras haya Amapolas, Andras, Lauras, Jahiras, Liliths, Annykas, Astrids, Juanes, como los que tiene Femidiversas, hay esperanza de transformar la sociedad y hacer de cada calle un mundo, un escenario seguro para las mujeres trans.

Referencias

- Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. <https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contr-personas-lgbt/>.
- Departamento para la Prosperidad Social (2020). *Documento de diagnóstico sobre la situación de discriminación de la población LGBTI en Colombia*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documentos/Diagnostico-sobre-situacion-discriminacion-de-la-Poblacion-LGBTI-en-Colombia.pdf>.
- Fondo Lunaria Mujer (2020). *Investigación sobre violencias hacia las mujeres jóvenes LBT “La gente me señala”*. <https://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2022/02/ME-SENALAN-WEB.pdf>.

Baile exótico: una danza que protege a los jóvenes de Quibdó

Por Saulo Guerrero Córdoba

Saulo Guerrero Córdoba (1982). Periodista del Chocó, nació en Acandí y actualmente vive en Quibdó. Ha trabajado en Antioquia y Chocó como relacionista público de entidades del sector gubernamental y del área de servicios públicos, y como productor de contenidos en *Blu Radio* y *Radio Nacional de Colombia*. Se especializa en cultura, desarrollo social y turismo.

Jóvenes Creadores del Chocó es una organización artística, con sede en la ciudad de Quibdó, que les ha permitido a Katherin Gil, Yeisy Palacios y Jhonnyer Andrés Mosquera, junto a decenas de otros jóvenes, encontrar en el teatro y la danza la posibilidad de contribuir a la transformación de las realidades de la población joven de Quibdó. Según ellos, la práctica artística es un medio para hacer que se escuche su voz y para sobreponerse a la pobreza, la violencia, el racismo estructural y todas las barreras que amenazan el desarrollo y la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes del Chocó.

“Al compañero Luisao lo asesinaron saliendo del ensayo de Jóvenes Creadores del Litoral Pacífico, en el 2008. Faltaban pocos días para finalizar un programa de formación en el que estábamos”, recordó Katherin Gil García, una mujer que pone en práctica el activismo artístico en el departamento del Chocó.

Cuando mataron a Luis Henry Mosquera Díaz, a quien sus amigos llamaban Luisao, ellos participaban en un proceso de formación en teatro y acrobacia que ofreció el Ministerio de Cultura en la ciudad de Quibdó. Katherin recordó a Luisao como un muchacho sencillo, creativo e inteligente; como un líder nato, aficionado a la lectura, a las cámaras y a la comunicación. Estudiaba enfermería y quería ser profesional para ayudar a su familia, pero su mayor sueño era tener una productora audiovisual.

Katherin y sus compañeros de la Escuela de Jóvenes Creadores del Litoral Pacífico no entendieron nunca por qué a un muchacho soñador y con una vida tranquila lo mataron de esa forma. Fue un golpe duro para los 35 muchachos y muchachas que habían coincidido en ese espacio y que tenían en común el amor por el arte.

Katherin hizo una pausa en su relato. Suspiró como si quisiera desprenderse del dolor que le producía recordar. Se refirió a Luisao como un visionario que soñó con crear una organización como la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, que se constituyó en el 2011. Pero Luisao no pudo ver la

materialización de esas ideas porque lo mataron cuando caminaba hacia su casa en el 2008, una época en la que los actores armados del conflicto se ensañaron con Quibdó. De acuerdo con *Forensis*, una revista de divulgación de estadísticas del Instituto Colombiano de Medicina Legal, ese año ocurrieron 67 homicidios y la ciudad tuvo una de las tasas de homicidios más altas del país.

Los asesinatos, las fronteras invisibles, el desempleo, la violencia, el racismo estructural y la falta de oportunidades eran parte de la cotidianidad en la que transcurrían los días de los jóvenes que asistieron al programa del Ministerio de Cultura en la capital chocoana, que fue impartido por connotados artistas de teatro y acrobacia.

Fueron semanas con jornadas de trabajo intensivo, en las que se conocieron, pulieron sus habilidades creativas y representativas, e hicieron nuevos amigos. En ellos surgió el deseo de llevar al máximo nivel su talento y dedicarse al arte, no solo como un pasatiempo, sino como parte de sus proyectos de vida. “Veníamos como con esa sensación de que había muy pocos espacios de participación de nosotros los jóvenes, que había un bloqueo en esta idea de relevo y de diálogos intergeneracionales y que necesitábamos un espacio liderado por nosotros y para nosotros”, explicó Katherin.

Por otra parte, querían hacer que la práctica artística se convirtiera en parte de su proyecto de vida o en una herramienta para construirlo. Querían demostrar que sí es posible vivir del arte. Y sumado a esto, también se dijeron a sí mismos que esa apuesta debería poner al arte como un entorno protector de la vida de los jóvenes de Quibdó, para que ninguno más de ellos tuviera que morir asesinado, como Luisao.

Con esas aspiraciones en común se iniciaron en la actividad teatral bajo la dirección del maestro Eugenio Gómez, con

quien trabajaron en un proceso investigativo-creativo, del cual surgió la obra *Amangualados*, una puesta en escena sobre la vida y el fusilamiento, el 7 de mayo de 1907, de Manuel Saturio Valencia, un intelectual y abogado de Quibdó.

Amangualados fue la obra con la que comenzaron a viajar y a presentarse en escenarios tan destacados como el del Festival Petronio Álvarez de la ciudad de Cali, en el 2008, donde sus cuerpos en movimiento, sus voces proyectadas y los mensajes de denuncia de sus parlamentos calaron hondo y conmovieron a los espectadores, a causa del racismo estructural que aún pervive en Colombia.

Yeisy Palacios Robledo, una de las cofundadoras y tesorera de la organización, recordó la primera presentación de *Amangualados* en Cali: “El día del estreno, mientras presentábamos la obra, escuchamos una voz desde el público. Alguien gritó de una manera muy eufórica ‘¡Saturio vive!’. Eso nos puso la piel de gallina”. La persona que irrumpió desde la multitud fue Ventura Díaz, un periodista de Quibdó que fundó del periódico *El Manduco*. En las siguientes funciones ese grito se incorporó como parte de la función.

Durante los años siguientes el teatro se convirtió en el medio de expresión por excelencia de los Jóvenes Creadores; y *Amangualados*, en el montaje con el que participaron en festivales de Cali, Buenaventura y Popayán, en esta última ciudad fueron víctimas del racismo. “Fue una cosa muy dura para nosotros porque casi nadie fue a la presentación de Jóvenes Creadores del Chocó. ¡Claro!, porque en una ciudad apodada como la Ciudad Blanca tantos jóvenes negros hablando de racismo, hablando de las potencialidades de la gente negra, hablando de nuevos posicionamientos, hablando de la deuda del Estado con las poblaciones afrocolombianas, pues esto era muy chocante”, dijo Katherin Gil.

Pero lejos de desmotivarlos para continuar en el camino que habían emprendido, este episodio desagradable les sirvió para ser conscientes del reto que tenían: derribar el flagelo vergonzante del racismo. Por la experiencia vivida en Popayán se sintieron más motivados para denunciar los asesinatos hacia la población joven y el sinnúmero de violencias físicas y estructurales que sufren en el Chocó.

El nacimiento de Crearte

Luego de la gira por ciudades como Cali, Buenaventura y Popayán, después de haber sido víctimas del racismo, y ya de regreso a Quibdó, Katherin Gil, Sandra Vega y Yeisy Palacios, quienes hacen parte de Jóvenes Creadores del Chocó, iniciaron las Escuelas de Formación Artística Crearte, un proyecto que a la larga se convirtió en una de las canteras de artistas que se han vinculado a Jóvenes Creadores del Chocó.

Cuando comenzaron con Crearte su deseo era enseñar artes como la música, el teatro, la danza urbana y la danza folclórica en sectores marginales de la ciudad, donde vivían niños y niñas con escasos recursos económicos. Las integrantes de Jóvenes Creadores del Chocó querían que los menores aprovecharan el tiempo libre para aprender expresiones artísticas en su propio ambiente.

Empezaron a recorrer las comunas, a dialogar con los chicos que se encontraban, y se ingeniaron unas tomas callejeras de teatro, en las que les preguntaban a los niños: “¿Cuál es tu talento?”. Y a partir de ese momento comenzaban a explorar los intereses que tenían y buscaban la manera de encausarlos y abrirles un espacio en Crearte.

Encontraron como respuesta que a los niños y a las niñas les gustan el deporte y las manualidades, entonces crearon

un proyecto como resultado de esas caminatas, que tenía por nombre *Caminando juntos por la reconstrucción del tejido social en las comunas 5 y 6 del municipio de Quibdó*.

El abrazo de la comunidad

Esas caminatas hasta los barrios más alejados para cumplir con las actividades programadas como parte de las escuelas Crearte dieron frutos. La primera satisfacción fue el agradecimiento de la comunidad, cuando sintieron que los padres de familia los recibieron con los brazos abiertos en esos días en que los niños tenían ensayo.

Al principio, los profesores se intimidaban porque personas que hacían parte de grupos armados y controlaban los barrios daban rondas por los lugares donde se llevaban a cabo los ensayos. Pero luego —cuando fue evidente que el trabajo de Crearte no tenía otro objetivo que el de aportar a los proyectos de vida de los niños y las niñas del barrio por medio del arte— los grupos armados aceptaron su presencia.

Yeisy Palacios contó que uno de los procesos más significativos en los que participó tuvo lugar en el barrio El Poblado. Aunque no tenían financiación y los recursos salían de los bolsillos de las personas de la organización, sostuvieron una convocatoria masiva con los vecinos: hacían ollas comunitarias, celebraban la Navidad, el Día de la Madre y las fiestas con presentaciones del equipo de danza tradicional.

Los profesores de Crearte sentían que era riesgoso caminar por El Poblado. A veces, mientras ensayaban, a las afueras del colegio donde hacían la actividad había muchachos fumando marihuana o ejerciendo actividades intimidatorias. “En una de esas oportunidades una de nuestras compañeras los enfrentó y les dijo: ‘¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que esta-

mos haciendo acá es algo sano. Nosotros no estamos ni con ustedes ni en contra de ustedes'. Ellos mismos entendieron la dinámica. Ya era una comunidad que se involucraba de otra manera, ya eran esos mismos muchachos acompañándonos para que nada malo nos pasara, porque nos metíamos por unos atajos que eran bastante peligrosos, cargaban todas las cosas que llevábamos para este trabajo. Era una comunidad cómplice en su formación”, narró Yeisy.

Esta actividad en los barrios se dio de forma continua entre el 2012 y el 2014. Se convirtió en un escenario donde la danza urbana ganó protagonismo y se volvió tan importante como el teatro. Decenas de los niños que habían descubierto en las correrías por los barrios a través de Create ya hacían parte del elenco principal y participaban en las diferentes presentaciones a las que era invitada la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó.

Se puede considerar esta intervención realizada en los barrios como el primero de varios hitos en la historia de la corporación y una demostración de las capacidades de los jóvenes creadores del Chocó. “Yo creo que la intervención en el barrio El Poblado es un hito importante, porque fue la primera apuesta de credibilidad de la comunidad hacia nosotros. Íbamos dieciocho pelagatos que no teníamos ni siquiera uniforme, absolutamente nada, y la gente creyó en nosotros. Eso no fue de un día para otro; esa integración y esa complicidad se mantienen. Eso que pasó allá nos dio pie para seguir con la seguridad de que íbamos por el camino correcto”, explicó Yeisy.

Un hecho viral

De forma paralela a las escuelas de Create, los Jóvenes Creadores del Chocó desarrollaron sus propias creaciones, sobre

todo de teatro; obras como *Lamentos de un pueblo afro; Bojayá, masacre y olvido; Mambrú no va a la guerra; Este es otro cuento; Que tu primer amor sea el propio; El ratero chichipato*; y otra sobre los alabaos, gualfés y levantamientos de tumbas, llamada *Se habla de todo, menos del muerto*.

La partería creativa de Jóvenes Creadores del Chocó en sus inicios se dio, sin lugar a dudas, a partir del teatro, cada vez con nuevos montajes, como los ya mencionados, y poco a poco incursionaron en la danza, que hasta entonces era una expresión artística nueva para ellos y que ayudó a marcar hitos importantes en la historia de la corporación.

En Quibdó el baile es una práctica que realizan los niños, las niñas y los adolescentes para interactuar en el barrio con sus amiguitos. Es común, por ejemplo, verlos en las esquinas después de salir del colegio ensayando coreografías del que se conoce localmente como ritmo exótico, el cual es definido por Jeny Cifuentes, en un artículo publicado en la revista *Shock*, como una “música que se mete en el cuerpo y lo alborota, que hace bailar hasta al que no quiere, que sube la temperatura e incita contorsiones, perreo y alboroto. Así es el ritmo exótico, un estilo creado por los jóvenes en el Chocó, que ya explotó y que tiene invadido el departamento y quiere tomarse el país”. De ahí que la danza se haya ganado tan fácilmente un lugar en las parterías creativas de los Jóvenes Creadores del Chocó.

Para el 2016, con el crecimiento y la acogida en las comunidades de la ciudad, la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó ya gozaba de reconocimiento. Eran un referente, particularmente en el teatro. En ese año un episodio doloroso les dio, paradójicamente, el reconocimiento al talento de sus danzas.

La Casa de la Juventud de Quibdó fue el punto de encuentro para los ensayos. Era como su hogar hasta que, por circunstan-

cias que hoy todavía no comprenden, tuvieron que abandonar el sitio. A partir de ese momento, impulsados por la pasión que sienten, comenzaron a ensayar, literalmente, en la calle.

El Parque Centenario de Quibdó, escenario de las movilizaciones cívicas que durante años se han gestado en el Chocó, en reclamación de inversiones y dignidad para el pueblo chocoano, con su piso de cemento, que está lejos de parecerse al de un salón de baile, se convirtió en su nuevo escenario de ensayos. Sí, un salón sin paredes y a la vista de todos los transeúntes que pasan por ese lugar céntrico de la ciudad.

Ahí, en medio de la imponente Catedral San Francisco de Asís y del edificio del Banco de la República, ubicaban un parlante y sus pertenencias, y comenzaban a bailar; a repetir una y otra vez sus pasos, guiados por uno de los profesores, hasta perfeccionar las coreografías. Los ensayos muchas veces fueron interrumpidos por esos aguaceros fuertes que caen en el Chocó, que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban.

El hecho viral del que todavía se habla en Quibdó ocurrió el 9 de mayo del 2016, cuando los coordinadores de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó decidieron grabar y subir a su cuenta de Facebook el ensayo de una de sus coreografías en el Parque Centenario. En el video se ve a una veintena de niños y adolescentes bailando *La batea*, una chirimía tradicional compuesta por el maestro Chano Band a finales del siglo xx, en una versión alternativa, que mezcla el tema original con efectos y sonidos electrónicos.

Los movimientos ágiles de los bailarines imitaban la forma en que se usa la batea en la minería artesanal. Ellos no imaginaron que la publicación sería vista por más de un millón de personas que la comentaron y compartieron en las redes sociales. La viralización del video marcó un antes y un después para la corporación. “Esto nos llevó a dar un salto para

el cual aún no estábamos listos. Uno tiene que reconocerlo, no todo es perfecto. Uno sueña con muchas cosas, pero cuando le llega el momento... ¡Ey! No sabía que esto golpeaba tan duro, le toca a uno pararse firme”, reconoció Yeisy Palacios con respecto a la forma cómo vivieron ese momento de su historia.

Pese a que no estaban preparados para un salto a la fama tan notorio como el que se suscitó a partir de esa publicación, Yeisy manifestó que “fue bonito por el reconocimiento y porque eso se generó a partir de una adversidad. Jóvenes Creadores no tenía dónde ensayar, estábamos en un espacio público, del que tuvimos que salir. Empezamos a ensayar en las calles expuestos a muchos riesgos, y pasó esto del video viral”.

A partir de ese momento les llegaron invitaciones para participar en eventos nacionales y se acercaron personas como el músico y productor colombiano Iván Benavides, que puso sus ojos en ellos con la intención de ayudarles a proyectarse en nuevos escenarios.

Se volvió común dentro de la organización trabajar en la formulación de proyectos para intercambios, becas de estudios, pasantías, participación en concursos y festivales. Mostraron el talento de los jóvenes del Chocó a Colombia y al mundo. Compartieron sonoridades novedosas para el país, como las del ritmo exótico. Se convirtieron en embajadores de todo un departamento. A partir de la viralización del video, el baile urbano fue el principal medio de expresión con el que las personas relacionaron a Jóvenes Creadores del Chocó.

Ganadores del *All Dance*

El 2017 fue un año de explosión social en el Chocó. Durante dieciocho días, en los meses de mayo y junio, Quibdó, Istmina, Riosucio y otros municipios del departamento sufrieron una

parálisis total debido al Paro Cívico Departamental por la Salvación y la Dignidad del Chocó. La sociedad civil le reclamó al Gobierno nacional la atención de problemas estructurales que durante décadas han afectado al pueblo chocoano: exigieron la construcción de un hospital de tercer nivel, infraestructura educativa de calidad, la pavimentación completa de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, el cumplimiento de los diez puntos acordados con el Comité en el Paro Cívico del 2016, y defendieron el corregimiento Belén de Bajirá como territorio chocoano, un litigio que estaba activo en ese momento con el departamento de Antioquia y que finalmente se resolvió a favor del Chocó. “¡El pueblo se respeta, carajo!” fue el grito que los habitantes del Chocó emplearon para exigirle al gobierno que mirara hacia un territorio abandonado y con múltiples desigualdades. Como forma de presión, cerraron las vías de acceso al departamento.

Meses antes del Paro Cívico, los Jóvenes Creadores del Chocó fueron invitados a participar en el *All Dance*, un importante concurso en el que compitieron más de cuatrocientas agrupaciones de baile urbano, procedentes de todo el país, y que se celebró en Cali entre el 19 y el 21 de mayo del 2017. Fue la primera invitación a un grupo de bailarines chocoanos en la historia del certamen. De ahí la gran expectativa que tenían de asistir y dejar en alto el nombre de su departamento.

En los meses previos al evento, los Jóvenes Creadores del Chocó realizaron actividades para recoger fondos, pero debido al paro y a que las carreteras que comunican a Quibdó con Antioquia y Risaralda estaban cerradas, el viaje a Cali se complicó, al punto en que su participación en el concurso estuvo en riesgo de ser cancelada.

“Eso fue toda una hecatombe. Los muchachos estaban muy ilusionados, muchos de ellos nunca habían salido del depar-

tamento. El concurso arrancaba un viernes y era jueves, y no había soluciones. Era muy complejo, teníamos hospedaje, comida, habíamos pagado las inscripciones en dólares, pero no había cómo llegar, por todo lo que estaba pasando”, contó Yeisy emocionada.

Finalmente, el viernes los organizadores del paro hicieron una excepción con ellos y permitieron el paso del bus donde iban los bailarines de Jóvenes Creadores del Chocó, en compañía de una madre de familia. El vehículo salió de Quibdó a las siete de la mañana y esa misma noche tenían presentación a las siete de la noche en la capital del Valle del Cauca. En el camino el conductor se perdió, no funcionaba el GPS, algunos tramos estaban cerrados por derrumbes sobre la vía. Cuando llegaron a Cali el concurso ya había terminado.

Con lágrimas vieron salir del teatro a otros grupos con los trofeos en las manos. No tuvieron más opción que irse para el hotel a descansar, con el sinsabor de haber viajado más de doce horas y ni siquiera haber pisado el escenario. Pero como dice el adagio popular: al que le van a dar le guardan.

Esa misma noche, cuando todo parecía perdido, recibieron una llamada de los organizadores del evento, quienes les informaron que al enterarse de lo que les había pasado les permitirían presentarse al día siguiente, pero en la categoría de profesionales, aun cuando estaban inscritos en la de aficionados. Ellos, sin nada que perder, aceptaron el reto.

“Con ustedes, Jóvenes Creadores del Chocó”, anunció la presentadora en el Teatro Jorge Isaacs. “La gente se puso de pie”, recuerda Yeisy. En la primera escena entró alguien barriendo con una escoba. Las personas del público se miraban las caras extrañadas, como preguntándose “bueno, ¿y esto no es un concurso de baile?”. Segundos después sonó la música. La gente gritaba de sorpresa, unos bailarines que

venían a participar como aficionados les daban la talla a los profesionales. Los seguidores que habían llevado los otros grupos terminaron aplaudiendo a Jóvenes Creadores del Chocó.

Finalmente, lograron sumar el segundo puntaje más alto de todo el concurso, se alzaron con el primer puesto de la categoría de grupos y el segundo puesto en hip-hop adultos; además, obtuvieron con ello un pase a Orlando, Estados Unidos, para disputar la final mundial. “Fue algo muy bonito para la agrupación: haber logrado tan importante galardón en medio de todas las dificultades que vivimos”, recordó Yeisy.

“Ese mismo día yo estaba cumpliendo años y estaba cumpliendo dos o tres meses de haber ingresado a Jóvenes Creadores del Chocó. Cuando nosotros salimos a ese escenario, sentimos que una magia se conectaba con todos nosotros y la dimos toda. Todo el mundo quedó enamorado. Nosotros gritábamos, llorábamos, nos revolcábamos, todo el público se levantaba, nos aplaudieron durante media hora y nos hicieron una calle de honor con chirimía, con bunde, eso fue una cosa de locos”, comentó emocionado Jhonnyer Andrés Mosquera Valencia, bailarín de la corporación.

No era para menos, con todos los problemas que tuvieron durante el viaje, alcanzar un puesto alto en la competición se consideró como un acto de superación y templanza, dos valores que definen la vida de la corporación. El *All Dance* representó la primera vez de muchas cosas: fue la primera vez que pudieron llevar a los chicos fuera del departamento para hacer lo que les gusta; también fue la primera vez que un grupo del departamento estuvo en un concurso de esa magnitud; y marcó un hito por los logros que alcanzaron, que, dicho sea de paso, sirvió para que se le abrieran muchas más puertas a la corporación.

El arte como medio para la protesta

El 23 de abril del 2021 los artistas integrantes de Jóvenes Creadores del Chocó, preocupados por el aumento de los asesinatos en Quibdó, particularmente de jóvenes, salieron a las calles a protestar e hicieron uso de la danza y el teatro como un medio de expresión política y de denuncia.

El escenario fue la calle, donde hicieron una *performance* de danza frente a la Alcaldía de Quibdó. Al unísono movieron sus cuerpos, expresaron la rabia y la impotencia que les produce la pasividad de las autoridades frente al accionar de los violentos, que para ese momento estaba exacerbado: solo en Quibdó, en los primeros meses del 2021 habían asesinado a 40 personas. Los Jóvenes Creadores del Chocó se declararon en resistencia artística y cultural permanente, hasta que no se convocara en el departamento a un gran diálogo nacional para proteger a la niñez y a la juventud chocoana.

Esa mañana del 23 de abril, los transeúntes de la carrera segunda de Quibdó se vieron sorprendidos con una escena: tres cuerpos tendidos sobre tres camillas, cubiertos con sábanas blancas manchadas de rojo. Detrás de ellos, dos bailarines sostenían un pasacalle que decía “sos. Quibdó”. A un lado de cada camilla otros mensajes decían: “Soñaba con ser el mejor bailarín del mundo”, “Soñaba con ser médico para salvar vidas” y “Soñaba con ser futbolista”. De fondo sonaba la canción *¿Quién los mató?* de Hédrix B, Junior Jein, Alexis Play y Nidia Góngora, un tema que repudia el asesinato de 5 niños ocurrido el 11 de agosto del 2020, en un cañaduzal del barrio Llano Verde, en Cali.

“No queremos un muerto más, este pueblo ya no aguanta más”, dijo Yeisy Palacios durante la entrevista que le hizo un medio local y que fue transmitida en vivo por Facebook Live. Sus voces, sus puños levantados hacia el cielo, la expre-

sividad de sus rostros, los carteles con mensajes desgarradores que buscaban ser la voz de los caídos y sus reclamaciones al Gobierno nacional se convirtieron en noticia. Durante los días siguientes, la acción fue reseñada por medios nacionales, como *Las 2 Orillas*, que tituló “Jóvenes artistas de Quibdó se la cantan duro al Gobierno de Duque”; y como *Radio Nacional de Colombia*, que tituló “Con una intervención artística, jóvenes de Quibdó exigen responder por la violencia en El Chocó”.

“Nosotros, los jóvenes, colocamos los muertos y estamos cargando los muertos y no es justo. Estamos pidiendo más oportunidades para la juventud, estamos pidiendo más espacios de participación, estamos pidiendo protección para la juventud del departamento del Chocó”, explicó Katherin Gil, directora de Jóvenes Creadores del Chocó, sobre las distintas manifestaciones que han hecho en contra de la violencia.

Este acto fue apenas una muestra de la poderosa labor de los Jóvenes Creadores del Chocó. Sea en la calle, como el 23 de abril del 2021, en un salón de ensayos o en el escenario de cualquier teatro nacional o internacional, su arte habla de la realidad en la que viven, donde sienten que las instituciones les dan la espalda a las necesidades que tienen como jóvenes. Habla de las fronteras invisibles, de los asesinatos, del racismo estructural. Habla de la violencia intrafamiliar, del desempleo y de todos esos flagelos que los amenazan, pero también hablan de los sueños que los habitan y del deseo de comerse el mundo haciendo lo que más aman.

Una familia llamada Jóvenes Creadores del Chocó

“El arte es un entorno protector, transformador y generador de acciones de convivencia pacífica al interior de las comunidades. Queremos que la institucionalidad abra sus puer-

tas para conocer la realidad de los jóvenes; no queremos más jóvenes asesinados. Queremos que el conflicto que hay en Quibdó cese. No queremos que los sueños de los jóvenes estén apagados en las cárceles, queremos y necesitamos a la juventud viva. Necesitamos un acuerdo humanitario ya para el departamento del Chocó, para proteger a la niñez y a la juventud”, fue el llamado vehemente que hizo la directora de Jóvenes Creadores del Chocó, Katherin Gil, abogada de profesión, con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit como becaria de la Corporación Manos Visibles, una mujer con carácter, que desde muy pequeña mostró una tendencia a involucrarse en el trabajo social con jóvenes, como ella misma lo reconoce, quizá porque desde que era niña tuvo que ver cómo otros niños de su barrio terminaban instrumentalizados por los actores armados, en la vida delin cuencial o en las drogas.

Precisamente, gracias a ese liderazgo combativo y empoderado que ejerce Katherin Gil, al nivel de conciencia que ha desarrollado sobre las problemáticas que afectan a los jóvenes del Chocó y de la corporación, y que la han llevado a comprometerse con la búsqueda de soluciones, además de todas las experiencias que han vivido ella y sus compañeros, desde el 2008 hasta la actualidad, podría decirse que Jóvenes Creadores del Chocó ha tenido de dónde nutrirse y cómo desarrollar una personalidad propia como organización, gozando de un nombre como sujeto colectivo político que impacta en el Chocó y en todo el Pacífico.

Por todo eso es que Jóvenes Creadores del Chocó se constituye para sus integrantes en una familia, más allá de perfeccionar sus habilidades artísticas; porque en la corporación aprenden sobre civismo, hermandad, cuidado, amor, además de que avanzan en la construcción de un criterio propio, en el

desarrollo de posturas críticas y reflexivas sobre su entorno y su realidad, fortalecen su autoimagen, se sienten útiles para la sociedad y se les reconoce y se les hace sentirse importantes.

“Nosotros siempre hemos tenido abierto un diálogo, mirándonos como pares, sin importar cuál sea tu condición socioeconómica o en qué estatus de la sociedad te ubiques. Detrás de todas las personas que hacen parte de Jóvenes Creadores del Chocó hay un ser humano. Por ejemplo, si tú eres homosexual, no es tu orientación sexual lo que te define. No es el estatus económico lo que te define. Siempre nos miramos como iguales y es la oportunidad también de que cada uno se sienta identificado”, manifestó Yeisy.

Estos jóvenes conforman una familia en la que se les acompaña para que se llenen a sí mismos de la convicción suficiente para salir y enfrentarse al mundo pese a las dificultades, con un proyecto de vida por el que están dispuestos y dispuestas a luchar, porque les ayudará a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. “Jóvenes Creadores del Chocó es mi familia y eso no lo cambio por nada. Aquí tengo la oportunidad de ser yo para servir a otros. Cuando uno puede hacer lo que le gusta, no hay nada que te dé mayor satisfacción”, explica Yeisy Palacios.

La organización interna de la corporación da cuenta también de una estructura que prioriza lo colectivo. Está compuesta por tres coordinadores de las áreas artísticas: una persona coordina el área de danza tradicional; otra, el área de teatro; y una más, el área de danza urbana; y otra integrante hace el engranaje de todas las coordinaciones. Finalmente está la dirección general de la organización, que se ocupa de lo artístico y de lo administrativo. Son un equipo horizontal, sin subordinaciones, lo que ayuda a mantener la cercanía y la calidez en el trato que se dan entre ellos.

El caso de Jhonnyer Andrés Mosquera

Al llegar a uno de los ensayos de la corporación es difícil no entrar en situación: la música, el calor, los espejos que tienen el alto de la pared y que multiplican por dos todo cuanto hay adentro, los bailarines y las bailarinas moviendo su cuerpo al ritmo de una canción, el volumen elevado y una energía de hermandad entre los muchachos y las muchachas.

Los integrantes de Jóvenes Creadores del Chocó juegan de locales en este lugar, su sede en el barrio Tomás Pérez, en Quibdó, es su casa. Aquí, más que en cualquier otro escenario, son ellos mismos como corporación, como artistas. Al observarlos trabajar es evidente que uno de sus integrantes ejerce el liderazgo en la creación artística. Se trata de Jhonnyer Andrés Mosquera Valencia, que a sus 21 años se desempeña como bailarín, coreógrafo y coordinador creativo de la corporación.

Él, con una mirada, con un gesto, da las indicaciones para que el elenco de bailarines se aprenda un nuevo paso, una nueva coreografía, o impregne en los movimientos la carga expresiva que se quiere transmitir en determinada escena. Su estatura supera un metro con ochenta centímetros, su piel es negra azabache y en su rostro mantiene una expresión de seriedad, de tranquilidad, de calma, y de vez en cuando se le escapa una sonrisa.

Aunque nació en Quibdó, en el año 2014 su familia decidió irse a vivir al Ecuador y, paradójicamente, fue estando en ese país que supo de la existencia del grupo Jóvenes Creadores del Chocó, debido a la fuerte resonancia que, gracias a las redes sociales, comenzó a tener el ritmo exótico del Chocó en el país vecino. “Todo el mundo quería estar en este grupo. Yo desde Ecuador seguía y miraba muchísimo los videos, y compartía todos los videos que ellos subían”, afirma.

Lejos estaba de imaginar en aquel entonces que su familia regresaría a Colombia en el 2017, y que el sueño de hacer

parte de la corporación rápidamente se convertiría en una realidad. Fue por intermedio de una prima suya que hacía parte de Jóvenes Creadores del Chocó que Jhonnyer conoció al grupo en persona. “Ella organizó una fiesta para celebrar sus quince años, yo llegué a Quibdó justamente para esa fiesta y ella había invitado a todos los muchachos de Jóvenes Creadores. Yo le decía: ‘Maily, diles a tus amigos que me enseñen a bailar exótico’, porque yo solo sabía bailar salsa choque, que es lo que más o menos se baila en Ecuador”.

Recuerda que ese día los observó bailar en círculo en medio de la fiesta de su prima, y a los dos días ella misma lo llevó a uno de los ensayos, que para ese entonces se realizaban en la cancha del Colegio Departamental. “Había más de doscientas personas ensayando en esa cancha; y yo desde atrás tratando de ver a los de adelante qué pase ponían. Era bien difícil, con todo y mi altura; era tanta gente que uno no alcanzaba a referenciar al que estaba liderando adelante”, recordó Jhonnyer.

Fueron días difíciles, los ensayos eran multitudinarios y algo caóticos, pero Jhonnyer se fue envolviendo, ensayo tras ensayo fue creciendo su pasión, al punto de confirmar la imagen que se había hecho de ellos cuando vivía en otro país. “Yo antes miraba a Jóvenes Creadores del Chocó como un grupo muy fuerte, muy revolucionario, y los admiraba muchísimo por el gran eco que habían hecho con un género que no existía. Ahora, estando adentro, simplemente me convencí de que lo que pensaba sobre ellos era una realidad”, aseguró.

Ya lleva cinco años dentro de la organización a la que llegó siendo un fan, un adolescente que se acopló rápidamente a la dinámica del grupo: “Yo entré el 21 de marzo del 2017 y el 21 de mayo del mismo año participé en una competencia que había en Cali, como fue el *All Dance*”. Para ese momento y luego de haber probado con otras actividades, como el voleibol,

el béisbol y el fútbol, reconocía que había encontrado en la danza su vocación y su talento.

El propósito de escribir esta historia era descubrir la transformación que Jóvenes Creadores del Chocó produce en chicos y chicas que se vinculan a la organización. Como se ha mostrado, son muchas las respuestas a esa inquietud, pero el relato de Jhonnyer, quien es conocido como Lyon, es el que más refleja el impacto de las actividades artísticas en la vida de los integrantes de la corporación. “En mí, lo que más se ha transformado con mi paso y mi estadía en Jóvenes Creadores del Chocó es esa vocación de liderazgo; realmente esta corporación me ha enseñado tanto que hoy me siento y siento en otros que soy un gran referente, una persona que motiva, que impulsa, que transforma”, explicó Jhonnyer. Es evidente que los valores del colectivo están presentes en su forma de ser, de enfrentar el mundo, de reconocerse como sujeto político en una sociedad amenazada por la desesperanza y la falta de oportunidades, pero con muchas potencialidades.

¿Quién es Jhonnyer Andrés Mosquera Valencia? Es una pregunta profunda, a la que él respondió con un sentido que va más allá del movimiento exótico de su cuerpo, de la diversión, el entretenimiento y el espectáculo. Más allá de la conmoción de los sentidos y del aplauso exacerbado del espectador después de verlos entregarlo todo en el escenario: “Tengo 21 años. Nací en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. Orgullosamente pertenezco a la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó desde el 2017. Me considero y me describo como una persona muy talentosa, muy inteligente, un líder referente en el territorio, que día a día impulsa, se transforma para transformar y proteger a otros. Que ama profundamente el arte y que está convencido de que el arte es la ventana para construir paz, para protegernos unos a otros y

para construir un proyecto de vida”. Su respuesta recuerda la descripción que al inicio dio Katherin Gil sobre Luisao, el muchacho al que mataron en el 2008 después de un ensayo y que inspiró la creación de Jóvenes Creadores del Chocó.

Las mujeres campesinas y el arte de hacer una paz feminista

Por Carlos Antonio Mayorga Alejo

Carlos Antonio Mayorga Alejo (Bogotá, 1998). Comunicador social - periodista del Politécnico Grancolombiano. Investiga sobre el conflicto armado y la construcción de paz en *Verdad Abierta*. Fue periodista en *Rutas del Conflicto* y es miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, dirigida por Distintas Latitudes de México. Ha sido ganador de los premios owm Awards (2021), Premio Nacional de Periodismo Digital (2020) y del Fondo Howard G. Buffett del International Women's Media Foundation (IWME).

En el 2013, Marisol Coronado llegó a vivir a La Alcancía, una vereda del Líbano, Tolima. Se encontró con una comunidad rural dedicada al cultivo de café, donde las mujeres vivían las desigualdades y las violencias producto de la mentalidad machista de sus habitantes. Ella, que no puede quedarse quieta ante las injusticias, organizó un colectivo que se llama Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz, al que se han unido decenas de mujeres del Líbano. A través de la conversación, la pintura y la elaboración de artesanías ellas han establecido un lugar de cuidado mutuo, desde el que cuestionan las prácticas patriarcales que son visibles en su entorno.

El esmalte rosado resalta en las manos trigueñas de Marisol Coronado cuando las mueve con ritmo entre los granos de café de su cosecha. La fricción produce un sonido similar al de la lluvia. Sobre las camas de secado, ella separa los frutos más blancos y uniformes de los oscuros y brocados. A estos últimos se les conoce como pasilla y son una parte de la producción que, por supuesto, pierde valor por sus defectos.

En las fincas cafeteras, las mujeres suelen estar encargadas de atender a los hombres que trabajan en la recolección y el procesamiento del café. Algunas veces, participan en el proceso de cosecha, secado y selección del grano. Pero generalmente no obtienen ninguna remuneración por su trabajo. En La Alcancía, vereda del Líbano, Tolima, Marisol Coronado recibe la pasilla como forma de pago, y con su venta logra hacerse a unos cuantos pesos.

Marisol, quien tiene pelo castaño y labios delgados, no se conforma con la pasilla. Ella sabe que en la cosecha las mujeres han sido víctimas de la desigualdad y el machismo. “Uno ha trabajado a la par con ellos. Uno tendría derecho a decidir en qué se va a gastar la plata del café que de verdad vale y que le digan: ‘Tome, esta parte es para usted, vea a ver en qué la invierte, ise la ganó!’”, dice ella, mientras trabaja en un invernadero de cinco metros de largo por dos de ancho, ubicado al pie de su casa, en la vereda La Alcancía.

La realidad que retrata Marisol es común en la ruralidad colombiana, donde es evidente la desigualdad económica entre hombres y mujeres. Según un informe que publicó el De-

partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2020, las mujeres del campo trabajan en promedio doce horas y cuarenta y dos minutos todos los días, pero el 62 % de ese tiempo no es remunerado. En cambio, los hombres laboran durante once horas y treinta minutos, y reciben dinero por el 73 % del tiempo trabajado.

La vereda La Alcancía, donde vive Marisol, está ubicada en las montañas del norte del Tolima, a 35 kilómetros de distancia en línea recta del volcán Nevado del Ruiz. Son las primeras horas del día, es una mañana fresca, pero entre los plásticos transparentes del invernáculo, donde se seca el café, hace una temperatura tan alta que recuerda el calor húmedo de las selvas del Pacífico colombiano.

“Las mujeres del campo... yo no sé si somos muy nobles o muy huevonas”, se ríe Marisol. Lo dice por su propia experiencia, pues ella gasta el dinero que recibe en cosas para los hijos o el hogar y no en satisfacer sus propias necesidades, como comprarse un vestido o darse un gusto. “¡Una nunca piensa en una!”, remata su comadre de ojos despiertos y cara redonda, Yaneth Lozano, del otro lado del predio. Marisol y Yaneth hacen parte de un colectivo de mujeres campesinas del Líbano, Tolima, que desde el arte y con su identidad campesina quieren aportar a la paz del municipio. Ellas resisten al machismo en ese rincón escarpado de Colombia.

Llegó el arte

Marisol tiene 48 años, y es técnica en administración y guianza turística. Nació en Santa María, Huila, y la criaron en Neiva, en donde creció con sus tres hermanos y su hermana, bajo el orden de un matriarcado que se ha mantenido durante generaciones. Según ella, a las mujeres de su familia la gente las recuerda por la generosidad y el ímpetu.

Su proyecto de vida siempre lo han movilizado la búsqueda de un cambio desde el trabajo con comunidades y la confianza en que puede aportar para que la situación de la gente mejore. “Los temas feministas se han desarrollado más en la academia, los profesionales, pero la gente de abajo, que es la que debería saber, no tiene acceso a esa información. Yo pienso que eso tiene que llegar a los territorios. Cuando preguntan cómo hacer para llegar, yo les digo: a través del arte, la música, la pintura, las artesanías; desde ahí se dialoga y se cambia el chip”, expresa Marisol.

Esta lideresa no tenía ningún lazo que la uniera con la vereda La Alcancía. Su llegada fue el resultado de decisiones espontáneas. En el 2013, cuando su marido se quedó sin trabajo, la familia vivía en el casco urbano del Líbano. “Teníamos a Tomás —el hijo menor— de un añito de nacido. A mí me parece que los niños crecen mejor en el campo y, como no teníamos nada que perder, le dije a mi esposo: ‘vendamos la casa y compremos una finca’”, recuerda Marisol.

Así lo hicieron y apareció Villa Andrea, el lote de cinco hectáreas ubicado sobre la colina en donde viven hoy. Esa nueva vida lejos del pueblo les demandó aprender a ser campesinos, hasta que se volvieron como las otras familias de la región. “No estamos tapados en plata, pero vivimos muy rico. La finca produce, lo que pasa es que el comercio es muy malo... no hay equilibrio entre lo que se gasta y lo que se gana”, cuenta Marisol.

La casa de Marisol queda a unos cuantos metros de la cancha de fútbol de la vereda, por eso ella reconoció pronto que los jóvenes de La Alcancía tenían el deporte como única actividad de esparcimiento para practicar en el tiempo libre, una situación que le preocupó. Conoció en esos primeros meses a varios niños y jóvenes que pasaban por la casa para ir a jugar

fútbol; ellos la veían haciendo barro para las paredes de bahareque de su casa y pintando lienzos.

Así, a mediados del 2016, algunos niños empezaron a pedirle a la artesana que les regalara materiales para pintar como ella. Fue en ese momento que Marisol supo dos cosas: una, que muchos menores deseaban aprender, y otra, que esa era la manera como ella podía contribuir en su comunidad. “Yo no me puedo quedar quieta. Mi esposo me regaña porque yo no me puedo quedar quieta. Yo no puedo llegar a un lugar y ser indiferente ante las cosas que suceden. Yo tengo que actuar”, explica la lideresa.

Por eso, empezó a hacer arte y manualidades con 32 niños. “Con nuestros propios recursos comprábamos hojas, papel y pinturitas. Yo los citaba un día a la semana. Empezaron a venir a la casa, después buscamos un lugar afuera de la escuela y nos encontrábamos en las tardes, dos días a la semana”, recuerda Marisol.

Fue tanta la acogida que empezaron a llegar niños de varias veredas lejanas. “A nosotros, a mi familia, nos daba lástima porque ellos llegaban cansaditos, muchas veces al rayo del sol, entonces nos inventábamos un jugo de guayaba, limonada, a veces traíamos pan, a veces yo les hacía gelatina”, cuenta.

Hasta el casco urbano del Líbano llegó el rumor de que había una mujer en la mitad de las montañas que se inventaba todo tipo de juegos y actividades para la niñez de las veredas. A los vecinos del municipio les impactaba que Marisol lo hiciera desinteresadamente. Fue por eso que algunas personas que tenían negocios empezaron a aportar materiales didácticos, como pinturas, pinceles y refrigerios.

“Yo quisiera trabajar con todos, pero me tocó con los más cercanos; por la distancia los padres no los dejan venir y ellos tampoco pueden caminar tanto trayecto. Entonces hemos tra-

bajado con niños de Coralito, La Honda, La Helvecia y los de acá, los de La Alcancía”, precisa Marisol.

Uno de los intereses de trabajar con niños y niñas radicaba en evitar que tomaran decisiones que afectaran sus planes a futuro, y promover juventudes respetuosas, activas y con una identidad que se sirviera del campo para enorgullecerse. “Ese flagelo de la drogadicción es un conflicto que tenemos, y es que por todo lado andan ofreciendo a los jóvenes droga; ‘venga, le regalo esto, pruebe’. Nosotras también buscamos que, con esta formación, con este nivel de conciencia que hemos alcanzado, seamos capaces de hablarles a los niños sin miedo, sin tapujos, de todos esos peligros, para que ellos, si algún día caen, no sea por ignorancia”, señala Marisol.

El arte de las mujeres campesinas

Detrás de los niños fueron llegando las mamás. Con el pasar de los años, en el 2019, varias mujeres se empezaron a antojar de las actividades que realizaban los niños. Iniciar un proceso con ellas requirió un esfuerzo mayor, porque no aprendían tan rápido como los menores. “Nosotras empezamos con la pintura, con unos cuadros que pintamos”, cuenta doña Martha Isabel Aguilar, una mujer mayor que quería ser artesana y que descubrió en los talleres unas ideas feministas que nunca había escuchado en La Alcancía. Ella vive desde hace treinta años en la vereda, donde tuvo cinco hijos. “Llegué en busca de coger café... ¡y cogí más que café!”, dice entre risas doña Martha.

Las mujeres se citaban una vez a la semana para hacer los talleres. “Primero hablamos de empoderamiento, de valores, de derechos. Era un espacio de conversa donde teníamos la posibilidad de sacar cosas que las mujeres normalmente reprimimos en la casa y que no contamos. Entonces, entre chiste, recocha

y lágrimas salían todas esas cosas. Después de eso se sentía un alivio, de pronto no se nos solucionaba el problema, pero al menos una pudo contárselo a alguien”, recuerda Marisol.

Luego de estos círculos para exteriorizar lo que no se había podido decir, venía un espacio para alivianar el peso de los sentimientos a través del arte: artesanías en totumo, como aretes, lámparas y llaveros; o lienzos pintados en acrílico, porque los recursos no alcanzaban para trabajar con óleos. “A los artistas, desde mi punto de vista, lo que más nos impulsa a pintar son las pasiones extremas: el dolor, la rabia, la tristeza y el amor. Antes de empezar a pintar, hicimos una sesión de cuál considerábamos, a modo personal, que era la situación que más había marcado a cada una”, dice Marisol.

De este ejercicio salieron experiencias bastante dolorosas, muchas de las pinturas que resultaron de esas sesiones representan angustia y tristeza: rostros ensombrecidos llorando, otros con flores violetas que ocultan los ojos como si fueran golpes o mujeres completamente contraídas hacia su vientre. “Yo siempre les digo: ‘miren, con esto no van a ganar plata porque vivir del arte en Colombia es muy difícil y sobre todo si uno es humilde, si uno es campesino, pero igual se pasa muy rico. Feliz’”, concluye Marisol en el estudio de su casa. Así nació Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz.

Arte y comunión

La vía que conecta la vereda La Alcancía con el casco urbano del municipio del Líbano, Tolima, tiene una extensión de diez kilómetros, toda en tierra. Los campesinos se transportan en vehículos tipo UAZ¹ que recorren con prudencia la trocha y

¹ Jeeps modificados que prestan el servicio de transporte entre la cabecera municipal del Líbano y algunas veredas del municipio, los viernes y sábados. El valor del pasaje es de diez mil pesos.

que, además de transportar personas, van cargados con gallinas y plátanos amarrados sobre el techo. A medida que pasan por las veredas Coralito, Campo Alegre, Pomarroso, La Helvecia, Tarapacá, La Honda, Tierra Dentro, Delicias del Convenio y La Alcancía, los conductores anuncian con un claxon escandaloso la llegada de la encomienda que les enviaron desde el pueblo. Los caminos que conectan las veredas de esta zona del Líbano son trochas que cuando llueve se convierten en caminos de fango y charcos. “Eso lo sorteamos. Nosotros ya estamos acostumbrados a lidiar con eso”, concuerdan resignadas varias mujeres.

Las mujeres de la vereda La Alcancía no tenían un lugar fijo para hacer sus encuentros. Por eso se reunían en la casa de Marisol o en la cancha de microfútbol. A ellas no les prestaban la escuela para hacer sus actividades, y ante tal situación, construyeron un salón comunal con la ayuda de algunos vecinos. Es una construcción de seis por cuatro metros, con paredes de bambú seco, tejas de zinc y suelo de cemento. Algunos troncos de bambú están caídos, el piso se encuentra agrietado y hay un par de tejas despegadas. Allí trabajan las mujeres campesinas del Líbano, se encuentran y escapan de las realidades difíciles que viven como campesinas.

Antes de entrar, arriba de la puerta, se lee una advertencia que reza: “Si no vienes a dar el corazón, la vida, no te molestes en entrar porque a tu entrada comienza la salida”, una cita del poeta cubano Jesús Orta Ruiz, más conocido como el Indio Naborí. Al atravesar la puerta, en el centro del salón hay una mesa larga y amarilla con manchas de pintura, sillas plegables de metal verde y un tablero. Dos paredes están decoradas con dibujos de mariposas, aves y flores abiertas, como si buscaran zafarse, librarse. En los otros muros hay varios carteles coloridos con consignas: “Ni una menos”, “Con ropa o sin ropa, mi

cuerpo no se toca”, “Nos queremos vivas” y “Todas las mujeres merecemos ser valoradas y respetadas”.

Que las mujeres de la vereda La Alcancía tengan un salón comunal para sus reuniones no es garantía de su participación, pues muchas de ellas tienen que hacer recorridos largos por los caminos enterrados y esta situación se ha convertido en un obstáculo para su asistencia a los encuentros. “A veces era más fácil que yo me fuera hasta la casa de alguna de ellas. Yo me cargo las cositas en una mochila y llego allá. El esfuerzo es solo mío, si lo comparamos con que ellas tenían que venir varias y tienen que traerse a los niños porque el tema con sus esposos es difícil... Si se trata de asegurar mayor asistencia, me toca moverme a mí”, explica Marisol.

Ejemplo de esa difícil situación es Martha Isabel Aguilar, una señora de 58 años a quien le ilusiona la idea de ser parte del colectivo de mujeres. En una ocasión, camino al encuentro de mujeres, doña Martha encontró destruido el puente de guadua que atraviesa la quebrada La Honda. A ella le tocó cruzar sola por la corriente de agua.

Es el sábado 29 de enero del 2022. Las primeras mujeres que llegan al encuentro se ponen al día mientras esperan al resto del grupo: enseñan las artesanías que han hecho en los últimos días y hablan sobre la necesidad de hacerles mantenimiento al salón comunitario y a las trochas. Finalmente, llegaron siete, pocas para la totalidad de comadres que conforman el proceso. Se sientan alrededor de la mesa de madera manchada con pinturas y arañazos propios de las labores artesanas.

“¡No sé por qué no nos regalamos este tiempo que es tan valioso y tan maravilloso para nosotras! De acá salimos con energía para ir a la casa, recibir a nuestros hijos, a nuestro esposo, pero las mujeres son como muy renuentes a esto”, dice Luz Adriana Peñuela, una de las mujeres más entusiastas. To-

das concuerdan con que la situación de cada una es diferente, por eso intentan comprender y saben que algunas, por más que quieran asistir, no pueden.

Todas ellas han sido impactadas de alguna manera por el conflicto armado, pero la palabra *paz* que incluye el nombre del colectivo no salió de allí. Marisol reconoce que por más bucólicas que sean las pinturas del campo y su gente, nadie se escapa de los conflictos. A las mujeres del proceso las motiva la resolución de esos problemas. “Este espacio es un espacio de conversa, de diálogo, de escucha. Uno va hablando: ‘Yaneth, es que usted anoche me miró mal’. ‘No, yo no la miré mal, era un mugre en el ojo, usted pensó mal’ —ejemplifica Marisol—. Entonces, vamos aclarando esos malentendidos y se van limando las asperezas en torno a un trabajo que estamos haciendo y vamos mejorando nuestra relación”.

Cuando finalmente llegan todas, se ocupan de organizar las actividades del primer semestre del 2022. El plan es que en un futuro los aretes y las manillas que hacen las mujeres campesinas puedan ser comercializados mediante una tienda virtual, un sueño que ya no se ve tan lejano, desde que Marisol logró instalar el internet en su casa y abrió cuentas en plataformas virtuales de bancos para recibir dinero, aunque para eso necesitan tener un *stock* de productos. “Nos toca es ponernos a trabajar”, dice Luz Adriana acomodándose en su asiento.

Están terminando de aprender a tejer en croché para empezar con el macramé. El objetivo es sacar colecciones de bolsos de totumo y aretes. Y aunque no han empezado con el macramé, ya tienen un plan para después de eso: lo que sigue será hacer bolsos y cajas con calceta de plátano. Es un proceso en el que cada una da lo que puede: algunas ponen a disposición máquinas de coser; otras, como Yaneth Lozano, comparten sus

conocimientos para que sus compañeras puedan producir. “Yo no soy la más empapada en el tema, pero amo los tejidos. El macramé se basa en nudos. Nudos hacia la izquierda, hacia la derecha. Así se van formando las figuras y así se va formando cualquier tejido que usted utilice. Cuando estuve en el colegio una profesora nos enseñó a hacer unas cuantas puntadas, aunque yo hace mucho tiempo que no lo practico, ipero como ahora tenemos internet, ahí aprendemos todas!”, dice Yaneth, quien tiene 26 años y es madre de dos hijos.

La señal del internet es intermitente y entra solo en algunas zonas; mientras caminan entre finca y finca, muchas aprovechan para descargar contenidos de Facebook y enviar mensajes. El acuerdo fue aprovechar la conectividad de la casa de Marisol para ver todo tipo de videos que fortalezcan sus conocimientos.

El principal propósito de que las mujeres realicen manualidades, más allá de aprender, es que eso les permita generar un ingreso económico para ellas. Pero la comercialización es difícil y eso las desmotiva. Aun así, con las puertas que se están abriendo en Ibagué y el mercado digital, cierran la brecha para alcanzar ese sueño.

Líbano: un pasado de conflictos y violencias

Desde los años veinte del siglo pasado, el Líbano se posicionó como uno de los principales municipios cafeteros del país. A finales de esa década también mostró el talante revolucionario de los campesinos de la región, con lo que se conoció como la *revolución bolchevique del Líbano, Tolima*. Agricultores organizados adelantaron acciones para expropiar y redistribuir la tierra en 1929. Estuvieron en el poder durante un día y por ello fueron fuertemente reprendidos por las fuerzas del Estado.

El doctor en sociología política, Gonzalo Sánchez Gómez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) e hijo de ese municipio del norte del Tolima, dijo en el libro *Los bolcheviques del Líbano* que este capítulo de la historia del país “tiene el mérito excepcional de ser, quizás, la primera insurrección armada de América Latina en que un ejército de campesinos, con dirección y en alianza de sectores urbanos, se plantea el problema de la toma del poder en nombre de ideas socialistas”.

Las agudas necesidades del campo desembocaron en proyectos campesinos socialistas y comunistas, luego en resistencias guerrilleras ante la violencia de las fuerzas oficiales de gobiernos conservadores, de la dictadura del general Rojas Pinilla y del Frente Nacional en la década de los años cincuenta y sesenta. De allí el conocido nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— en el departamento del Tolima.

Desde los años noventa las FARC hicieron presencia en el municipio del Líbano a través del frente 21 Tulio Varón, del bloque Central. Después entró la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional —ELN— con el frente Bolcheviques del Líbano, que ocupó las montañas del municipio.

En la década de los ochenta aparecieron en la región las primeras estructuras de grupos paramilitares que en la década siguiente configurarían el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. Los enfrentamientos que se detonaron entre los paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública dejaron miles de víctimas. El Registro Único de Víctimas precisa que hasta abril de 2022 hubo 345.507 víctimas en el departamento del Tolima; y de estas, 18.949 provienen del Líbano. La huella de la violencia es especialmente recordada en el municipio con el desplazamiento masivo que ocasionó el enfrentamiento de las AUC contra las FARC y el ELN en agosto del 2003.

Hoy el Líbano es un municipio que respira paz gracias a la desmovilización del bloque Tolima de las AUC en el 2005, la desarticulación del bloque Bolchevique del ELN en el 2010 y el proceso de paz con las FARC del 2016. A pesar de que se cerraron las confrontaciones bélicas, varias regiones del departamento siguen marcadas por grandes deudas sociales.

Campesinas juntas contra el machismo

Muchas de las mujeres que hacen parte de este proceso social no se consideran lideresas. Aún están en el proceso de aceptarse como tales. “Esto es una vaina mutua. Yo veo cómo cada una lucha y eso me da resiliencia”, afirma Marisol. Se emociona porque siente indignación debido al desamparo que afronta su comunidad. “Las mujeres somos resilientes. Nos caemos y de una estamos mirando de dónde nos agarramos pa’ pararnos. No nos vamos a quedar ahí tiradas”, dice.

Las frágiles economías campesinas hacen que muchas familias, o a veces solo las mujeres, opten por irse de las veredas y se aventuren a buscar trabajo en las cabeceras municipales o las grandes ciudades. Esto ha contribuido a que los procesos feministas de la zona rural del Líbano tambaleen. “Yo le digo a mi esposo: ‘mire cómo es la vida, la gente del pueblo lo mira a uno feo, lo trata mal y lo peor de todo es que nosotros los campesinos somos los que les damos de comer a los del pueblo, eso es lo más triste’. ¿Y qué viene a hacer la gente del pueblo? La gente del pueblo viene al campo y no se va a ir con las manos vacías, ‘¡ay!, regáleme un racimo de plátano’, y uno les da porque somos amplios”, reprocha Yaneth Lozano.

Las que se quedan siguen cultivando pescados en pozos, criando gallinas y recogiendo café. Lo hacen con el regocijo

de sentir que viven bien, comen bien. Con orgullo se identifican como campesinas que tienen una vida demandante, pero en medio de todo más tranquila que la que se suele tener en las ciudades. Y las que llegan al campo van aprendiendo todo eso y desarrollando la característica más común del campesinado: su generosidad.

Así le ocurrió a Adriana Peñuela, quien hace dos años se mudó de Bogotá al Líbano. Cuando era niña vivió en el municipio, pero al terminar el colegio regresó a la capital. Años después se casó y el recuerdo de su vida como joven campesina fue haciéndose cada vez más borroso. Hace siete años su esposo compró una finca en la vereda La Alcancía. Algunas veces visitaban el lote y siempre lo encontraban caído porque, como dicen todas las mujeres del proceso, el campo hay que estarlo trabajando para mantenerlo bonito. Varias veces su pareja le decía que se fueran a vivir a su ranchito, pero fue la pandemia del covid-19 el factor final que los empujó al Líbano desde agosto del 2020.

Después de meses logró habituarse al campo, tras superar su miedo a las mariposas, los cucarrones y las arañas que pululan en cada pastizal. “Por acá la gente es maravillosa. Una gente muy especial. Le dan a uno más de lo que, a veces, no tienen. Me han acogido muy bien. ¡Acá estoy y acá me quedo!” , sostiene.

Cuando Adriana piensa en el proceso social no deja de agradecer lo que ha podido aprender, pues tal vez en la capital no habría conocido varios de sus derechos. No habría conocido a un grupo de mujeres que se reuniera para hacer arte y hablar sobre cómo romper con la cultura patriarcal, empezando por los comportamientos de ellas mismas.

En la cabeza de muchas se quedó la idea de que pueden ser más machistas cuando justifican que los hombres pasen por

encima de sus derechos, de la posibilidad de capacitarse, de socializar con otras mujeres o de tener sus propios espacios. “Muchas tenemos miedos, muchos temores. Tenemos muchas cosas guardadas en nuestros corazones, en nuestras almas. Todavía tenemos muchas cosas de nuestras abuelas y cosas muy metidas dentro de nosotros”, dice Adriana para señalar que ha sido difícil desaprenderse y volver a construir una realidad desmarcada del machismo.

“Hay que dejar de ser tan sumisas”, complementa Claudia Enciso, una joven mujer que se autoproclama peleonera y rebelde. Es madre de tres hijos, de once, ocho y cinco años. Vive con su esposo, un hombre de 66 años, en la vereda La Alcancía. Se ha dedicado a las labores del hogar y a algunos trabajos del campo, como guadañar y recoger café.

Este espacio representa para Claudia la posibilidad de cambiar su destino. Ella ha insistido en reclamar equidad para las mujeres de su comunidad, sobre todo desde que ha podido conocerlas mejor, y uno de los grandes logros del proceso ha sido acercar a tantas mujeres de diversos orígenes. “Prácticamente, no nos conocemos ni a nosotras mismas. No nos damos la oportunidad para conocernos”, sostiene.

Uno de los grandes obstáculos que afronta el colectivo son, por supuesto, los hombres, quienes desde su posición de poder patriarcal impiden a las mismas mujeres de la comunidad hacer parte de estos espacios. Según cuentan, hay algunos que creen que a los encuentros las mujeres van a chismear y que lo mejor es que ellas se queden en la casa cocinando y cuidando a los niños. “He escuchado comentarios de hombres que dicen que acá venimos a aprender mañas o a conseguir mozo”, dice Luz Adriana. La explicación que les dan a esos comentarios se encuentra en el machismo y la inseguridad que experimentan los hombres frente a la posibilidad de perder el

control sobre las mujeres de la comunidad si ellas aprenden y ganan autonomía.

En el 2021, las mujeres del proceso recibieron unos talleres de la Fundación Yapawayra, una organización que trabaja en el fortalecimiento de los procesos comunitarios a través de diversos enfoques; uno de ellos son los derechos de las mujeres. Además de las sesiones de aprendizaje, la fundación les entregó cartillas con diversas enseñanzas sobre el género; entre ellas, el respeto a la diversidad de las identidades de género o las rutas de atención en caso de que se presente un hecho de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Una de las sesiones que Luz Adriana recuerda mejor es en la que les recomendaban mirarse en el espejo, desnudas, y amar su reflejo. Antes, como ella lo confiesa, nunca lo había pensado como algo necesario para fortalecer su autoestima.

Por su parte, doña Martha no encuentra en este proyecto únicamente un aporte para sí misma, sino también para su hija, debido al abuso que sufrió. Durante un par de años, la hija de doña Martha vivió con un hombre y en ese tiempo él la agredió físicamente en repetidas ocasiones. Un día tomó la decisión de irse de esa casa, pero su agresor la amenazó diciéndole que si no regresaba la mataría a ella y a toda su familia. Una sicóloga de la organización Yapawayra la orientó y le recomendó que fuera a la comisaría de familia del municipio, donde deben cuidar su integridad y sus derechos. Según Yaneth, las rutas de atención eran desconocidas absolutamente por las mujeres campesinas de la vereda La Alcancía.

“Acá, en Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz, uno se ha empoderado de saber que como mujeres necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio... ¡Que nosotras también trabajamos! y que acá hay muchas mujeres que, mejor dicho, me les quito el sombrero, porque son unas *hembrononas*: que se

van a coger café, que tienen que tener el almuerzo listo, que tienen que ver las tareas de los hijos, y por acá muy pocos tienen internet”, cuenta Yaneth.

Claudia siente que algo descansa en ella cuando se reúne con sus comadres. A ese descanso le llama alivio. “Acá me siento relajada. Por medio del diálogo una se desahoga, se pone en los zapatos de la otra persona, una comparte muchas cosas. Una muchas veces critica, pero no se da cuenta de qué situación está atravesando”, dice Claudia. Así se ha dado cuenta de que siente solidaridad por las otras mujeres de su comunidad. Aprendió a valorarlas en su diferencia.

Las sombras y el miedo

Las violencias que produce el machismo persisten en el Líbano y las mujeres tienen miedo. En la memoria de Claudia se quedó el intento de feminicidio que sufrieron una vecina y su hija: la aparente pareja sentimental de la madre las hirió con arma blanca a plena luz del día, en la vía que conduce de la vereda Pomarroso a Campoalegre. Como a aquellas víctimas, el colectivo recuerda otro caso de una mujer de la vereda La Trina, otro de San Fernando y uno más de La Mirada.

En los últimos tres años, en el departamento del Tolima se han presentado 30 feminicidios, según la Red Departamental de Mujeres del Tolima. Esta organización advierte que el Líbano se encuentra entre los municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres. Y no tiene que tratarse de la muerte, la desaparición o la violación para sentir que la sombra del machismo sigue presente. Desde La Alcancía las mujeres resaltan, con miradas esquivas, que se pueden oír los maltratos en las casas de las veredas. Y un proceso tan disruptivo como el que lidera Marisol puede ser incómodo porque no

les conviene a los hombres violentos. Bien lo sabe ella porque no es la primera vez que agencia un proceso de tal impacto.

Marisol no descubrió el poder transformador del arte en el Líbano. Ni siquiera en el Tolima. Muchos años atrás, en el vecino departamento del Huila, junto con un grupo de amigos, ella creó un proceso social llamado Wawas de la Pachamama. La fundación trabajaba en la Comuna 10 de Neiva, una parte de la ciudad a la que, iniciada la década del 2000, llegó una numerosa cantidad de familias desplazadas desde diversas partes del país. “En esos años esa comuna tenía cuarenta y tres mil habitantes, y muchos barrios de los que se habían formado eran invasiones. Lo que hacíamos con esa fundación era que les pedíamos a los almacenes de cadena cosas de comer, y con eso les brindábamos a los niños un refrigerio por las tardes y empezamos a engancharlos a través del arte: macramé, luego danzas”, cuenta Marisol. También iniciaron una escuela de fútbol que alcanzó a reunir a 60 niños.

Aunque Marisol insiste en que no jalonaban a los muchachos para que abandonaran el consumo de drogas, las acciones de la fundación indiscutiblemente les restaban consumidores a las bandas de microtráfico, y es precisamente por eso que la lideresa justifica su salida de Neiva: los que manejaban las ollas empezaron a perseguirla y amenazarla. En poco tiempo le dijeron que si no abandonaba el liderazgo y salía del departamento, unidades paramilitares la iban a matar por subversiva.

Para aquella época, según *Verdad Abierta*, el Bloque Calima entró al Huila comandado por José Everth Veloza García, alias HH, por orden de Vicente Castaño. No había tiempo para pensarlo, sabía que cuando empezaba a correr ese tipo de rumores era cuestión de días para que la fatalidad llegara, como les sucedió a algunos de sus amigos que trabajaban en iniciativas sociales y fueron desaparecidos.

Marisol se fue rumbo al Tolima, deambulando de arriba abajo, hasta que paró en el municipio del Líbano y se quedó por un hombre que terminó convirtiéndose en su esposo y con el que tuvo a su hijo menor. “A veces sí he sentido miedo. He sentido miedo porque yo ya lo viví. Alguien que haga cosas, que busca abrirles los ojos a las personas, que les diga ‘no hay que dejarse’”. Por eso ella confiesa que por las noches, cuando ladran los dos perros que tiene en su casa, ubicada en La Alcancía, Líbano, pierde la tranquilidad y se queda sin dormir, en la oscuridad, imaginando lo peor.

Hacia un futuro feminista

Muchas mujeres víctimas de violencias no se apartan de su agresor porque no tienen para dónde irse, porque no tienen ni siquiera dinero para comprar un pasaje de flota y escapar de ese infierno. En un contexto en donde la violencia contra ellas continuaba siendo normal, debían aguantar, y aunque intentaran alzar la voz, nadie las iba a escuchar.

“Yo espero que podamos hacer de este proyecto un proyecto productivo, en muchas formas, pero sobre todo en lo económico. Poder algún día comercializar estos productos que las mujeres hacemos y que eso genere un dinero que pueda servirles a ellas para mejorar sus condiciones de vida”, dice Marisol mientras mira en su computadora las fotos que atesora de las personas que durante años han hecho parte del proceso, y de las artesanías que han creado sus comadres.

“Yo a veces sueño con ir a Corferias”, dice entre risas Marisol, quien se ilusiona con comercializar los productos en Bogotá e incursionar en mercados internacionales. Además, desea montar un taller bien dotado. Pero no siempre Marisol está brillando de sueños. Algunas veces se siente desanima-

da porque, por más que trabaja, parece que nada cambia; sin embargo, busca rápidamente la manera de salir de ese estado y de pensar en sus comadres, en lo colectivo. Piensa más allá de las veredas del Líbano y el mismo Tolima. “No somos las únicas”, se dice. Piensa en los congresos en los que ha compartido con mujeres del Cauca, Tumaco o Arauca. “¡Juemadre, no estamos solas! También hay mucha gente que piensa igual y está intentando hacer cosas”, dice esperanzada.

Marisol se queda en un silencio contemplativo después de cada nuevo clic con el que pasa las fotos en la pantalla. Sentada frente a la computadora de su casa, revive los recuerdos de cómo aquel proceso social, sin buscarlo, cambió a esa comunidad. La llenan los recuerdos, algunos tan brillantes como cuando llevaron a los niños y las madres de las veredas a elevar cometas que los mismos niños hicieron. Un espacio que nunca antes habían compartido ni como familias ni como comunidad. “Este proceso, sobre todo, ha despertado la solidaridad”, concluye.

Referencias

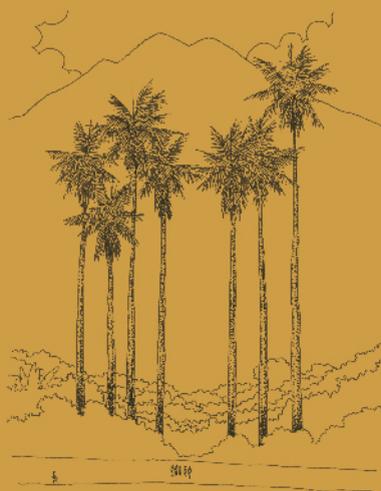
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *De los grupos precursoras al Bloque Tolima (AUC)*. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/BLOQUE_TOLIMA.pdf.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— (2020). *Mujeres rurales en Colombia*. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/sep-2020-%20mujeres-rurales.pdf>.
- El Tiempo (2010). Frente Bolcheviques del ELN en Tolima quedó desarticulado totalmente. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7708346>.
- Millán, A. (2017). Líbano, el pueblo de Colombia en que hubo una revolución bolchevique... porque no llegó un telegrama. *BBC News Mundo*. <https://bbc.in/3Q49tnl>.

Sánchez, G. (1976). *Los “Bolcheviques del Líbano” (Tolima)*. Bogotá: El Mohán Editores.

Verdad Abierta (2012). Las verdades del conflicto en Tolima. https://verdadabierta.com/images/Especiales/gran_especial/tolima/index.html.

___ (2012). El paso del Bloque Calima por el Huila. <https://verdadabierta.com/el-paso-fugazdel-bloque-calima-por-huila/>.

___ (2017). Bloque Central Bolívar: una máquina de guerra con ideario político. <https://verdadabierta.com/bloque-central-bolivar-una-maquina-de-guerra-con-ideario-politico/>.



“A pesar de los riesgos, esa gigantesca red se sigue fortaleciendo con miles de pequeños colectivos dispersos en barriadas y caseríos, y a ellos se debe, en parte, que exista alguna gobernabilidad en regiones donde poco o nada le conocen la cara al Estado. Allí, esos ‘dones’ y ‘doñas’ resultan más importantes para sus comunidades que un ministro, porque son quienes les ayudan a resolver los problemas que los otros quizá nunca conocerán”.

José Navia Lame

Periodista

Defender los pueblos

